

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
ESCUELA DE POSTGRADO



TESIS

LA CALIFICACIÓN REGISTRAL Y EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA ZONA REGISTRAL N°
XII – SEDE AREQUIPA.

Para optar el Grado Académico de Maestro en
Derecho Notarial y Registral

AUTOR

Bach. René Ramos Choque

ASESOR

Dr. Roberto Carlos Malaver Danós

Lima – Perú

2020

Dedicatorias

Dedico esta Tesis:

A mi hija que ha sido la fortaleza que me ha regalado la vida.

A mis padres que, confiaron en mí siempre.

A Dios, que me ha acompañado e iluminado en este camino llamado vida.

Agradecimientos:

Quiero dar las gracias a Dios por marcarme el camino.

A mi madre y padre por decirme como andar.

Y a mi hija por regalarme fuerza e inspiración cada día.

ÍNDICE

CARÁTULA	1
DEDICATORIAS	2
AGRADECIMIENTOS	3
INDICE	4-5
RESUMEN	6
ABSTRACT	7
INTRODUCCIÓN	8
I CAPÍTULO	9
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACION	9
1.1 Marco histórico	9
1.2 Marco teórico	10
1.3 Investigaciones	81
Investigaciones nacionales:	81
Investigaciones internacionales:	82
1.4 Marco conceptual	83
1.5. Marco Legal.	85
II CAPITULO	86
EL PROBLEMA, OBJETIVO, HIPOTESIS Y VARIABLES	86
2.1. Planteamiento del problema	86
2.2. Descripción de la problemática	87
2.3. Antecedentes	88
2.4. Definición del problema	80
Problema general	88
Problemas específicos	88
2.5 Finalidad y Objetivos de la Investigación	88
Finalidad	89
Objetivo General y Específicos	89
Objetivo General	89
Objetivos específicos	89
2.6. Delimitación de la investigación	89
2.7. Justificación e importancia del estudio	89

2.8. Supuestos Teóricos	90
2.9. Hipótesis y variables	91
Hipótesis Principal y Específicas	91
Hipótesis principal	91
Hipótesis específicas	91
2.10 Variables e Indicadores	91
 III CAPÍTULO	92
MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS	92
3.1. Población y Muestra	92
Población.	92
Muestra	92
3.2. Diseño utilizar en el estudio	92
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	92
3.4. Procesamiento de datos.	93
 CAPÍTULO IV	94
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	94
4.1. Presentación de Resultados	94
4.2. Contrastación de hipótesis	115
4.3. Discusión de resultados	119
 V CAPÍTULO	122
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	122
5.1. Conclusiones:	122
5.2. Recomendaciones	122
 BIBLIOGRAFÍA	124
ANEXOS	127
ANEXOS: 1 Matriz de Consistencia	128
ANEXO: 2 Encuesta	129

RESUMEN

El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal delimitar la relación entre la Calificación registral y el procedimiento administrativo disciplinario, debido a las decisiones que debe tomar el registrador al momento de ejercer su función, y ver qué clase de sanción puede recaer sobre el funcionario en cuestión.

El tipo de investigación que se pudo realizar fue explicativo nivel aplicativo; así mismo el método y diseño que se utilizó fue el expo facto, la población estuvo conformada por abogados conocedores de la materia y la muestra estuvo integrada por 200 abogados del Colegio de Abogados de Lima-Arequipa.

Utilizamos para la medición de nuestras variables la encuesta, la cual estuvo compuesta por 20 preguntas, esta encuesta fue validada por expertos en la materia.

Como conclusión se pudo arribar que la Calificación registral se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Palabras Calve: Calificación, procedimiento, registros, disciplinario, procedimiento administrativo.

ABSTRACT

The main objective of this investigation was to determine the relationship between the Registry Qualification and the disciplinary administrative procedure, due to the decisions that the registrar must make in the performance of his duties, and to see what types of sanctions can fall on this official.

The type of research that could be done was explanatory level of application; Likewise, the method and design that was used was the *expos facto*, the population was made up of lawyers knowledgeable in the matter and the sample was made up of 200 lawyers from the Lima Bar Association.

The survey was used to measure our variables, which was composed of 20 questions, this survey was validated by experts in the field.

In conclusion, it could be concluded that the Registry Qualification is significantly related to the disciplinary administrative procedure.

Key Words: Qualification, procedure, records, disciplinary, administrative procedure.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación titulada “La calificación registral y el procedimiento administrativo” tuvo como objetivo probar que la calificación registral es una evaluación de los títulos que se presentan en el día a día en Registros Públicos, resultando ser relevantes para el tráfico jurídico con nuestro país. Por esta razón consideramos que se debe investigar la función que desempeña el registrador público, por la trascendencia de su función, así como también la delgada línea que existe entre un desempeño intachable al momento de calificar determinados títulos como el observar aquellos títulos que no cumplan a cabalidad con lo estipulado en la normativa y son materia de análisis.

En esa línea de razonamiento lo que se trató de evidenciar con esta investigación es mostrar a plenitud la labor que cumplen los registradores en la oficinas de Registros Públicos y así establecer la relación que significativa que existe entre la calificación registral y el procedimiento disciplinario si es que hubiese algún comportamiento incorrecto por parte del registrador en la calificación de un título.

Respecto al desarrollo de esta tesis, está separada por cinco capítulos los cuales tienen los siguientes contenidos: Capítulo I. Fundamentos Teóricos, en este capítulo se fundamentarán las teorías de cada variable así como las posturas del distinto tratadista especialistas en este tema. Capítulo II. El problema, objetivos, hipótesis y variables. En el presente capítulo se describe la formulación del problema, los objetivos trazados y las hipótesis y la importancia de las variables. Capítulo III. Método, técnica, e instrumentos. Durante este capítulo se especificó la técnica que se empleó y el instrumento de recolección de datos que se utilizó para la aplicación de la encuesta. Capítulo IV. Presentación y análisis de los resultados en esta etapa nos sirvió para poder corroborar nuestros resultados y el último Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones, en este capítulo se pudo estimar los resultados que concluyen nuestra investigación y se proponen algunas sugerencias para la mejora del tema por medio de nuestras propuestas.

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACION

1.1 Marco histórico

Gonzales (2016). Sostiene, que cuando transcurría el siglo XIX, se generalizan los sistemas registrales sobre inmuebles, aunque de muy diversa magnitud y con eficacia, pues en ese momento, la teoría económica imperante se plasmaba en liberar el comercio, permitir el libre cambio extranjero, atraer inversiones, desregularizar las actividades económicas, abrir la producción a los operadores del mercado el crédito mediante sistemas modernos de garantía real. Como primera intención se fijó que el capital se dirigiese hacia los dueños de la tierra más no a los señores varones aristócratas del régimen antiguo cuyo único objetivo era hacer prevalecer su estatus, lo que se pretendía era el desarrollo de la burguesía con el único afán de generar ingresos. De esa manera el capital permitirá modernizar las explotaciones agrícolas e industriales a través de la tecnología, y con la consiguiente obtención de eficiencia que posibilitaría participar con éxito en un mercado con alcance global.

El registro tiene mayor incidencia con la necesidad de crédito a través de las entidades financieras destinadas a prestar capitales con garantía de hipotecas. En nuestro país, se buscó levantar o modernizar la infraestructura productiva, con la finalidad de que el sector empresarial se inserte en los mercados mundiales de la exportación o en el incentivo de inversión que coadyuve a industria o al sector minero. El registro se implanta, el Registro de la Propiedad, mediante Ley de enero de 1888, que a la letra dice: que es indispensable otorgar seguridad a los contratantes de propiedades inmuebles.

Gonzales (2016). Sostiene que, a mitad del siglo XX, se consideró necesario reformar el Código Civil de 1852, y para tal efecto, señalaba que la Ley de enero de 1888, había modificado profundamente el régimen del Código de 1852, ya que al disponer que no podrían oponerse a los terceros los derechos reales que no estén debidamente registrados, en 1925 el 9 de setiembre se acordó formular una consulta sobre el tema entre profesores de derechos Civil, Registradores

principales, y magistrados, estas opiniones decisivas hacia la reforma del sistema de la inscripción constitutiva.

El C.C de 1936, preservó la línea de la Ley de 1888, completada con algunos principios que fueron consagrados en reglamentos. Sobre los principios de cierre registral y tracto sucesivo. Principio de legitimación o presunción de exactitud. Por esta razón el código civil de 1936. Resaltó una tendencia clara y favorable al sistema registral de corte alemán.

Arias (2001). Manifiesta, a través del D. Supremo N° 95, de 1965 se dio la creación de la comisión para revisar el Código Civil de 1936. Luego de 16 años de trabajo en 1981, se culminó un proyecto nuevo cuyas características principales respecto:

- A. Los bienes se clasificaron en bienes registrados y bienes no registrados.
- B. La inscripción era constitutiva en el caso de los bienes registrados
- C. Se denominaría prenda a los bienes no registrados y la hipoteca se aplicaría a los bienes registrados.
- D. Se omitía toda la regulación del derecho registral, dejando que esta materia se abordaba de manera especial.

El Código Civil, en su libro IX otorga el tratamiento de los “Registros Públicos” cuya inspiración se encuentra en la Ley Hipotecaria Española de 1944 – 1946. se agrega al Código se perfecciona la regulación de los principios registrales e incorpora otras novedades como la inspiración del contrato de opción y el rechazo de solo poseer un bien como un derecho que puede inscribirse.

1.2 Marco teórico

Calificación registral

Rimasacca (2015). Sostiene que, es un juicio lógico, examen, verificación o evaluación de la documentación presentada, los cuales contendrán el derecho o que será materia de estudio para su inscripción, por parte de un funcionario, esto es, el registrador, aunado a ello la segunda instancia será el Tribunal Registral en aras de determinar si puede acceder al Registro del derecho presentado. En

tanto que se limite el acceso a la misma documentación válida y perfecta, tanto en la forma, como en el fondo.

En ese sentido, se estudia y analiza la documentación en su forma externa (aspecto formal), pasa por una concienzuda evaluación los derechos inmersos en el acto jurídico (aspecto material), corroborando el título con la documentación que obra en el Registro.

Aunado a ello, el Reglamento de RR.PP, señala que en el procedimiento de calificación, tanto el Registrador como el Tribunal Registral deben de crear facilidades para las inscripciones de los títulos que ingresan a los Registros Públicos.

Chico y Ortiz (2000). Señala que el primer paso será mediante la entrega de una solicitud para la inscripción adjuntando para ello, el título es así que se da el inicio al procedimiento registral; luego de ello, se da una verificación de su asiento registral, el encargado del registro, hace un estudio lógico y analiza los hechos y supuestos fácticos además ayuda con una subsunción jurídica y con ello elaborará su resolución al culminar este procedimiento: la práctica otorga dos caminos, la suspensión o denegación del asiento registral que se ha solicitado. Posteriormente el mismo autor y Sancho Rebullida añaden: "Se basará en un juicio valorativo, con el objeto de no declarar un derecho que se encuentre en controversia, sino para que se incorpore o no, de registrar una nueva situación inmobiliaria."

Peña (1999). Señala que la calificación registral consiste en determinar si la solicitud de un asiento registral, llega a registros con todos los requisitos que solicita la norma para que se puede registrar, en otras palabras si todo lo presentado se ajusta a ley, y en esa línea de razonamiento si se practica o no el asiento que se solicitó.

Tribunal Registral (2012). Se elaboró una serie de definiciones para la calificación registral en los términos siguientes:

Cuando se habla de calificación registral, se hace expresa referencia a esa evaluación que realiza el registrador con respecto a un título y todos los antecedentes que tuviera para poder así definir si puede acceder al registro. En esa misma línea de razonamiento establece que la calificación registral es un filtro por el que necesariamente tendrán que pasar todos los actos de manera previa a la inscripción registral de los derechos que de ellos fluyen. Básicamente la calificación registral consiste en evaluar, examinar, en confrontar. Se evalúa la documentación con respecto a la formalidad, y se evalúan los derechos contenidos en el acto, contrato y su validez, además una confrontación de los antecedentes con el título que se observan y figuran en el registro. En ese sentido el procedimiento se realizará con el título que observa el registrador, las partidas relacionadas directamente y además las que estén como complemento de los antecedentes. Sin embargo la calificación no queda con libre albedrío de las instancias registrales; está sometida a determinadas pautas que deben ser respetadas. Para Antonio Pau Padrón, entiende que la calificación jurídica es aquel riguroso control que se desenvuelve en una doble vertiente: el documento per se que ingresa al registro y la concordancia con los antecedentes registrales. De esta manera se desprende la función importantísima del funcionario público en el procedimiento de calificar registralmente, toda vez que se podrá determinar si el derecho llega a inscribirse.

RGRP (2014). Conceptualiza la calificación registral, en el art. 31, como el análisis completo de la documentación entregada al registro que tiene por finalidad delimitar de donde procede su inscripción.

Dentro de esa calificación registral, el Registrador en primer término y el Tribunal Registral, en segundo término, deberá realizar algunas acciones, como es el cotejo de los títulos con el asiento registral de inscripción; con los antecedentes registrales. Asimismo, entre otras acciones, deberá verificar la existencia de obstáculos y corroborar que el derecho o en acto que se quiera inscribir; aunado a ello, la documentación que configura el título, se adecuan a las normativas del asunto y además de ello acata la observancia de esas normas.

Amado (2018). Señala que, la calificación registral puede definirse como el análisis que el funcionario realiza acerca de la documentación y su legalidad, además de la eficacia de los negocios jurídicos contenidos en ellos.

García (1993). Indica que, la calificación registral consiste en el juicio jurídico de valoración realizada en este caso particular, el registrador a la documentación entregada al órgano registrador y diferente de los autores de la documentación.

Álvarez (2006). Señala que, la calificación registral determina la inscribibilidad del título presentado y la naturaleza del derecho constituido. Por razón de forma, se controla la idoneidad del derecho constituido. Por razón de forma, se controla la idoneidad formal del título presentado, por razón de legalidad, validez del acto dispositivo, y la naturaleza del derecho constituido; por razón del registro, la identidad de la finca, la competencia territorial del registro y del tracto sucesivo.

Caracteres de la Calificación registral

Rimascca (2015). Sostiene que, La calificación registral tiene características propias que están vinculadas a la labor del ente administrativo (Registrador) y/o el Tribunal Administrativo (Tribunal Registral), tales como que el análisis registral es con carácter independiente, autónomo, personal, obligatorio, integral, revisable y, sobre todo, está sujeta a una normativa, límites legales y bajo la entera responsabilidad de su ejecutor.

Chico y Ortiz (2000). Señala que, en su actividad jurídica el registrador: interpreta, califica y establece consecuencias jurídicas. Se trata de un funcionario público, pero las características de su actividad le separan como dice La cruz Berdejo de distinta clase de un servidor del área administrativa. (...) la particularidad de un funcionario que la ley hipotecaria le concede está encaminado a responsabilizar al registrador y someterle a un disciplina.

En tal sentido, agrega dicho autor, señalando que la calificación tiene los siguientes caracteres: "Es función de índole personal. Supone una actuación con responsabilidad personal. Es una función 'inexcusable', Es una función 'independiente' No es facultad delegable.

Atilio (1995). Señala que el rol calificador tiene caracteres particulares, tales como:

- a) Con funcionalidad de carácter independiente. Se destaca su particularidad autónoma del funcionario público (registrador) en sus funciones.
- b) Es completa e íntegra, por lo que necesariamente debe conocer a plenitud el hecho registral, cuando ingresa el documento.

Es una función obligatoria del registrador, que velará por su observancia, así se halle frente a la oscuridad o silencio de la normativa.

El Tribunal Registral ha pronunciado una opinión sobre carácter integral de la calificación registral, en los términos siguientes:

"El funcionario tiene la obligación legal de verificar la autenticidad del título. Esto es, deberá verificarse que el documento presentado no tenga indicios de falsedad, contrario censu sea un documento expedido por la Notaría o servidores públicos que otorguen la autorización.

Siguiendo el orden establecido por la norma se tendrá que hacer una verificación de los sellos del notario y de sus firmas, funcionarios públicos de corte administrativo en los registros, así ver que el documento no se encuentre con ningún tipo de adulteración después de la expedición de la certificación de firmas en el documento.

Por lo tanto, la calificación y su alcance del registrador y del Tribunal Registral, cada cual en su sede, se encuentra el verificar la autenticidad del documento, para lo cual, contrastará los sellos y las firmas de la entidad registral quien otorga la autorización con el sello y la firma que figuran en registros con los que cuenta a su disposición.

Debe precisarse, que la verificación en mención presupone la necesaria prevención que debe guardarse a efectos de evitar el ingreso de documentos falsos y/o falsificados"

Alcances

El art. 2011 del C.C y el art. V del Título Preliminar del Reglamento de Registros Públicos, son la licitud de la documentación en tal mérito se exhorta que se inscriba, la validez del derecho y la del título adjuntado con sus antecedentes registrales.

Legalidad de los documentos

Atilio (1995). Precisa que, los encargados por mandato legal de registrar se encargarán de calificar el marco de legalidad del documento en cuya virtud se realiza su inscripción. Esto significa que el registrador haga un análisis concienzudo de la legalidad de los requisitos de forma que exige la legislación, concerniente a la documentación la cual se esté solicitando su inscripción. El tal sentido la calificación comprenderá que se verifique la observancia de las formalidades particulares del título para su respectiva inscripción.

Chico y Ortiz (2000). Señala que la legalidad de la documentación de cualquier clase; es aclarada, por el Reglamento Hipotecario. El funcionario encargado de registrar estimará si faltó o no revestir de legalidad las formas que exige la ley para documentos de toda clase en cuyo mérito solicite existen inscripciones que afectarían directamente la validez de los documentos también la normativa que determina la forma, toda vez que los textos de estos documentos puedan evidenciarse con tan sólo la inspección.

Capacidad de los otorgantes

La calificación registral también significa verificar la capacidad de los denominados otorgantes, quienes hayan manifestado libremente su voluntad teniendo habilitado su discernimiento en el acto. El Código Civil establece la exigencia de la capacidad de ejercicio para intervenir en una relación jurídica y por ende poder llevar acabo los actos y negocios jurídicos de su interés por los particulares.

Por su parte, Chico y Ortiz señala conforme dice "Diez-Picazo, la Ley cuando menciona "capacidad" no se refiere únicamente a la capacidad jurídica, sino también a cualesquiera otras circunstancias dimanantes, como por ejemplo, de su condición personal o de su estado civil, que ejerzan influjos en la legitimación

y en el poder de disposición para que se realicen los negocios jurídicos (nacionalidad, existencia de prohibiciones legales, suficiencia de un poder de representación voluntad, aptitud del representante legal, etc.).".

Validez del acto

Calificar registralmente conlleva a revisar la validez del acto, ello teniendo en referencia al artículo 140 del Código Civil. Que establece los requisitos para que el acto jurídico tenga validez, cuando se refiera a partes notariales que incorporan en sus escrituras públicas negocios jurídicos. En ese sentido, se tomará en cuenta el art. 3 de la LPAG, que señala los requisitos para la validez para los actos, cuando se refiera a los documentos administrativos, aunque la calificación registral es muy restringida en este procedimiento.

Chico y Ortiz señala que "lo importante es calificar si cuentan con eficacia los requisitos de validez, mientras que si lo que se otorga para su inscripción es el título, o el contrato, la calificación registral debe recaer sobre la validez del mismo. En el caso de admitirse la inscripción del título y se publica el derecho, la calificación registral incidirá en el título y su validez, y en el aspecto real del derecho que mediante el mismo se trata de construir".

Adecuación con los antecedentes registrales

El alcance que tiene la calificación registral es evaluar los antecedentes registrales de las partidas electrónicas, dónde será materia de inscripción del derecho y a la vez se mostrará la partida registral que tiene una directa vinculación con el derecho, aunado a ello se complementa sus antecedentes. En esta última idea tenemos las partidas, los testamentos, las sucesiones intestadas teniendo como límite el servidor registrador, verificar los actos que se circunscriben a la inscripción de este documento.

Atilio Cornejo precisa que se deberá adecuar los antecedentes registrales con el acto inscribible toda vez que puede darse el hipotético caso " de presentarse algún inconveniente con respecto a los titulares o tal vez a los usuarios que se han visto vulnerados sea por alguna inscripción alcanzada por el asiento

registrar, por alguna anotación preventiva, alguna identificación del bien esto conllevará a denegar o también suspender la inscripción.

El Tribunal Registral ha pronunciado una opinión sobre el contenido y alcance de la calificación en los siguientes términos:

Por lo que estos lineamientos se encuentran establecidos en el título V, del título preliminar del Registro, el cual incide en el principio de legalidad, el cual señala que los registradores deben calificar la legalidad del título en cuya virtud se solicitará la inscripción. Esta calificación registral constituye verificar la observancia de la formalidad que emana del documento del título y a la vez que gocen los otorgantes de la capacidad que exige la ley, a la vez la validez del derecho que se encuentra en el documento configuraría la razón directa de la inscripción. En ese mismo sentido la calificación registral hace referencia al estudio y análisis de los óbices que se presentan en las partidas registrales y si es que podrían ser inscribibles sus derechos.

Calificación registral en su aspecto formal y material

La calificación registral principalmente evalúa el tema formal y material de la documentación que se encuentra en el título para una posible inscripción. El primer aspecto se refiere a las exigencias de que los títulos consten en instrumentos públicos (partes notariales, documentos administrativos y partes judiciales) o documentos fehacientes, garantizando que interviene un funcionario público que le otorga autenticidad.

Por otro lado el tema material del título, evalúa los requisitos que validan el acto jurídico inmerso en la documentación y sin perder en vista su naturaleza inscribible.

En ese sentido, el Tribunal ha opinado sobre la calificación de los aspectos formales y materiales, de la siguiente manera:

Si se otorgó una inscripción a un título determinado lógicamente se entiende que, una calificación registral de que si este documento se encontraba enmarcado en

la legalidad, entiéndase en su enfoque formal y material. En cuanto al enfoque formalista se exige que los títulos con instrumentos públicos o documentación que pueda ser corroborada. En ese sentido se da garantía de validez y certeza en la información toda vea que es el título importante, sin que ello desnaturalice que se inscriba. La calificación registral se da confrontando el título y su contenido con la información de las partidas registrales y complementadas con los títulos ya archivados

Calificación de las instancias registrales

La calificación en Registros consiste en el análisis de los títulos presentados a la entidad para su respectiva inscripción, esta función importantísima de la calificación se le ha otorgado al Registrador y el Tribunal Registral, actuando de forma personal, autónoma e indelegable, fijándose con los lineamientos establecidos por el Reglamento de los Registros Públicos y normas de carácter de especial.

Gonzales (2002). Señala que, en efecto, siendo la labor del ejercicio calificador autónomo, personalísimo y obligatorio, solo al Registrador y en su caso al Tribunal Registral, tendrá competencia para expresarse sobre la materia.

Diez-Picazo (1977). Señala: 'El Registrador no puede dudar en materia de calificación ni tampoco suspender su enjuiciamiento pidiendo consejo o parecer de la superioridad. Se entiende que la Ley es completa y que en ella se encuentra todos los requisitos indispensables para la calificación registral'

El Tribunal Registral ha señalado una opinión sobre la calificación registral de las instancias registrales, en los términos siguientes:

"A través de la calificación, el funcionario público, en primer término, o el Tribunal Registral, como segunda instancia, llevan a cabo la evaluación integral de los títulos otorgados a los Registros teniendo como finalidad definir de donde procede la inscripción.

En este trámite de la calificación, el registrador ejecuta varias funciones. Dentro de las cuales confrontará, una plena adecuación del documento con el asiento de inscripción, aunado a ello con los antecedentes, sin que ello menoscabe la legitimación. Asimismo debe cotejar si existen óbices que vislumbran en la partida que se quiere la inscripción. Igual modo de ver el título, se encuentran enmarcados en las normativas vigentes sobre la materia y además que tiene los requisitos exigidos por la norma.

Calificación de resoluciones judiciales

En la situación de que se quiera calificar registralmente alguna sentencia judicial o algún auto emanado de autoridad judicial y que en ellos se ordene su inscripción o anotación preventiva esta evaluación la realizará, el registrador y del Tribunal Registral de calificar y delimitar lo estipulado en el art. 2011 del C.C. En esa línea de razonamiento, el registrador no puede evaluar la motivación a la legislación del fundamento del mandato judicial. Solo se le otorga potestad para solicitar información al magistrado cuando se encuentre en algún numeral que impide inscribir el acto que se solicita sea por incompatibilidad o inadecuación del título con los antecedentes registrales.

Peña (1999). Señala que en determinado tipo de títulos, la potestad de calificación se encuentra restringida a cuestiones claramente señaladas: calificación de los mandatos judiciales se enmarcara a la competencia legal que tenga el juzgado, a la estricta y a la concordancia del procedimiento administrativo con la norma, a la formalidad extrínseca del mandato judicial presentado y a las vicisitudes que surgieran del Registro.

Álvarez (2010). Afirma que, calificar los actos y mandamientos judiciales, la función de la calificación registral está drásticamente restringida. Si la función registral es propiamente jurisdiccional ¿cómo pueden calificarse los actos y mandatos judiciales? Nótese que los jueces se dirigen a registradores y notarios por mandamiento, es decir, como subordinados y dependientes jerárquicos.

El Tribunal Registral ha manifestado una opinión sobre calificar registralmente los mandatos judiciales, en los términos siguientes:

"Respecto a calificar registralmente los mandatos que emanen de autoridad judicial, el artículo 32 del Reglamento de los Registros Públicos se precisa que en esta situación, 'el Registrador y el Tribunal Registral se enmarcaran a lo estipulado por el art. 2011 del C.C'.

Nuestro Código Civil establece que los encargados del registro de títulos o documentos, en primer lugar se encargan de revisar la legalidad de esta, en mérito de los cuales solicita la inscripción, la validez y capacidad de los otorgantes del documento, los antecedentes y los asientos registrales. Pero cuando se trata de mandatos judiciales que disponen una inscripción estas funciones de calificación no se aplica. En este escenario el registrador tendrá la facultad de pedir información al magistrado para que pueda complementar la información que tiene, sin que ello obstaculice el normal procedimiento.

Consecuencias de la calificación

Cuando haya culminado el registrador público de calificar de manera integral sobre la documentación presentada por el usuario, tendrá como resultado dos conclusiones: primero, la positiva calificación del título (poder inscribirlo) o una segunda conclusión, calificación negativa (tacha, observación o liquidación), con respecto al ingreso al Registro".

Calificación positiva (inscripción).

A. Inscripción de un acto o derecho rogado

La calificación positiva de un título involucra que este reúne todos los requisitos formales y materiales, así como se adecúa con el antecedente registral que tiene la partida sobre el cual va recaer la inscripción. En ese sentido, cumplió con el fin el procedimiento administrativo ya que se va inscribir en un asiento registral el título presentado, por lo que, se incorporará el acto rogado que se plasmaba en el documento al registro en una respectiva partida electrónica.

Chico y Ortiz (2000). Precisa que cuando la calificación registral es positiva se extenderá su asiento correspondiente. Señalando el contenido de la nota puesta al pie del documento, evidenciando así el derecho, y la especie del asiento,

incluye también el folio, el número de la finca y la inscripción correspondiente, cotejando los efectos y la protección judicial. Aunado a ello será una corroboración de los asientos cancelados ya sea por caducidad, o por el número de afecciones causadas por esa razón.

Peña (1999). Precisa que la decisión del registrador puede ser practicar el asiento solicitado en el título, inscribiéndolo de esta manera la propiedad en el Registro, en ese sentido se evidenciará una nota firmada por el que denote la calificación registral hecha y qué en mérito de ese hecho se ha realizado la inscripción, el titular de quién se practicó el hecho, su especie y su asiento.

Calificación negativa (observación, liquidación y tacha)

Una respuesta negativa al calificar el título adjuntado para su inscripción, precisa que este no es aceptado por falta de ciertos requisitos de forma y fondo, o es desechado por el funcionario cuando el título adolece de defectos subsanables o insubsanables.

Diez-Picazo y Guillon (1977). Señalan que "la omisión que puede subsanarse tiene un efecto suspensivo en el asiento registral y que se efectué una anotación preventiva. Lo que no se pueda subsanar obligará al funcionario a rechazar la inscripción solicitada, sin que se pueda realizar la anotación".

En consecuencia, la calificación negativa de un título trae como consecuencia la manifestación del funcionario público, sea observando, liquidación o una tacha del documento adjuntado para su inscripción.

Álvarez (2010). Precisa que la calificación "se asemeja a un acto jurisdiccional o administrativo: se ordena en fundamentación fáctica y jurídica; se exige motivación cuando es negativa, y ser notificada a los interesados, la calificación negativa del documento deberá notificarse al particular que presenta el documento, al notario autorizante); y se exige finalmente la aportación al proceso registral.

El Tribunal Registral se manifestó con respecto a la calificación negativa en los lineamientos que a continuación se detallan:

La calificación de los títulos, trasciende a verificar: si tienen validez los actos que se desprenden de los títulos y de su adecuación con los antecedentes registrales, únicamente se da antecediendo a la inscripción, ya que cuando el acto es añadido al Registro, no se podrá cancelar el asiento extendido sobre la base de una nueva calificación en esta ocasión, negativa, del título ya inscrito"

Órganos encargados de la calificación registral

Amado (2018). Sostiene que, el art. 31 del T.U.O del Registro, calificar registralmente es competencia del registrador público. En segunda instancia las observaciones elaboradas por el funcionario público, el Tribunal Registral. Igualmente, el Poder Judicial ejerce esta función calificadora cuando se hace valer el recurso impugnatorio señalado en el art. 158 del TUO del RGRP, concordante con el art. 48 de la Constitución.

Empero, el art. 5 de la Ley N° 26366 (Ley de los Registros Públicos y de la Sunarp, señala que las entidades que constituyen el sistema, tendrán solo la primera y segunda instancia registral. Tomando en cuenta los siguientes: el funcionario registrador y el Tribunal Registral. Careciendo de una "tercera instancia registral".

Y en el TUO del RGRP, con criterio similar, lo hayamos en el artículo 3, en ese orden de ideas: son instancias, dentro de todo el sistema de registros: el Registrador y el Tribunal Registral.

El dictamen emanado por el Tribunal Registral solo se podrá interponer demanda ante el Poder Judicial de naturaleza contencioso-administrativa.

Hagamos una concisa conceptualización de ellos.

Registrador público

Los funcionarios que cumplen el papel de registradores integran el sistema de registros, son seleccionados por el mismo órgano. Para poder ocupar el cargo

necesariamente se requiere ser peruano, además ser titulado y colegiado en derecho y a su vez aprobar el concurso público, hallándose monitoreado por la Sunarp, se encuentra detallado y señalado en la ley número 26366 artículo 6, modificado por la ley 30065.

El registrador público tiene la potestad de poder ordenar, calificar los títulos, suscribir las inscripciones, controlar la cobranza y expedir los certificados.

La trascendencia que hoy en día tiene un registrador en los distintas facetas no tiene asidero de discusión. En esa misma línea de razonamiento resulta indispensable saber la posición de un registrador dentro de un sistema. Así como rechtspfleger el alemán, el italiano o el francés.

Tribunal Registral

Teniendo la funcionalidad de responder como una instancia superior, toda vez que es un órgano colegiado. Para poder formar parte de ese colegiado la norma exige los requisitos que a la vez le exigen a los registradores. Esta institución depende de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y que tienen una competencia a nivel nacional, además es la última instancia en la vía administrativa, resolviendo las tachas u observaciones que se hayan presentado.

Siendo integrado de la siguiente manera:

- El Presidente del Tribunal Registral.
- Cinco Salas itinerantes y descentralizadas: tres Salas en Lima, una Sala en Trujillo y en Arequipa. Cada Sala está conformada por 3 miembros: el presidente y dos vocales.
- Las Salas Transitorias.

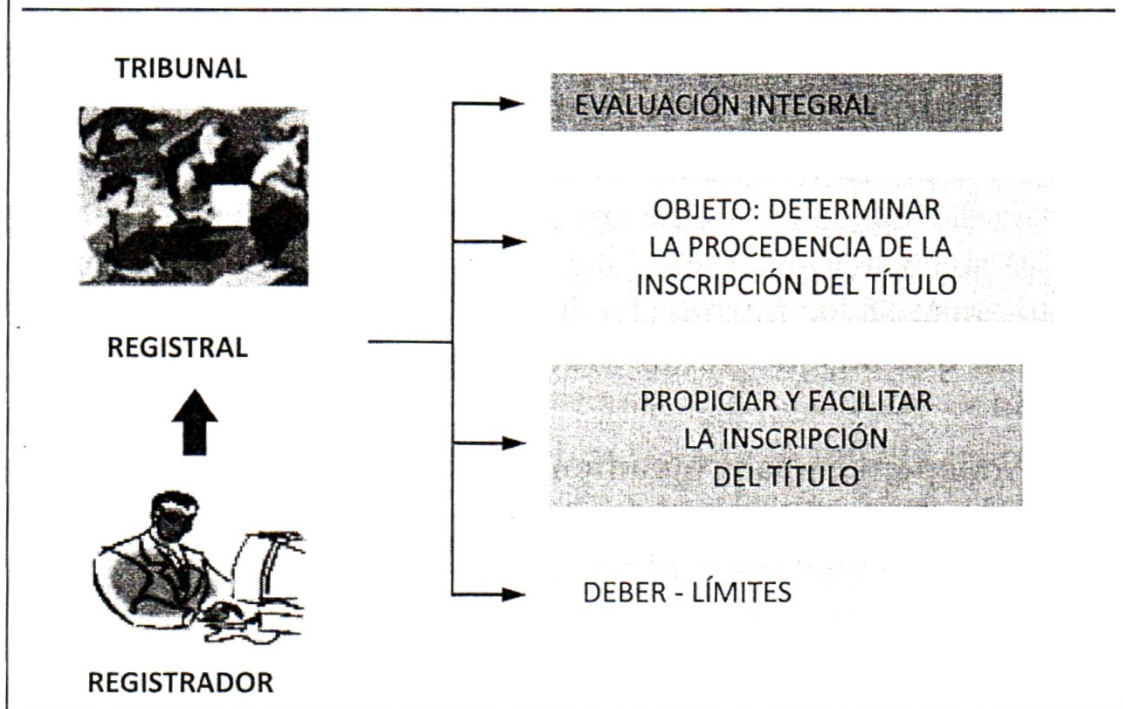
Los vocales conforman el Tribunal Registral consiguen el nombramiento a través del Superintendente, habiéndose llevado antes un concurso público, además sometiéndose a un procedimiento para su ratificación, cada cinco años.

Para que se pueda llevar a cabo la ratificación de los integrantes del Tribunal Registral se formará una comisión ad hoc, estará integrada y presidida su vez por un funcionario del Ministerio de Justicia, un representante del Colegio de Notarios, un representante del Poder Judicial, representante del Colegio de Abogados y un funcionario de la Sunedu.

Para ser vocal se requiere tener título profesional de abogado colegiado y hábil, acreditar especialización en materia registral, civil y mercantil; y acreditar experiencia profesional no menor a 10 años, de los cuales 5 años corresponde al ámbito registral, tener solvencia moral, no tener ningún tipo de antecedentes, y no contar con ningún impedimento para poder contratar con el Estado.

CALIFICACIÓN DE TÍTULOS

ART. 31 DEL TUO DEL RGRP



PROCEDIMIENTO REGISTRAL



OFC. DIARIO
ASIENTO DE PRESENTACIÓN

7

35

PLAZOS:

- VIGENCIA DEL ASIENTO DE PRESENTACIÓN
- CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN:

- INSCRIPCIÓN
- OBSERVACIÓN
- LIQUIDACIÓN
- TACHA SUSTANTIVA



25

5

PRÓRROGA DEL
ASIENTO DE
PRESENTACIÓN

TACHA
CADUCIDAD

Fuente: Amado (2018)

Características de la calificación registral

Podemos indicar que se advierten 4 características:

Autonomía e independencia

En el art. 3, de la Ley N° 26366 con el objetivo de que en el sistema prevalezca la autonomía del registrador público ejerciendo legalmente sus funciones, conllevando de por sí la independencia frente a una injerencia sea ésta externa o interna que pretenda influir fuera de los cauces legales de su decisión.

Se precisa que la independencia es con respecto a la institución y no a favor del funcionario, es decir que la independencia se haya a favor de su labor, de sus facultades públicas. Qué son propias de su función.

Personal e indelegable

El registrador, es el encargado de efectuar la calificación registral del título derivado a su competencia, a su vez el asistente registral que puede ser un secrista o practicante, es el encargado de precalificar el título.

Obligatoria

El registrador público no podrá ni deberá dejar de ejercer su función alegando la existencia de lagunas jurídicas, ambigüedades en la normativa, insuficiencias legales o quizás la dilación al esperar la solución de alguna consulta.

En concordancia con los artículos 34 y 35 del TUO del RGRP, se señala para los funcionarios registradores de forma expresa, cuáles son las causas para la abstención en calificar legalmente, siendo éstos los únicos escenarios en los que un registrador público podrá optar por la abstención del ejercicio legal de su función. Verbigracia: que el registrador público inmatricule un predio cuyo comprador o nuevo titular registral sea su hijo.

Responsabilidad

Es indispensable también mencionar que en el ejercicio legítimo del trabajo de los registradores públicos éstos se hayan sujetos a responsabilidad en caso

hayan obrado de una forma no adecuada, se encuentra la responsabilidad administrativa, civil y para casos graves la responsabilidad penal.

La Ley N° 26366 en su art. 3 incisos d) consagra como aval del Sistema Nacional de los Registros Públicos: "Pago indemnizatorio por las equivocaciones de índole registral, sin que ello exonere de las demás responsabilidades que señala la ley".

Calificación Registral Positiva y negativa La calificación registral puede:

Positiva

Inscripción

El acto de la inscripción se circunscribe cuando se han reunido los requisitos que exige la normativa registral y estos a su vez concuerdan con los antecedentes que se han consignado en los registros. Se ha cumplido la finalidad del procedimiento registral.

En caso de llevarse a cabo el acto establecido líneas arriba, el registrador público tendrá la obligación legal de incorporar el título, ergo, otorgarle un asiento registral correspondiente. Esto se entenderá que a partir de la hora y fecha señaladas en la presentación del título los derechos que se hayan inscrito gozan de protección que otorga la inscripción. Finalizando el procedimiento registral, como consecuencia de una calificación positiva.

Con la inscripción en registros, de presentarse una modificación de titularidades se cambiará el índice. En el caso de inscripciones antiguas, se realizan proyectos de actualización de índice.

Resolución N° 525-2012-SUNARP-TR-T. Sumilla: PRINCIPIO DE CAUSALIDAD
Declarado ineficaz formal o estructuralmente el acto jurídico que conlleva a su inscripción, cancelando el asiento registral correspondiente.

Liquidación

Significa que el título se ajusta a ley, pero no se podrá realizar la inscripción, debido a que no se realizó el pago de los derechos como por ejemplo, el arancel o tasa registral vigente.

Observación

La observación es resultado de la calificación negativa del título, ya que este adolece de requisitos o vicios subsanables, vale decir, requisitos tanto de fondo como de forma y también no adecuarse a los antecedentes registrales. En consecuencia, dichos requisitos pueden ser subsanados, pero el solo hecho de su existencia invalida el título mas no el acto, empero ello no significa que no sea inscribible. En tanto que, subsanados los defectos que adolece el título el acto será inscribible.

Atilio Cornejo señala que "en caso de un título con la condición de subsanable, (...) dispone que el registrador inscribirá el título provisionalmente por el término de (...) lapso en el cual se rectificarán los defectos. (...)

Teniendo la inscripción provisional del título, el usuario tendrá dos opciones observar o rechazar dicha actuación, en caso de rechazarla, se podrá acceder a las impugnaciones de la norma registral, las cuales estudiaremos más adelante.

La sanción administrativa

Ya se precisó que la normativa peruana ha conceptualizado a los actos administrativos como expresión de las entidades, y que como consecuencia lógica de la normativa de derecho público tiene la consecuencia de producción de efectos jurídicos sobre las obligaciones derechos de los usuarios.

Moron (2014). Sostiene que, de ello podemos extraer que al existir afectación directa a la esfera del administrado, los actos administrativos serán siempre decisiones resultantes de un procedimiento administrativo que cumpla con las garantías, así como con los requisitos de validez señalados en la legislación y la jurisprudencia, más aún si originan un gravamen respecto al administrado, presentándose en esta situación de índole administrativo.

Los actos administrativos pueden clasificarse entonces entre constitutivos y declarativos. Encontramos a los actos favorables y a los actos de gravamen. Estos últimos serán aquellos encargados de establecer un deber o una carga al usuario del sistema registral.

En esa misma línea de razonamiento, García de Enterría ha entendido a la sanción administrativa como “un acto involuntario pero que causa perjuicio a un administrado como secuela de un actuar que violenta la ley.

Gamero (2005). Concluye que la sanción administrativa se inclina en la restricción de derechos o tendientes a bienes de figura jurídica del usuario, con responsabilidad de la sanción, eso como reacción y castigo a la comisión de la misma. De los conceptos dados, se colige que para la imposición de una sanción de corte administrativo deberá darse un hecho de infracción de la normativa registral, la intromisión en la esfera del individuo transgresor.

Tipos de sanción

Tenemos diversos tipos de sanción en nuestro ordenamiento administrativo. La multa, la penalidad por antonomasia, la cual analizaremos a profundidad en el siguiente capítulo. Por otro lado, tenemos las amonestaciones, que funcionan como un llamado de atención, pero que constituyen un antecedente para efectos de infracciones posteriores, con mayor incidencia en la escala de las infracciones. La amonestación además posee un protagonismo especial en el procedimiento disciplinario, que no posee en el procedimiento administrativo sancionador.

Tenemos, asimismo, las suspensiones y las inhabilitaciones, que generan la imposibilidad de realizar una actividad de manera temporal o permanente. En unos escenarios puede no ser sanciones, sino más bien en penalidades administrativas, como ocurre, por ejemplo, en procesos sancionadores de índole administrativo en temas de tránsito. Asimismo, se ha señalado en ocasiones que las inhabilitaciones permanentes pueden estar vulnerando derechos. Profundizaremos en esta temática, más adelante.

Como veremos más adelante también en el presente trabajo, estas penalidades son impuestas, por la institución, con el objeto de que el proveedor se encuentre imposibilitado para contratar con el Estado. Otro ejemplo que veremos más adelante es de la SuSalud. Finalmente, también la Contraloría genera

inhabilitaciones, pero en este caso a servidores públicos que han cometido un quebrantamiento a la norma administrativa.

Por otro lado, tenemos las revocaciones, que dejan sin efecto autorizaciones, licencias y permisos. Tenemos casos de esto en la normativa de tragamonedas y casinos, en donde la sanción es la cancelación de la autorización. Por otro lado, tenemos el procedimiento sancionador que tramita SUSALUD, al cual se estudiará más adelante con amplitud.

El caso de las multas

Una de las formas más usuales de sancionar administrativamente es mediante la dación de multas con lo que se exhorta al infractor que realice el pago a la administración pública. Por las consecuencias jurídicas, la multa llega a configurarse en una especie de gravamen con incidencia en la esfera patrimonial del administrado.

Se le puede definir como una sanción impuesta por la Administración debido a que cometió una infracción prevista en la ley y consiste en el pago de una cuantía dineraria, cuyo fin es afectar los bienes del infractor. Por tener como sustento el ius imperium del Estado, la multa se instituye como una obligación. De igual forma, se configura como una obligación ex lege, ya que su fuente es la ley y no la voluntad de los particulares.

Las distinciones entre la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa

Castillo (2002). Señala que, aplicando el principio de subsidiaridad, a través del cual se define al derecho penal como la última ratio, entra en rigor ya que se agotaron los medios para el control de comportamientos dañosos. El derecho administrativo sancionador, forma parte de los medios para el control de la sociedad, además lo son el derecho entre particulares, como el derecho comercial y civil. Estudiaremos este principio más adelante de manera amplia para que su definición nos quede anclada en la memoria.

Responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva

Se debe empezar por su naturaleza jurídica. La responsabilidad penal es eminentemente subjetiva, encontrando amparo en lo señalado por el Código Penal, toda vez que este tipo de responsabilidad es importante el debate sobre el dolo o en su defecto la culpa, siendo componentes primordiales del tipo penal de sus elementos subjetivos; ya que en ese escenario resulta indispensable el dolo, el cual se configuraría que se goza y cuenta con conciencia y voluntad al momento de realizar el acto sancionable.

En cambio, la responsabilidad de corte administrativo resulta ser objetiva, ya que no sería necesario llevar acabo el análisis de que si se produjo con culpa o dolo. Justificando de esa manera, la responsabilidad de las empresas y la de los incapaces. En este punto nos detendremos para un análisis concienzudo, pero será más adelante al abordar el principio de causalidad.

Los Principios de la Facultad Sancionadora. Procedimiento administrativo frente al Proceso Judicial

En este caso en particular de responsabilidades administrativas y la penal se aplican de forma distinta, una vez que ya se empleó de forma regular los principios generales del derecho, que inciden de manera directa en la facultad punitiva del Estado para ser racionales con las características de la función de corte administrativo, a la luz de los hechos es diferente al ámbito jurisdiccional, no sólo por la cantidad abrumadora de detentadores sino también por su naturaleza de las sanciones administrativas.

Morón (1993). Dice que, el panorama sería muy claro si se aplicase el principio de tipicidad o retroactividad benigna, para notar que se hace necesario un ajuste a las peculiaridades de la responsabilidad en el ámbito administrativo. En esa línea de razonamiento se debe añadir un principio elemental en el procedimiento administrativo, siendo la verdad material, el que llega a ser antagónico a la verdad legal, empleado en mayor medida en los procesos judiciales, utilizados también en los procesos penales, si se revisa el Código Procesal Penal.

En primer lugar, los procesos en el ámbito jurisdiccional tienen su trámite solo por instituciones que tienen función judicial. Es necesario precisar que no todas las instituciones que tienen esta función gozan de potestad penal. Solo el Poder Judicial y la “Justicia Militar” tienen capacidad legal para la imposición de sanciones. Empero, las Instituciones Públicas evidencian una diversidad de detentadores de la facultad para sancionar.

La legislación solamente otorga facultad sancionadora, esta ha sido otorgada a entes no estatales, pero que sin embargo integran la Administración Pública, por mencionar algunos, serían, los colegios profesionales, teniendo facultad expedita para sancionar a sus miembros y a las personas jurídicas no son parte integrante del estado, pero pueden usar el derecho público.

Suay (1993). En ese sentido, las sanciones que se dan en el ámbito penal y en el administrativo son consecuencia lógica de procedimientos totalmente distintos. Por un lado, el procedimiento administrativo se puede dar inicio de oficio, iniciado por el propio ente ya que tiene la normativa vigente que los ampara; por el contrario, el proceso penal no tiene esa particularidad, sino que para que se dé inicio debe haber una denuncia de por medio sea de parte o por el representante del ministerio público. En ese sentido el principio de imparcialidad que es muy común su uso en el procedimiento administrativo se convierte en una ficción en el entendido que el principio no cumple su rol a cabalidad.

La Administración Pública como filtro

De esta manera es que se configura la funcionalidad de la entidad pública, tratando de alguna u otra manera aminorar el comportamiento antisocial mediante el planteamiento de sanciones y penalidades, cuando exista un quebrantamiento a la norma registral, imponiéndose una penalidad administrativa, pero a la vez se velará por no menoscabar el principio de non bis ídem.

La funcionalidad de la Administración Pública es de vital importancia a nivel social toda vez que sirve para la solución de algún litigio para evitar concurrir al

Poder Judicial. Es importante señalar que la carga que tiene el Poder Judicial en el ámbito procesal es un tema de estado y no solamente de sede institucional.

Si el organismo encargado de la administración de justicia en territorio peruano utiliza herramientas y mecanismos necesarios para alcanzar la eficiencia y como consecuencia lógica que la carga procesal disminuya; esto ocurrirá, por una aplicación sencilla de la ley de la demanda. La problemática de la carga procesal en este órgano judicial se podría alcanzar si es que muchos de los conflictos se resolvieran en sede alternativa como por ejemplo el arbitraje. Es por ello que el procedimiento sancionador a nivel administrativo se inmola como un mecanismo que coadyuva a ese fin, de esta manera se controlaran actitudes antisociales sin la necesidad de asistir al Poder Judicial para que lo haga.

La potestad sancionadora

La administración pública tiene la potestad para aplicar sanciones a los usuarios si es que estos cometen infracciones señaladas expresamente por el ordenamiento jurídico. Se hace necesario precisar que se señala en la LPAG una normativa de la facultad sancionadora, aplicando además garantías que eran de uso exclusivo del derecho penal.

No todo acto que contravenga la normativa registral puede ser castigado penalmente; toda vez que, yace una característica particular en el derecho penal de actuar como ultima ratio. Consecuentemente la normativa registral ofrece una opción para la aplicación de penalidades de índole administrativo, que pueden usarse a la vez como mecanismo de control social, pero lógicamente de una forma benigna. Situando una diferencia esencial una penalidad administrativa jamás terminaría imponiendo una prisión efectiva de la libertad para los usuarios, potestad que la tiene a la luz de los hechos el derecho penal.

Regulación de la potestad sancionadora

Danós (1995). Señala que, la facultad sancionadora en la normativa registral peruana resulta ser nueva toda vez que anteriormente no existía algo parecido hasta la llegada de la ley 27444, entonces se consolidó ese conglomerado de

normativa regulando principios y reglas que se aplicaría al procedimiento sancionador desde una perspectiva general.

En ese sentido el Decreto Legislativo N° 1029, el cual hemos aludido repetidamente en este modesto trabajo de investigación, modificó sustancialmente la LPAG en aspectos estrictamente sancionadores. En primer término, la normativa la cual se comenta añade una modificación en el artículo 229 de la ley 27444 como por ejemplo los principios de la potestad sancionadora, establecidos en la norma, así como los mecanismos herramientas y garantías previstas para tal procedimiento.

La norma legislativa señalada en el párrafo anterior precisó una consecuencia clara sobre los procedimientos, ya que no podrán y deberán en ninguna circunstancia establecer situaciones desfavorables para los usuarios, de las que ya se encuentran señaladas en la Ley N° 27444. Esto llegó a ser una propuesta muy novedosa y de alguna u otra manera ponía como primera elección a los procedimientos administrativos de corte sancionador que se encontraban normados por una legislación especial.

De generarse un procedimiento sancionador en sede administrativa se encuentra señalado previamente en leyes especiales, guardando una correspondencia con lo ya establecido, por la ley N° 27444, a fin de que no sólo allá una uniformidad de criterios al aplicar los ya mencionados procedimientos; sino que, además el procedimiento sancionador tenga las garantías indispensables para que su respuesta este acorde a derecho, apreciando que constituye acto de gravamen respecto al administrado.

Es innegable la existencia de procedimientos administrativos sancionadores que menoscaban principios; considerando que, en primer término, es verdad que se encuentran estipulados de forma diáfana en la Ley del Procedimiento Administrativo General, son mandatos que se coligen a la vez de principios y derechos consagrados en nuestra norma constitucional, haciendo una debida referencia al principio del debido proceso en la sede administrativa ya estudiada.

Las prerrogativas sancionadoras como potestad

Si se pretende dar una definición clara de la figura de potestad, se tendría que recurrir al ordenamiento jurídico registral, otorgándole a los titulares de los derechos, poder otorgar facultades a terceros, pero bajo la condición de que este tercero asumirá todas las consecuencias jurídicas de su actuar, que en un determinado momento no podrían ser de ventaja para él. En ese sentido el sujeto pasivo mantendrá una correlación de sujeción con la entidad registradora. Ejemplos de potestades: son la autotutela, la potestad organizativa, la potestad reglamentaria.

Si nos enmarcamos en el tema de la potestad sancionadora, las secuelas del efecto jurídico, se encuentran claramente señalados, son muy gravosas y la correlación de dependencia se aplicará de forma uniformizada a todos los administrados que se ubiquen dentro de un ámbito limitado, sobre la base de la comisión infracción que afectan determinados bienes jurídicos.

Se da la ocurrencia de casos excepcionales al revisar el derecho comparado, como por ejemplo el caso español, nuestra norma fundamental no señala la existencia de potestades para poder sancionar a los administrados, hecho que la Constitución sí otorga esa potestad punitiva para el derecho penal. Teniendo ese escenario no se puede negar la existencia de facultades por parte de la entidad registral para sancionar de manera administrativa a los usuarios, y que además estos gocen de autotutela administrativa, la que hoy por hoy no tiene asidero de discusión, si es que sólo analizamos la tradición administrativa.

Velez (1996). Manifiesta que, ya se encuentra clara algunas justificaciones de la existencia de potestades para poder sancionar por parte del ente registral, se haya evidente la imperiosa necesidad de que estas potestades se regulen de manera clara, con el claro objetivo de reducción de posibilidades para que la administración pública aplique el principio de discrecionalidad, ya que es de ejercicio exclusivo del órgano jurisdiccional y esto para la tutela de los derechos de los usuarios, finalidad que también comparte la propia entidad administrativa. Además, el procedimiento sancionador en el ámbito administrativo basa su funcionalidad, en los derechos de los administrados, y éstos a su vez coadyuvan

a que se tramite de una forma adecuada velando por el respeto de los derechos constitucionales de los ciudadanos, con ello se asegura una aplicación correcta en caso de una infracción y una eventual penalidad, ambas se llevarán a cabo sobre un cimiento objetivo y concreto.

Compatibilidad de la sanción administrativa con otras consideraciones reparadoras. Las medidas correctivas

El Decreto Legislativo N.º 1272 ha incorporado, además, todas las normas que pretenden corregir un acto anómalo deberán estar obligatoriamente en la norma registral claramente tipificadas; aunado a ello, deberán ser sensatas, proporcionales y deberán ajustarse al fundamento de los bienes jurídicos que gozan de tutela, y que a la vez se garantiza en cada supuesto de hecho. Esta disposición se dirige a asegurar que el empleo de la medida correctiva no sea arbitrario, afectando al usuario más allá de lo indispensable.

A ello debe agregarse que muchas veces las normativas para los procedimientos sancionadores especiales contienen un listado abierto de posibles medidas correctivas, generando un indebido nivel de aplicabilidad del principio de discrecionalidad en pro de la entidad reguladora, que podrá determinar de forma más o menos libre la medida a ser empleada y su alcance.

Ahora bien, como consecuencia del quebrantamiento de la norma administrativa, retrotrayéndola a su estado anterior. En el supuesto que un usuario inaugure un local comercial para la venta sin que este haya tramitado la licencia para que funcione, en ese sentido si se cerrará el local por orden exclusiva de la municipalidad se configura en una medida eminentemente correctiva, en ese sentido la multa por la penalidad administrativa que resulta del quebrantamiento de la normativa.

Y se pone en evidencia después de analizar distintos ordenamientos que aborde la temática de las sanciones y que éstos no han jugado el rol que han debido en el sentido del desincentivo para que los usuarios no lleguen al quebrantamiento de la normativa registral. Pero esto se debe a que la institución no ha tomado en

consideración lo que es una medida correctiva, y lo que en buena cuenta llega a ser una sanción administrativa, obstaculizando de esa manera aplicar una de ellas con el objetivo de evitar una doble sanción.

Resulta ser muy importante, establecer la diferencia entre el cierre de un establecimiento y la multa impuesta por la institución registral. Es preciso recordar que sobre la materia se pronunció el Tribunal Constitucional en una trascendental sentencia, dada por una demanda competencial iniciado por el Mincetur en contra del Poder Judicial, en donde se pronuncia anulando y dejando sin efecto un conjunto de resoluciones judiciales emitidas en sendos procesos de amparo.

Además es sensato añadir que las facultades que le fueron otorgadas a la entidad administrativa, con el objetivo de que se empleen de manera eficiente las medidas correctivas, siendo variables, la encontramos en el área específica del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, tribunas desde las que se puede imponer sanciones correctivas que a su vez obligarán a quién causó el daño; para que, éste lo rehabilite, lo repare, restaure y retrotraiga a la situación anterior, de no ser posible estas medidas de carácter correctivo pueden inclusive tener la obligación de compensar la situación que fue sacada de su contexto natural en terminología ambiental y económica.

En ese sentido creemos necesario aclarar que los mecanismos establecidos en la normativa, para que se lleve a cabo la ejecución de carácter forzoso, no tengan una naturaleza eminentemente sancionadora sino tengan carácter coercitivo, tales como la ejecución de las multas, ambas de tendencia coercitiva. Los mecanismos tienen por finalidad la corrección de la situación normal el objetivo de que al existir una alteración ésta se retrotraiga al estado anterior, siendo un particular caso el de la sanción correctiva o también que se cumpla con la finalidad en sede administrativa.

El caso de la indemnización

Por último, se debe precisar que la figura jurídica de la indemnización para con la institución administrativa tiene una marcada naturaleza reparadora o

resarcitoria. En ese sentido, para no ser sancionado en dos oportunidades por la misma infracción, no resulta ser un óbice para la aplicación de la forma de resarcir a los que se mencionó anteriormente.

Empero, la entidad administrativa, legalmente no podrá delimitar de forma individual los perjuicios y daños irrogados, de igual forma la indemnización que corresponda, la cual será definida por el juez. Una aparente excepción a este principio podría ser la atribución antes señalada existente a favor del OEFA.

Desde esa perspectiva, resulta ser consistente con el cúmulo de indemnizaciones a favor de los afectados por la infracción administrativa cometida, si nos contextualizamos en los procedimientos administrativos trilaterales sancionadores, como los que se tramitan por el INDECOPÍ o por SUSALUD. En estos casos, la indemnización será determinada por el Poder Judicial o también por la vía del arbitraje.

Solidaridad.

La LPAG desarrolla de manera general el principio de solidaridad sancionadora. Ello abarca desde el cumplimiento de los deberes precisados de forma clara en la normativa registral y que está a su vez, concierne a varias personas, estas asumirán de una manera solidaria el quebrantamiento que se haya cometido y las penalidades que se le haya impuesto, sanciones que derivan al no cumplir obligaciones establecidas de manera expresa.

Así que en este escenario resulta ser muy complicado la aplicación directa del principio de solidaridad, en cuanto a la temática de las soluciones, en el caso concreto de que dichas medidas nacen para el desincentivo del comportamiento lesivo. Aunado a ello la exigencia a los usuarios a percatarse de que se cumpla la obligación para con el resto de usuarios.

Como último punto, no todas las penalidades de esta entidad administrativa son de índole pecuniario, lo cual restringe de manera seria la aplicabilidad del principio de solidaridad. Si fuéramos estrictos, la definición que debería usarse es el de responsabilidad conjunta, situación en la cual cada uno de los usuarios

será sancionado en virtud de haber participado en el quebrantamiento de la norma.

LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA

La facultad de sancionar de todas las instituciones públicas se ciñe por los siguientes principios estipulados en la normativa registral, sin perjuicio a los que sean aplicables al procedimiento administrativo general, en ese sentido solo se tomará como una referencia general la siguiente lista:

- Legalidad
- Debido procedimiento
- Razonabilidad
- Tipicidad
- Irretroactividad
- Concurso de infracciones
- Continuación de infracciones
- Causalidad
- Presunción de licitud
- Non bis in ídem

Resulta ser responsable mencionar que los principios que se hallan inmersos en la ley del procedimiento administrativo general, tienen un gran parecido con los principios que regulan el derecho penal. Es innegable que varios de los principios se desarrollan en ambas ramas del derecho. No obstante, los principios que resultan ser normas directrices que se desarrollarán con posterioridad se desprenden de la constitución y las que se explican en el procedimiento sancionador; en ese sentido las normas del área administrativa se centran en la tutela del administrado. Como consecuencia lógica interpretar las normas directrices serán exclusivas del derecho administrativo y no del derecho penal.

Es así que los principios como normas directrices, y en especial los que se hallan inmersos en el derecho administrativo; sirven y son de mucha utilidad, como una fuente directriz para poder solucionar situaciones que puedan originarse al aplicar las normas registrales establecidas en el derecho administrativo a un

caso concreto. Es por ello que los principios generales del derecho y los que guardan relación directa con el derecho administrativo coadyuvan a la interpretación de la normativa registral, allí donde es muy complejo aplicar literalmente una norma.

Como segundo punto precisamos que los principios generales, que se encuentran regulando el ámbito administrativo, deben usarse para seguir estrictamente en el caso de dar otras normativas de carácter administrativo, en concreto regulan los procedimientos administrativos sancionadores dentro de las instituciones públicas. La lista de principios no es cerrada, es indispensable tomar en consideración que estos principios son utilizados como lineamientos para generar normativa registral que regula el procedimiento administrativo.

Por último, coincidimos en que los principios como normas directrices, en especial los utilizados y empleados de manera rigurosa en el derecho administrativo, sirven para poder suplir alguna laguna o vacío que exista en el ordenamiento jurídico administrativo, como mecanismos efectivos de la integración. Teniendo una relevancia en el derecho administrativo toda vez que se haya limitaciones como, por ejemplo; la analogía, ya que todas las instituciones públicas y en especial la registral se somete de forma estricta al principio de legalidad.

Principio de legalidad

Morales (2002). Manifiesta que, debemos tener en claro que son muy distintos tanto el principio de legalidad que se ve en el ámbito administrativo y el principio de legalidad que se usa y se ejerce en el derecho penal, aparte de que se enuncian de una forma totalmente diferente, como veremos más adelante este principio en el derecho administrativo precisa que la norma registral debe tener la categoría de ley para poder aplicar sus sanciones, y ejercer su potestad para sancionar, de no serlo se haría imposible que esta institución registral aplique sanciones. En Perú como se ha mencionado líneas arriba, las facultades sólo deberían ser atribuidas por la ley y eventualmente por decreto legislativo y es que la ley autoritativa así lo establece.

La Ley del Procedimiento Administrativo General señala que el inicio de la facultad sancionadora bajo ningún contexto podrá dictar la privación efectiva de libertad del usuario; potestad, que le fue otorgada de manera exclusiva al juez penal que además debe someterse a todo un proceso regulado por la normativa penal. Esta disposición se enfoca entonces en velar por los derechos constitucionales como lo es, el de la libertad, limitando además la potestad que tiene la institución registral al sancionar.

El principio de legalidad, en primer término, señala que la entidad registral, seguirá los lineamientos del ordenamiento jurídico y en mayor medida a la ley. En esa misma línea de razonamiento el principio de legalidad se convierte en un aval de que nos encontramos coexistiendo con el Estado Constitucional de Derecho, siendo uno de sus pilares. Pero si nos explayamos sobre el procedimiento administrativo, la garantía constitucional se intensifica toda vez que se hace mención de manera directa, el rango de la ley que le concede esa potestad para poder sancionar a los administrados.

La institución pública encargada de registrar títulos y derechos; en contraste, con las entidades particulares, la ley no le concede la figura jurídica conocida como libertad negativa establecida en la constitución. También conocido como la máxima de la coacción donde se señala que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que está no prohíbe. El principio de discrecionalidad como resultante redujo de manera sustancial su existencia, ello va a la vanguardia con las teorías modernas, más aún si las potestades dadas son para limitar los derechos de los usuarios.

La normativa que se explica líneas arriba concierne que la entidad registral no podrá asignarse facultad para sancionar, mostrándose en esta situación particular, la reserva de ley un concepto absoluto. En ese sentido, los actos de gravamen, limitando derechos constitucionales, deberá ser legalmente autorizado. Otra perspectiva nos muestra que solo la legislación registral determinará las penalidades que la entidad registral podrá aplicar, sin que la Administración pueda asignarlas a través de normas reglamentarias.

La ley precisa para mayor claridad con el principio que estamos describiendo; que ejercer la facultad de sancionar, es estrictamente para las autoridades estatales de índole administrativo a quienes previamente hayan sido autorizadas por la ley o por alguna norma reglamentaria, sin que ésta pueda delegarse a otra autoridad. Esta protección se colige válidamente del principio del proceso debido en el ámbito administrativo, observándose más adelante ya que al existir un impedimento para la modificación en una institución distinta predeterminada por la ley para que no quede nada a la suerte en especial los derechos.

Competencia respecto a la facultad para sancionar

Las primeras deducciones que se le pueden hacer al principio de legalidad al momento de que ejerce su facultad para poder sancionar, sea por parte de las entidades registrales a ellas se les ha dotado de manera expresa y además dispuesto en un mandato reglamentario; siendo de competencia exclusiva, prohibiéndosele de poder delegarlo a otra entidad distinta. Resulta sumamente indispensable precisar y de hecho ha sido de manera reiterada que es otorgarle la atribución de la potestad para poder sancionar a través de un reglamento, posibilita que esta norma parece haber establecido, podría vulnerar la legalidad la cual hemos hecho referencia párrafos anteriores trayendo consigo un perjuicio a los administrados.

En otro sentido el principio de legalidad ofrece una estabilidad en tanto y en cuanto la competencia de índole administrativo al momento de sancionar limita esa facultad de que se pueda delegar con otras potestades en sede administrativa desde otro enfoque, un órgano administrativo puede conocer asuntos cuya facultad sancionadora corresponde a otra institución

Lo señalado por la jurisprudencia

Es necesario referirnos a lo manifestado por la máxima autoridad constitucional sobre el particular. Desafortunadamente, este colegiado ha confundido este principio con el de legalidad penal, los cuales son por completo diferentes, puesto que este último se asemeja más bien al principio de tipicidad. Ello parte además de la recurrente suposición de que la responsabilidad administrativa y penal son equivalentes.

Así, el Tribunal Constitucional ha señalado sobre la temática, lo siguiente:

El Tribunal Constitucional, ha manifestado en jurisprudencia reiterada, que el principio de legalidad; que se encuentra en la constitución, tiene el contenido y alcance de una garantía de los derechos de los administrados, y desde un enfoque en la aplicación del poder punitivo. El principio de legalidad no sólo consiste en que una sanción se halle normada, sino que, a la vez las actitudes de los ciudadanos se encuentran limitadas por la ley, prohibiendo bajo cualquier punto de vista una aplicación por analogía. Además del uso de cláusulas ambiguas y generales. En ese sentido se precisó que los principios de legalidad y culpabilidad configuran principios rectores y básicos del derecho sancionador que debido a la práctica no sólo se dan en materia penal sino en la administrativa.

Asimismo, el Tribunal señala:

Además se ha discutido la correcta definición del principio de legalidad, y el principio de tipicidad; toda vez que, si se habla del primero, este principio solo se conforma si las sanciones e infracciones a la normativa, la tipicidad se configura como el comportamiento que tiene el ciudadano para con la ley y cuando sus actos se consideran faltas o delitos, en ese sentido, también exige que la norma sea redactada con claridad suficiente, para que el usuario o ciudadano pueda entender y comprender qué es lo que se encuentra prohibido y en caso de incumplimiento también tenga conocimiento qué habrá una sanción que se encuentra de antemano en la ley

En este fundamento, el Tribunal no distingue adecuadamente los principios que operan en materia penal y en el derecho sancionador, ya que, si bien en el primero la tipicidad sería un componente de la legalidad, en el segundo ambos son principios sustancialmente diferentes.

Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional, ha establecido el contenido y alcance del principio de legalidad, distinguiéndolo incluso de otros principios, como el de reserva de ley. Así ha señalado:

En este sentido el máximo intérprete de la constitución, expone que no existe ni confusión, ni coincidencia, ni identidad entre el principio de reserva de ley y el de

legalidad. Toda vez que el principio de legalidad desde su perspectiva más genérica se aplica a todas las instituciones públicas, se someten a leyes, son abstractas y generales. Describe el ejercicio legítimo de sus facultades cuyo cumplimiento se encuentra bajo un control de legitimidad por las autoridades competentes contrario sensu, el principio de reserva de ley es todo lo comprende determinar constitucionalmente la regulación por ley en ciertas materias.

Principio de debido procedimiento

Un correcto procedimiento dentro de las entidades estatales, y en especial en materia sancionadora, hace especial incidencia en la forma que debe seguirse para aplicar las penalidades y sanciones; durante todo lo que dure el procedimiento se asegura el respeto de las garantías que se encuentran inmersas en un debido procedimiento. Al referirse al debido proceso, siendo que en el ámbito administrativo se prefiere hablar de debido procedimiento, teniendo en verdad el mismo contenido.

Dicha separación era facultativa en la primera redacción de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo obligatoria en el TUO, como se analizará más adelante en esta modesta investigación.

Huapaya (2005). Precisa que, en este caso particular, el acto administrativo a emitir, puede tener un efecto muy pernicioso para los administrados, dicha norma directriz se analizará desde un enfoque amplio, incorporando diversos derechos, incluso principios específicos, como es el de defensa en materia penal.

Como lo hemos señalado, conceptualizamos el proceso debido, también conocido como un proceso justo, como el cúmulo de garantías necesarias para que un proceso, el cual tendrá como consecuencia lógica una decisión del registrador se considerará a la luz de los hechos como justo. El debido proceso como derecho fundamental, es un derecho de una difícil definición toda vez que dentro el existen otros derechos también de una naturaleza compleja. El principio y derecho al debido proceso en general, abarca derechos muy relevantes como un procedimiento predeterminado por la normativa, de que las resoluciones

dadas por las entidades estatales se hallen con una debida motivación, el derecho de la doble instancia y el derecho de defensa.

Si revisamos la jurisprudencia peruana y a los doctrinarios, para este conjunto de conocimiento el debido proceso tiene dos enfoques; en primer lugar, el adjetivo y también una vertiente material. Cuando se hable de un debido proceso adjetivo también conocido como procesal, se toma en consideración la observancia de la formalidad establecida por ley y la constitución, encontrándose con mayor amplitud en las normas procesales pertinentes.

La otra vertiente del debido proceso, es el material, que tiene un contenido y alcance con respecto a la sentencia, emanada por institución u órgano competente y que esta se encuentre ajustada a derecho es decir que inevitablemente se haya dado un debido proceso. Esto es que se hayan aplicado con discrecionalidad ajustada a la equidad, proporcionalidad y razonabilidad, no sólo con la formalidad, sino que también con justicia, como valor constitucional indispensable para la obtención de la solución de litigios y alcanzar así una paz social.

Creemos necesario precisar sobre la jurisprudencia y la doctrina, ya sea interna o extranjera, están considerando el principio y derecho a un proceso justo como un derecho que no es exclusivo de los órganos judiciales y que a la vez también abarca a las instituciones estatales administrativas y en algunos casos las corporaciones privadas.

Dicho concepto en el derecho anglosajón no se centra en las diferencias sobre la naturaleza de un proceso en particular, el cual encajaría perfectamente en el precepto antes mencionado; en ese sentido, la definición podría aplicarse sin ningún tipo de inconvenientes a los procesos llevados por los órganos jurisdiccionales, administrativos y ni a entidades privadas con una naturaleza corporativa.

Lo establecido por la jurisprudencia

En este punto, el Tribunal Constitucional ha establecido:

Todo ejercicio de la potestad administrativa debe observar lo establecido la Ley N° 27444, marco que regula el contenido y alcance de la actuación administrativa. Dentro de su Título Preliminar encontramos la aplicación del debido procedimiento, esto en buen cristiano significa que los usuarios de esta entidad tienen garantías y derechos, como por ejemplo el de que se les permita exponer sus fundamentos, a la obtención de un dictamen motivado debidamente y que se ajuste a derecho, el de ofrecer pruebas.

Como lo ha establecido la doctrina tanto nacional como internacional, para los administrados de las instituciones registrales; el principio tiene tres vertientes. En primer término, se refiere al debido proceso como derecho al procedimiento administrativo y señala que los usuarios tienen la garantía de que exista un procedimiento administrativo ya establecido. Correlativamente la entidad tiene la obligación de otorgar sus decisiones mediante el cumplimiento de las normas reglamentarias, que constituyen el procedimiento de modo que se expresa el menoscabo de este principio, cuando ocurren actos administrativos sin que se les notifique a los usuarios.

Principio de razonabilidad. Las causas que afectarían la determinación de la sanción administrativa

El principio de razonabilidad tiene una parte comparable al derecho del debido proceso; desde su enfoque sustantivo, también conocido como material al cual hemos hecho mención, con la finalidad de que evitemos que las penalidades carezcan de efecto disuasivo, pero la vez, que no configure un abuso y la facultad punitiva, que la penalidad a imponerse sea de carácter confiscatorio.

Razonabilidad y proporcionalidad

Se presenta un escenario donde la Ley N° 27444 no establecía de forma diáfana los lineamientos del principio de razonabilidad; diferenciándolo, del principio de proporcionalidad, considera que la penalidad impuesta debe contener congruencia entre la infracción que se le aplique al usuario de la entidad registral, con la infracción que haya cometido, el objetivo es conseguir una sanción y éste tiene sus efectos. Dicho principio se encontraba dentro ya que lo habían

establecido los doctrinarios, resultó ser indispensable su incorporación en esta última modificación.

En virtud del principio de proporcionalidad, los instrumentos y herramientas que se han utilizado para alcanzar dicha finalidad, se halle en concordancia con el mismo; en ese sentido, la administración pública pueda decidir y optar por la que sea menos grave. En referencia al derecho constitucional a limitar, siendo a todas luces indispensable sobre la vulneración que se le infringe a la normativa se enmarque en concordancia con la finalidad que se sigue, este último enfoque que es consistente con el fundamento sensato, el principio de preferencia ya que permite al servidor público quien definirá cuando nos hallamos ante una limitación legalmente válida, elaborando un estudio con respecto al costo beneficio, verificando así el principio de proporcionalidad.

En ese sentido se puede colegir de las múltiples sentencias, la imperiosa necesidad de cumplir y hacer cumplir con las tres directrices de la proporcionalidad, el principio de necesidad, el principio de idoneidad y el principio de proporcionalidad desde un enfoque restringido.

Morón (2005). Dice que, el primer subprincipio establece que la penalidad a aplicarse sea concordante al fin que se persigue con la sanción impuesta es decir que su resultado sea efectivo, a la vez constituya una satisfacción del objetivo perseguido.

Por lo anteriormente expuesto, el principio de necesidad, refiere como ya lo hemos indicado líneas arriba que, si nos encontramos frente al escenario de una penalidad impuesta, esta debe ser la menos grave y en correlación al fin que se persigue con la sanción. Por el método aplicado en la ponderación, es básicamente la comparación de la afectación del interés del usuario mediante la penalidad aplicada con el impulso satisfacer la finalidad que se sigue además de querer establecer que tal afectación se encuentra justificada debidamente.

La Ley N° 27444, señala expresamente, que es una fuente que proporciona lineamientos, el principio de razonabilidad, que las decisiones que tome la entidad registral al momento de imponer una sanción, calificará la infracción o

quizás el establecimiento de restricciones a los usuarios; para ser específicos, en los actos de gravamen, deben estar ajustadas a derecho dentro del marco legal establecido para su correcto funcionamiento además de velar por una debida proporción entre los fines públicos y los medios y herramientas que se emplean a fin de que den una respuesta necesaria para el fin que se sigue.

La graduación de la sanción

El Decreto Legislativo N ° 1029 ha añadido no solo criterios adicionales para el establecimiento de la sanción, sino que, aunado a ello, el respeto a la prelación. Luego, como veremos seguidamente, el Decreto Legislativo N° 1272 efectúa ajustes a dichos criterios, modificando el orden de prelación e incorporando un elemento crucial en la fórmula, que es la probabilidad de detección del quebrantamiento de la norma registral.

Ahora bien, existen diversas normas especiales que al regular el procedimiento administrativo sancionador correspondiente establecen un conjunto de criterios adicionales a los que trata la Ley del Procedimiento Administrativo, señalado también en los procedimientos realizados ante el INDECOPI.

Un primer criterio es el beneficio ilegalmente obtenido, que fuera integrado por el D. L. N° 1029, y se centran los lineamientos de la ventaja conseguida por el usuario al quebrantar la norma registral. Configurándose un criterio fundamental para graduar la sanción, puesto que se enfoca en el análisis costo beneficio que debe efectuar el administrado al cometer la infracción. Ello genera que cumpla un rol clave en la elaboración de la fórmula que emplean cada vez más entidades que tramitan procedimientos administrativos para sancionar.

Un segundo criterio, que, si bien no estaba señalado de forma clara en la normativa, ya estaba siendo empleado por las entidades, era la posibilidad de reconocer la infracción. Este criterio es muy importante dentro de la fórmula empleada para la graduación, dado que muestra un análisis objetivo de la decisión que la administrada toma para decidir cometer la infracción.

Consideramos también un factor importante para el tema de la graduación, la aplicación de la sanción, el daño y su gravedad con respecto al bien jurídico tutelado por el estado. Su importancia es que para determinar un quebrantamiento de la norma registral y consecuentemente su sanción; es indispensable, la protección del bien en el cual se encuentra inmerso el interés general de la sociedad y en particular del administrado. Como resultado este criterio constituye un componente crucial. En diversas fórmulas que se aplican en las instituciones públicas de carácter registral dándole una gradualidad a la sanción.

Un factor relevante que debe considerarse es bajo el enfoque económico y el perjuicio que se causa. El primer tema que vale la pena aclarar es quién será el afectado en el perjuicio económico mencionado si es la entidad estatal encargada de registrar los derechos los usuarios, que utilizan los servicios de la entidad antes mencionada, cuál de los dos se verá perjudicado por la infracción. El segundo factor es como consecuencia lógica de la directriz, puede ser considerada como causa justificante para determinar la imposición de una sanción, incluso sobre un hecho trascendental como la sucesión del quebrantamiento de la norma que comete el administrado.

Entonces bajo esos parámetros si se comete la misma infracción en un plazo determinado se considerará como una reincidencia.

Distinta figura jurídica es la continuidad; la cual consiste a diferencia de la reincidencia, en que la primera se circunscribe al quebrantamiento de una sola infracción, pero, que se ve en un período establecido sin que se excluya la continuidad entre la acción y la sanción. Es controvertido, y la actual redacción posee una mayor calidad. En todo caso la reincidencia incrementa el valor de la penalidad toda vez que ejerce un menoscabo mayor al bien jurídico protegido por el estado en concordancia con la penalidad en sede administrativa.

Por lo que, ante cualquier eventualidad los hechos de una infracción de quebrantamiento de la norma registral se encuentran en la norma original. En Perú nunca se definió claramente su sector para que se aplique; por lo que, era

un elemento más bien dotado de una mayor discreción al momento de graduar la sanción. En esa misma línea de razonamiento se hubiese eliminado el criterio antes mencionado, con el objetivo de minimizar los riesgos ante una decisión que se considere arbitraria al momento de graduar la penalidad. Por último, si nos introducimos al campo de la intencionalidad en el actuar de quién quebranta la norma registral. En primer término, la Ley del Procedimiento Administrativo General, figura en un no, muy generoso lugar de prelación. Creemos que la no existencia de intencionalidad no debería constituir una causal para atenuar la responsabilidad a la que se hace referencia líneas más adelante, puesto que no debería ser importante para delimitar la responsabilidad objetiva ya que se da la existencia de la responsabilidad objetiva del usuario. Sin embargo, esto ha sufrido una distorsión como resultado de que se añadió el principio de culpabilidad como veremos más adelante.

Gonzales (1996). Precisamente, el empleo de la intencionalidad se refleja con un hecho en concreto, que es la relación existente entre la responsabilidad en el ámbito administrativo, pero de las personas jurídicas, para las cuales la entidad administrativa y la voluntad proveniente de los órganos sociales, esto ha sido mencionado párrafos anteriores al margen del grado de responsabilidad que haya tenido el usuario que se le pueda imputar.

Por lo que queda en evidencia el papel que asume la intención del infractor, ocupando un segundo lugar, determinar la sanción es a todas luces una opción que tiene el funcionario público, y que fue dado por la legislación vigente. A esto se le añadió mayor objetividad con respecto al grado de responsabilidad de ser imputable a los administrados de la entidad estatal administrativa, en el cual no son relevantes ni la culpa ni el dolo como elementos indispensables para atribuir responsabilidad.

El discutible principio de no confiscatoriedad

El Principio que poco a poco se ha abierto camino, debido a su imperiosa necesidad de aplicación a través de la doctrina, de las jurisprudencias, hasta de la misma ley registral, es el principio de no confiscatoriedad; por el cual, la sanción administrativa no puede ni debe estar por encima de un monto

establecido, a sí éste se encuentre por debajo a lo que señala la normativa de manera general. Dicho monto se encuentra determinado sobre la base de condiciones específicas del usuario, en concreto sobre los ingresos que pudiese registrar.

Para graficar un procedimiento administrativo más claro, podemos dar como un ejemplo la OEFA, en donde la sanción que será aplicada por causa de algún quebrantamiento de la norma registral, tendrá como tope el 10% del ingreso que percibe anualmente el infractor; pero, será con respecto al año anterior de la fecha en que pudo quebrantar las normas registrales, dicha regla sin embargo no se aplica si el infractor ha llevado a cabo su actividad en zonas que se encuentran legalmente prohibida o tal vez cuando no ha presentado la estimación promedio de sus ingresos en un año o cuando éste tenga reincidencia.

Otro importante ejemplo, lo encontramos en el procedimiento sancionador que se ejecuta por SuSalud. De hecho, se establece que, dentro del estudio y análisis para calcular la sanción, se añadirá un tope máximo para el porcentaje de las ventas que ha percibido el usuario. También están otros lineamientos presupuestales mediante el cual se aplicará la multa con la finalidad de no dar origen a un efecto confiscatorio que generaría un detrimento de las IAFAS, IPRESS, en menoscabo de una deficiente atención en los servicios que utilizan los usuarios.

En ese sentido se desprende un controvertido principio; toda vez que, puede afectar el rol disuasivo que posee la sanción administrativa puesto que la afectación al patrimonio de la empresa debería ser una consecuencia previsible, debe tomar el administrado antes de quebrantar las normas registrales. Además, es un principio que surge como resultante de aplicar un reglamento pero que no tiene sus fundamentos sólidos en la ley.

El principio de buena fe procedimental

Principio hartado aplicado dentro del procedimiento sancionador con el objetivo de graduar la sanción. Dicho principio precisa que los intervinientes inmersos en un

procedimiento administrativo, deben ser los mismos usuarios y la entidad registral.

En esa misma línea de razonamiento; sus actos dentro del procedimiento, están direccionados por la colaboración y el respeto recíproco y más aún el de buena fe. Reconocer la existencia de derechos que tienen todos los usuarios en dicha entidad, pero a la vez también el respeto y cumplimiento de los deberes que se le imponen por su actuación dentro del procedimiento, para generar así un eficiente trámite. Este principio se dirige a la confianza del administrado en las decisiones de la entidad, debiendo actuar lealmente.

Palomar (1995). Sostiene que, en este punto, la Ley del Procedimiento Administrativo General, precisa que el principio fundamental, es el de la buena fe procesal; en ese orden de ideas, no puede existir un acto procedimental dentro de la entidad que proteja conductas, que contravengan dicho principio. El principio de buena fe, es para las partes que participan en un procedimiento de carácter registral, es decir para los administrados y para la institución. De que la institución registral no deberá, ni podrá, bajo ningún motivo exigirles a los usuarios más de lo que está en la norma para que este pueda realizar sus actos.

La buena fe, no es un principio estrictamente del área administrativa, sino que se puede aplicar y desarrollar con total normalidad en otros ámbitos del derecho, y que justamente su existencia es para tutelar un funcionamiento correcto de los procedimientos administrativos en todas sus áreas. Aunado a ello tiene la intención del aseguramiento de la confianza por ambas partes intervinientes. A la luz de los hechos también forma parte la administración pública; toda vez que, el usuario podrá confiar en la administración registral y sus decisiones serán ajustadas a derecho.

Finalmente, debemos señalar que el D. Legislativo N.º 1272 ha efectuado un par de modificaciones sobre este principio en el TUO. Una primera, su propia designación, toda vez que la primera redacción de la norma nos hablaba de conducta procedimental. Este cambio obedece a la necesidad de una mayor precisión del principio, puesto que la buena fe no se restringe a la conducta.

Asimismo, se establece como resultado de la reforma que la entidad registral no podrá contravenir con respecto a sus propios actos, excepto los de revisión de oficio amparado en la normativa vigente. Es decir, únicamente cuando la entidad haya efectuado el correspondiente procedimiento de oficio (al cual nos referiremos con detalle más adelante), será posible actuar en contra de un acto administrativo emitido de manera previa.

Supuesto especial sobre autorizaciones o licencias

La Ley N° 27444, señala que es el desenvolvimiento de un procedimiento administrativo, que tenga como correlato lógico la sanción, y no contar con licencia para hacerlo o carezca de una autorización expresa, se atenderán los hechos, en estas circunstancias se remitirá un documento oficial para que se le comunique a la institución registral, es en ese orden de ideas que la sanción a imponerse no podrá ser de manera individual a los usuarios sino que se aplicará bajo un concepto general teniendo en cuenta los lineamientos que se estipulan en la normativa anteriormente citada.

El caso de las infracciones cometidas en el contexto de obras de infraestructura

El citado Decreto Legislativo N ° 1014, como ya sea precisado, tiene como fin primordial señalar lineamientos para que se invierta en servicios y obras de naturaleza pública de infraestructura, tomando en consideración el déficit en esta materia que existe en nuestro país, que se configura como una desventaja, comparándolo con otros países. En ese sentido, entre otros lineamientos, establece precisiones para la aplicación de la facultad sancionadora en estas situaciones.

Supuestos atenuantes de responsabilidad

La redacción previa de la LPAG contenía situaciones que atenuarían el grado de responsabilidad, establecidos en el D. Legislativo N ° 1029, que era necesario tomar en consideración para graduar la sanción. Dichos supuestos se han convertido en causales eximentes de responsabilidad, como profundizaremos en el acápite respectivo.

Sin embargo, como producto del D. Legislativo N.º 1272, el TUO establece una importante causal, que consiste en que, al iniciarse un procedimiento con el claro objetivo de sancionar, el usuario que quebrantó la norma registral acepta su responsabilidad de manera clara y formal. Además, se precisa que en las situaciones en que la imposición de una penalidad, se incorpora también el de una multa, esta podrá reducirse hasta la mitad o menos de la mitad del importe impuesto. Empero, hay una variedad de conjeturas, verbigracia, en temas de tránsito, en que dicha reducción puede ser aún mayor.

Principio de tipicidad

Es muy común la confusión que se da entre la legalidad como principio y la tipicidad como principio; es más el propio Tribunal Constitucional, estima que el accionar de los usuarios, que llegue a ser merecedor de una sanción administrativa, tendrá que estar previamente señalado de forma expresa en la norma que tenga rango de ley, mediante la positivización, no admitiendo ninguna clase de interpretación o la analogía en casos concretos.

En ese sentido; la tipicidad encuentra su mejor equivalente en el desarrollo del derecho penal, toda vez que ambos principios establecen que es sólo la ley, la que podrá establecer lineamientos con respecto a sanciones e infracciones no tomándose en consideración la temática jurídica en la cual se desarrollará. Pretender que la ley autorice la tipificación reglamentaria lo cual es contraproducente en materia penal

Colaboración reglamentaria

La ley encargada de regular el procedimiento de temas registrales y los medios para que la norma plasme la tipificación del comportamiento de los usuarios. Ello implica un importante entendimiento del contenido y alcance del principio de tipicidad; ya que de no hacerlo terminaría perjudicando a los administrados de la institución registral, si es que los parámetros no están delimitados de forma apropiada. La posibilidad de que la entidad registral pueda determinar y tipificar conductas le permite atribuirse potestad sancionadora sin que ello le permita controlarlas sea este control externo o interno.

Principio de irretroactividad. La retroactividad benigna

Lo que da entender el principio de irretroactividad, es que sólo se aplicarán las penalidades o sanciones vigentes, cuando un usuario de la entidad registral haya cometido una conducta quebrantando la normativa registral. En Perú es indispensable precisar que la norma legal ampara la aplicación de la retroactividad benigna, ya que se podrán aplicar sanciones que hayan sido normadas con posterioridad, que a su vez resulten beneficiando al usuario. Si se aplica con rigurosidad el principio de irretroactividad resultaría contraproducente y contrario a la constitución, ya que señala la existencia de la retroactividad benigna, como exclusiva en el derecho penal y cuando beneficia al reo; pero no para el ejercicio del derecho administrativo.

Sustento de la retroactividad benigna

En su gran mayoría los doctrinarios en materia administrativa, sustentan el principio de retroactividad benigna de la normativa sancionadora, en el área administrativa en la clara identificación esencial entre los ilícitos penales e infracciones administrativas, siendo a la luz de los hechos, una manifestación del ius puniendi del Estado. Por lo que, resulta contraproducente que se disponga el ejercicio legal de la figura jurídica de la retroactividad benigna para delitos y no pudiendo ser aplicada a infracciones en temas administrativos.

Alcance de la retroactividad benigna

Por último, se cree pertinente evaluar el argumento de los asuntos que concierne a la retroactividad benigna; en su ejercicio exclusivo, en el derecho administrativo, claro está aplicando sanciones; debido a la práctica se podría llegar a una eventual situación en que se alcanzarían hechos respecto de los cuales la entidad registral ya se ha manifestado con la aplicación de sanciones firmes, además de las que alcanzan su situación de ejecución.

Lo manifestado por nuestra jurisprudencia sobre el particular

Pedreschi (2003). Señala que, la máxima instancia judicial se ha pronunciado en dos importantes sentencias: una controvertida, en la cual establece la inconstitucionalidad de la retroactividad benigna en procedimientos administrativos, y en algunos se hace indispensable aplicar la retroactividad

benigna en el procedimiento administrativo. En la eventual situación de no aplicar la normativa, este pronunciamiento ha generado controversia, no obstante que, como consecuencia lógica, la retroactividad benigna en temáticas de potestad para sancionar por parte de la Administración no se deduce de manera automática de la norma fundamental.

En primer término, en la Casación N.º 3988-2011 se establece un importante criterio sobre lo desarrollado en esta investigación, que se configura como precedente vinculante el cual es recogido en sentencias posteriores emitidas por la Corte Suprema.

Principio de continuación de infracciones

Es el principio que en un primer plano parece que nos mostrará la forma de aplicar una técnica, cuando nos hallamos en un procedimiento administrativo, pero en realidad tiene un objetivo claro el cual es que no se de inicio a otros procedimientos administrativos, sino que sancionen al momento que el administrado quebrante la norma registral y que el conjunto de infracciones salen directa o indirectamente relacionados, podría aplicarse el supuesto de continuidad con el principal objetivo de la graduación en la sanción por parte de la institución registral.

Principio de presunción de licitud

Lo que se precisa cuando se aplica este principio, es que todas las instituciones que pertenezcan al ámbito público, es un primer término deberán presumir que los usuarios han desarrollado sus actos apegados a los lineamientos que estipula la normativa; siempre y cuando, no contemos con evidencia clara que demuestre lo contrario. Si hacemos una analogía de este principio y lo que nos señala en el derecho penal se hablaría de la presunción de inocencia, que se encuentra de manera manifiesta en la constitución; además, se añade que no debe ser mal utilizada con respecto al principio de “in dubio pro reo” que tienen una naturaleza jurídica totalmente distinta.

Principio de non bis in ídem.

Este principio va dirigido para que sea utilizado por la administración pública; sirve como directriz y señala que no puede imponerse de forma paralela la penalidad por el mismo acto y que le haya cometido el mismo administrado. En ese sentido la consecuencia lógica es que no se podrá bajo ningún contexto imponer dos sanciones de carácter administrativo para quien quebranto una norma, como se ha hecho referencia en párrafos anteriores.

Es indispensable precisar que cuando la norma legal hace clara referencia a una sanción, deberá ser concebida tanto para la administración y los administrados como una sanción eminentemente de carácter administrativo o quizás que se interponga parte de la sanción administrativa y a la vez, una sanción penal, de ser el caso, la penalidad deberá siempre verificarse que exista la triple identidad establecida por la ley.

El principio de culpabilidad

Contextualizándonos en la controversia sobre la responsabilidad y su naturaleza jurídica en el ámbito administrativo, del administrado, el Decreto Legislativo N.º 1272 ha incluido el principio de culpabilidad, la responsabilidad de carácter administrativo posee un terreno subjetivo; a excepción, de las eventualidades y situaciones hipotéticas señaladas de forma clara en una norma legal o algún decreto legislativo que regula dicha temática y se señalará una responsabilidad objetiva en temas administrativos.

Régimen de responsabilidad administrativa disciplinaria

Ley N° 30057	Ley del Servicio Civil (Título V)
Ley N° 30647	Ley que precisa el régimen laboral del Congreso de la República, en el BCR y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y sus trabajadores
Ley N°27815	Ley del Código de Ética de la Función Pública
Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS	TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM	TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Decreto Supremo N° 004-2014-PCM	Reglamento General de la Ley del Servicio Civil (Libro 1 - Título VI)
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE	Directiva N° 02-201S-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057"
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 174-2016-SERVIR-PE	Formalizan opinión vinculante del Consejo Directivo en la Sesión N° 29-2016, relacionada a La aplicación de la Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento

Funcionarios comprendidos y excluidos

Guzmán (2019). Sostiene que, es funcionario el representante político que desempeña la función pública administrativa, que la desarrolla bajo las responsabilidades establecidas en el organigrama de un Estado. A la vez, tiene una intervención directa, además la dirección de conducir con responsabilidad a la entidad que está a su cargo, aunado a ello, la aprobación de políticas y normas legales.

Para las consecuencias del uso del PAD, se considerará como funcionarios públicos los que han sido designados como tales en la Ley del Servicio Civil (art. 52) y en la Ley Marco del Empleo Público (artículo 4), incluso para los cargos disímiles al de la Ley del Servicio Civil.

Siendo necesario precisar que las categorías remunerativas de F-3, F-2 y F-1 del régimen del Decreto Legislativo 176 no implica que aquellos servidores sean funcionarios, sino que serán funcionarios aquellos establecidos en la Ley del Servicio Civil.

Según la Ley del Servicio Civil, los funcionarios públicos se clasifican en:

- Funcionario de elección popular, directa y universal.
- Funcionario de designación o remoción regulada.
- Funcionario de libre designación y remoción

TIPO DE FUNCIONARIO	DEFINICION	CARGOS DE FUNCIONARIO POR CATEGORIA
FUNCIONARIO DE ELECCIÓN POPULAR, DIRECTA Y UNIVERSAL	Este tipo de funcionario público es elegido a través de un proceso de elecciones donde será el pueblo que se dirigirá a votar en una votación universal, directa y popular. La responsabilidad administrativa se enmarcara dentro de los procedimientos establecidos en cada caso concreto.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presidente. ➤ Vicepresidentes. ➤ Congresistas y del Parlamento Andino. ➤ Presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales. ➤ Alcaldes, teniente alcaldes y regidores.
FUNCIONARIO DE DESIGNACIÓN O REMOCIÓN REGULADA	Aquel que ocupa cargo cuyos requisitos, proceso de accesibilidad, vigencia o supuestos de remoción estén regulados con rango de ley.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Magistrados del Tribunal Constitucional. ➤ Defensor del pueblo. ➤ Contralor general y vice contralor. ➤ Presidente y miembros del Jurado Nacional de Elecciones. ➤ Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ➤ Director general y miembros del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. ➤ Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de órganos colegiados de los organismos constitucionalmente autónomos. ➤ Titulares, adjuntos y miembros de órganos colegiados de entidades que cuenten con disposición expresa sobre la designación de sus funcionarios.

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Los jueces que integran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ➤ Fiscal de la nación del Ministerio Público. ➤ Presidente de la Corte Suprema. ➤ Rectores y vicerrectores de las universidades públicas. ➤ Titulares, adjuntos, presidente y miembros del consejo directivo de los organismos técnicos especializados y reguladores y tribunales administrativos. ➤ Gobernadores. ➤ Aquellos señalados por norma con rango de ley, siempre que cumplan con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley N° 30057.
<p>FUNCIONARIO DELIBRE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN</p>	<p>Aquel cuyo acceso al cargo público se realiza por libre decisión (voluntad) del funcionario que lo designa, basada en la confianza para realizar funciones de naturaleza política, normativa o administrativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ministros de Estado. ➤ Viceministros. ➤ Secretarios generales de ministerios, secretario general del despacho presidencial y aquellos que por ley expresa tengan igual jerarquía. ➤ Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre designación y remoción. ➤ Gerente general del gobierno regional. ➤ Gerente municipal.

La responsabilidad disciplinaria puede recaer en funcionarios públicos de remoción o designación previamente regulada, así como en funcionarios de libre remoción y designación. En ambos casos, hay funcionarios exceptuados.

Funcionarios excluidos

a) Se encuentran exceptuados de responsabilidad administrativa disciplinaria los siguientes funcionarios:

- Funcionarios de designación o remoción regulada: el Contralor General de la República, miembros de Jurado Nacional de Elecciones, Defensor del Pueblo los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los funcionarios del Directorio del Banco Central de Reserva y el superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
- Funcionarios de libre remoción y designación: los ministros de Estado.

b) Directivos públicos de entidades Tipo A y Tipo B

El directivo es el servidor civil que ejerce labores vinculadas a la organización, direccionamiento o participar en las decisiones de un órgano o especial proyecto.

La Ley del Servicio Civil no ha establecido un procedimiento especial para Los directivos públicos, a diferencia de los funcionarios cuya responsabilidad es determinada por una comisión, por lo tanto, el quebrantamiento de las normas disciplinarias se direccionan mediante el procedimiento administrativo para los servidores públicos.

Ante la duda si un servidor público es funcionario o directivo público, sugerimos los siguientes pasos:

- Verificar si el cargo se encuentra en el listado de la Ley del Servicio Civil, si es así, entonces es funcionario público.

- Verificar que no se encuentre exceptuado de responsabilidad.
- Si el cargo no se haya enumerado en la lista de funcionarios, pero se encuentra en la documentación de gestión de la institución (clasificador de cargos, MOF, MOP, CAP, CPE) con posición de funciones directivas, entonces es directivo público.

Titulares de entidad Tipo B que no son funcionarios

En el hipotético hecho de que el encargado de la institución Tipo B (órgano desconcentrado, proyecto, programa) es directivo público, por el criterio de línea jerárquica, el informe de precalificación corresponde ser elaborado por la Secretaría Técnica de la entidad Tipo A, así como el procedimiento disciplinario será llevado a cabo por las autoridades de la entidad Tipo A.

- La entidad Tipo A ejerce la potestad disciplinaria sobre el titular de la entidad Tipo B - Secretaria Técnica de Tipo A competente - Criterio de línea jerárquica

a) Servidores civiles, de confianza y de actividades complementarias

Para el régimen disciplinario la palabra servidor civil, hace clara referencia a los funcionarios que se hallen organizados de la siguiente forma; funcionario, servidor civil de carrera, un directivo público, servidor de actividades que la complementan. Además se señala que los servidores de todas las instituciones que no tengan una relación directa con el gobierno, ya que su alcance se encuentran dentro de los decretos legislativos como por ejemplo el D.L N° 726 que regula la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector público; Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral de carreras especiales de acuerdo con la ley.

En ese orden de ideas, los colaboradores que laboren en instituciones públicas bajo la modalidad de, 276, 728, CAS, 30057 y carreras especiales, sin importar la modalidad de vinculación (contratado, nombrado, designado) se sujetan al procedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil, en caso quebranten la norma laboral.

El servidor civil es el funcionario que lleva a cabo labores con una estrecha vinculación de cumplir con la función sustantiva o misional de la entidad, así como el desarrollo de roles relativos a la administración propia de sus actividades.

El servidor de actividades complementarias es quien lleva a cabo labores que no tienen una relación directa a la funcionalidad de su rol y dentro de la institución en el área de administración.

El funcionario público de confianza; es aquel funcionario, que tiene una vinculación directa e inmediata con los directivos públicos y los funcionarios debido a la labor que desarrolla y su estadía se encuentra supeditada determinada por la confianza que le ofrece la persona que lo designó en el cargo.

Ex servidores civiles

El ex servidor es aquella persona que no ejerce función pública en la entidad, bajo modalidad alguna. Será procesado como ex servidor cuando hubiera tenido dicha condición cuando se haya cometido la realización de la falta.

Las faltas tipificadas para exservidores son:

- Asesorar o representar a un usuario de la institución registral, con respecto a un procedimiento, en el cual el funcionario público en mención tuvo participación directa cuando esté ejercía funciones dentro de la institución.
- Asistir legalmente a los usuarios de las entidades registrales en temas que aún estaban pendientes de resolver durante la vinculación laboral con la entidad.
- Elaborar acto jurídicos con naturaleza contractual con los usuarios, en un procedimiento administrativo dado con su participación
- De darse el caso, de violentar las restricciones señaladas, el funcionario público será sometido a un procedimiento investigatorio, y de corroborarse su responsabilidad tendrá una sanción, además la prohibición de ejercer algún

cargo público en 5 años, aunado a ello, esta sanción será inscrita en un registro correspondiente.

FALTAS DISCIPLINARIAS

Son acciones u omisiones, voluntarias o no, de los servidores civiles que contravienen las obligaciones y deberes que se desprenden de su relación contractual con el Estado y de la función a su cargo.

Gracias a las directrices de tipicidad y legalidad, para ser sancionadas deben encontrarse debidamente tipificadas, esto significa que la conducta prohibida debe estar descrita de forma detallada.

1. Faltas determinadas por las normas del Servicio Civil

a) Incumplir la normativa establecida en la LSC y su Reglamento, dentro de ellas es posible identificar:

- El uso indebido de las licencias en situaciones que otorgarlas; resulta ser obligatorio para la entidad registral, y eso en correlación con la norma en vigencia. No se encuentra regulada las licencias que se conceden por cuestiones personalísimas.

- Provocar hechos que vulneren la libertad sindical.

Con respecto del contenido y alcance de la libertad sindical como derecho constitucional, se ha precisado a través del fundamento 26 del Exp. N° 008-2005-PI/TC que se desarrolla de la forma siguiente:

- El derecho a fundar organizaciones sindicales.
- El derecho de libre afiliación, desafiliación y reafiliación en las organizaciones sindicales.
- El derecho a la participación activa dentro del sindicato.
- El derecho de no participación del Estado, en las actividades de las organizaciones sindicales.

- Realización de actos de nepotismo.

Los actos de nepotismo que se encuentran inmersos en la Administración son totalmente prohibidos; ya sea, entre cónyuges o parientes, en cualquiera del régimen laboral que trabaje el nuevo colaborador, que puede ser bajo el régimen D.L N° 276 o también el D.L N° 728 o el conocido régimen de C.A.S, reglamentado por el D. Legislativo N° 1057, quedando también terminantemente prohibido los profesionales de la salud, diplomáticos, fiscales, docentes universitarios, inclusive la prohibición alcanza los de consultoría y de otra naturaleza análoga.

En relación al artículo precedido, se podría indicar que se evidencia un acto de nepotismo en los siguientes escenarios;

1. Cuando un servidor de la entidad pública, con la facultad conferida por la ley, puede nombrar y contratar, pero la utiliza para la contratación de un pariente, que se encuentra en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. Además se tiene el escenario, donde el servidor público sin tener potestad para contratar o nombrar al personal; influye directa o indirectamente, en la contratación o el nombramiento del personal.

El supuesto indicado se da cuando el servidor público que al no contar con las facultades, para la contratación o nombramiento del personal; influye directamente en las contrataciones de este tipo. Se desprende de este supuesto dos hipotéticas situaciones denominadas de injerencia directa e indirecta.

- Injerencia directa: Se pone de manifiesto cuando el servidor público; tiene un grado de parentesco, ya sea del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y además su puesto es superior a quién sea nombrado o contratado dentro de la entidad estatal.
- Injerencia indirecta: Se manifiesta cuando el servidor o funcionario público no integra la institución registral en la que realizó la contratación, o tal vez el nombramiento del personal; pero puede influir en las personas que si pueden dentro de la institución tomar este tipo de decisiones como la contratación o el nombramiento del personal. Bajo este escenario tiene la

obligación de aportar los elementos necesarios de convicción para poder probar y acreditar la imputación que se hace, ya que no es de aplicabilidad el principio de presunción legal como en la injerencia directa.

- Agredir física o verbalmente al administrado de los servicios que ofrece la entidad.
- Acoso moral o sexual.

Infracciones a los deberes de la función pública

Deber de neutralidad

- La obligación legal de adecuar su actitud con imparcialidad de índole económico político o cualquier otro que pudiese tener una relación con el desarrollo de sus funciones, en sede administrativa, y además se puede evidenciar autonomía y independencia y la desvinculación con los usuarios instituciones o partidos políticos.
- Son ejemplos de acciones que infringen el principio de neutralidad:
- Favorecer a un administrado emitiendo una licencia, un permiso o la resolución de un trámite administrativo, contraviniendo la legislación registral, por presiones de tipo político o económico.
- Ejercer presión o condicionamiento, en su calidad de militante o dirigente de un partido político o por filiación sindical, con el fin ruin de conseguir un beneficio para su persona o un particular.
- Ejerce presión o injerencia directa o indirecta para la contratación, nombramiento de cargos de confianza o contratación ad honorem de familiares o parientes: hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, unión de hecho o la figura de convivencia (Ley N° 30294, que modifica la Ley N° 26771, Ley de Nepotismo).

GRADO	RELACIÓN CONSANGUÍNEA	RELACIÓN CONSANGUÍNEA	RELACIÓN CONSANGUÍNEA	RELACIÓN DE AFINIDAD	RELACIÓN DE AFINIDAD	RELACIÓN DE AFINIDAD
1º grado	Padres	Hijo		Suegro(a)	Yerno/ Nuera	Hijo(a) del cónyuge que no es hijo(a) del (la) servidor(a)
2º grado	Nieto(a)	Hermano(a)	Abuelo		Cuñado(a)	Nieto(a) del hijo de cónyuge que no es hijo del (la) servidor(a)
3º grado	Bisnieto(a) Bisabuelo(a)	Tío(a)	Sobrino(a)			
4º grado	Tataranieto(a) Tatarabuelo(a)	Primo(a) Hermano(a)	Tío abuelo(a) Sobrinonieto(a)			

Deber de transparencia

El desarrollo de su función para otorgar el servicio, debe ser de forma transparente; esto es, que en primer término los actos a desarrollarse tienen carácter de acceso público y además accesible de conocimiento a la comunidad sea una persona natural o jurídica. El funcionario deberá agilizar el trámite cuando se le solicite información y está tendrá que ser oportuna fidedigna y completa.

Acciones que infringen el deber de transparencia:

- Denegar la información que fue pedida mediante solicitud por los usuarios, bajo el contexto de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin excusar la excepción que podría darse.
- No cumplir con la presentación de la declaración jurada de rentas o intereses, en el tiempo estipulado en la normativa registral.

Deber de discreción

El funcionario público tendrá que guardar estricta reserva cuando se solicita información, acerca de un hecho que tenga conocimiento debido a la función que realiza, dentro de la Administración pública sin tomar en consideración las responsabilidades y deberes que debe cumplir en mérito de la normativa registral, que delimita el acceso y transparencia a la información pública.

Acciones que infringen el deber de discreción:

- Entregar el cuestionario de preguntas y respuestas del examen de conocimientos del concurso exigido por ley para ingreso o ascenso, que por razón a su función tiene en custodia.
- Revelar información relativa a procedimientos administrativos que se encuentran en investigación, los mismos que tienen carácter de confidencial: Por ejemplo, denuncias por actos de corrupción, contra la ética pública, faltas de carácter disciplinario.

Deber de ejercicio adecuado del cargo

Debido al desenvolvimiento de los roles de los funcionarios públicos; este bajo ningún contexto podrá tomar represalias de ninguna naturaleza ni usar la figura de la coacción contra sus compañeros, es decir de los servidores públicos o los usuarios de la Administración pública.

Deber de uso idóneo de los bienes del Estado

Otra de los deberes de los servidores públicos, es la preservación y custodia de los bienes del estado, tienen el deber de dar una utilización eficiente de los bienes que fueron asignados para el trabajo; en relación a las funciones que tuvieran en la administración pública, deberá utilizarse evitando el derroche, el abuso y un mal aprovechamiento, evitando así que otros funcionarios públicos puedan darle uso a los bienes del estado de manera eficiente, también se encuentran prohibidos el uso de estos bienes para fines propios que no tengan ninguna relación específica con respecto al servicio que ofrece dicha entidad.

Deber de responsabilidad

Todo funcionario que presta servicios en la Administración pública desarrollará sus funciones de manera integral y cabalmente y asumirá con debido respeto su labor pública.

- i. De darse el caso de eventualidades extraordinarias el funcionario podrá desenvolverse en labores que por su modalidad y naturaleza no son propias a su cargo, sin embargo podrá hacerlo siempre y cuando sea estrictamente

necesario para neutralizar, atenuar o superar las vicisitudes que enfrente la entidad.

Todo funcionario deberá respetar los derechos de los usuarios establecidos en el art. 55 de la Ley N° 27444, de la LPAG.

b) Prohibición de obtener ventajas indebidas

Ejercer su función pública para la obtención de ventajas y beneficios de índole indebido, sea para el funcionario o para un tercero mediante el ejercicio de su autoridad, cargo o influencia.

c) Prohibición de realizar actividades de proselitismo político

Ejercer su función pública con el objetivo de llevar acabo actividad proselitista de corte político, en el uso de su función o mediante el uso de recursos públicos infraestructura bienes, sea para su propio beneficio o para despotricar hacia otros partidos candidatos o inclusive organizaciones políticas.

Acciones que infringen la prohibición de realizar actividades de proselitismo político:

- Realizar propaganda de partidos o movimientos políticos en el horario de trabajo.
- Permitir que personas ingresen a la entidad para realizar propaganda de partidos o movimientos políticos en el horario de trabajo.
- Usar las instalaciones o equipos públicos para difusión de propaganda política, elaborar o almacenar material proselitista.
- Recolectar firmas en la entidad para propuestas políticas: revocatorias, inscripción de partidos o de candidaturas.
- Inducir a administrados beneficiarios de los servicios de la entidad a afiliarse a algún partido político o movimiento político.
- Realizar colectas o venta de tickets pro fondos para financiar grupos políticos o campañas electorales, durante la jornada de trabajo.
- Vestir símbolos o similares que identifiquen a partidos o candidatos políticos durante su permanencia en la entidad.

- Contratar bienes con fondos públicos en los cuales se exhiben mensajes que hacen clara referencia a partidos políticos.

d) Prohibición de un uso indebido de información privilegiada

La norma legal prohíbe que los funcionarios públicos participen en operaciones bancario - financiero valiéndose de la información privilegiada que manejan gracias a la entidad pública y a la cual tienen acceso por el cargo que desempeñan.

e) Prohibición de amenazar, presionar y/o acosar

Los funcionarios que trabajen en la entidad pública, tienen prohibido ejercer algún tipo de presión o acoso sexual contra otros funcionarios públicos o colaboradores de su entorno que puedan menoscabar su dignidad como personas o que las incite a realizar acciones dolosas.

Acciones que infringen La prohibición de presionar, amenazar y/o acosar:

- Realizar tocamientos u otras acciones físicas de connotación y naturaleza sexual que sean ofensivas y no deseadas por los compañeros de labores o subordinadas.
- Ejercer presión sobre personal subordinado para realizar un acto no acorde a los roles de su cargo, bajo amenaza de no la renovación del contrato de trabajo.
- Ofrecer un trato preferente o beneficio particular de cualquier índole a un servidor a su cargo o compañero de trabajo, a cambio de conductas físicas de naturaleza sexual.
- Realizar actos de hostilidad laboral o acoso moral contra los servidores a su cargo o servidores de igual nivel: comunicación ofensiva, asignación de tareas no acorde al puesto del servidor, desplazamiento a otra oficina o a la ORH, sin causa justificante.

Faltas por incumplimiento de las disposiciones en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444

El artículo 85, inciso q), de la Ley del Servicio Civil señala el quebrantamiento de las normas disciplinarias que, según su efecto gravoso, tendrán sanciones como por ejemplo la suspensión o la irrevocable destitución, siempre que haya sido sometido a un proceso administrativo. En ese sentido, las leyes que establezcan faltas o infracciones que puedan ser cometidas por servidores civiles, y además que estas no hubieran establecido el procedimiento y las sanciones, serán procesadas según las reglas procedimentales y sanciones de la Ley del Servicio Civil.

En esa línea, el artículo 100 de la Ley N° 30057 manifiesta de manera expresa que también constituyen faltas para fines de la responsabilidad administrativa disciplinaria las siguientes:

NUEVA TIPIFICACIÓN (DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS)	TIPIFICACIÓN ANTERIOR (LEY N° 27444)	DESCRIPCIÓN DE LA FALTA
11.3	11.3	Emisión de un acto inválido con ilegalidad manifiesta.
12.3	12.3	Emisión de acto viciado consumado o con imposibilidad de retrotraer sus consecuencias. Adicionalmente, puede conllevar una indemnización para el afectada.
14.3	14.3	Emisión de acto viciado aun cuando opere las causales de conservación, exceptuando que la enmienda se genera sin que medie solicitud de parte y previo a su ejecución.
39.2	36.2	La exigencia de los usuarios con respecto a cumplir el procedimiento, la entrega de la documentación y la información con la cancelación del costo que implica el derecho a tramitación cuando no corresponde
43.2	38.2	No cumplir con publicar el TUPA de la entidad en el diario de mayor circulación
55,	48.4	No realizar una supervisión debida para el cumplimiento de la normativa del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
	48.7	Dejar pasar en el ejercicio legítimo de su función de la Administración pública estás cumplan con la normativa para simplificar actos administrativos cuando se trata de trámites de Procedimientos y servicios que se prestan de forma exclusiva.

56.1	49	Publicar el TUPA de la entidad omitiendo procedimientos.
64.12	55.12	Exigir documentación prohibida de solicitar a las instituciones y requerir tasas diferentes a las debidas.
100.20	91.2	Intervenir en procedimientos teniendo conocimiento de encontrarse en causal de abstención.
152.1	14.31	Inobservancia injustificada de los plazos señalados para los trámites de las entidades registrales. Conservando la responsabilidad de índole civil por los daños que pudiera haber ocasionado.
152.3	143.2	Omitir supervisar si la inobservancia fuese reiterativa o sistemática. Aplicable también al superior jerárquico.
155	146	Dictar medidas que causen daño de imposible reparo a los usuarios.
162.4	153.4	Perder un expediente.
183	174.1	No recepcionar el informe en la instrucción de un trámite en el término señalado.
191.4	182.4	No convocar a audiencia pública dentro del plazo en procedimientos administrativos susceptibles de vulnerar derechos cuya titular sean ciudadanos indeterminados.
197.4	188.4	No resolver una solicitud dentro del término, permitiendo la declaración del silencio administrativo negativo.
250.3	233.3	Negligencia en la verificación de plazos que permite la declaración de prescripción.
259	239	<ul style="list-style-type: none"> ● La negativa a recepcionar sin justificación recursos, información, solicitudes, declaración o entregar constancia de esos documentos que se hayan presentado. ● No entregar dentro del lapso señalado en la normativa, la documentación que se haya recibido y que la autoridad competente debe decidir sobre ellos. ● La dilación sin causa justificada para la entrega de algún expediente o datos solicitados para la resolución de un trámite que dé continuidad al procedimiento que se halle sujeto un plazo. ● Resolución sin ninguna causa clara de temas de su competencia. ● Impulsar un procedimiento donde no tiene competencia. ● No avisar a su inmediato superior de la abstención de la cual está inmerso. ● Demora para cumplir con los mandatos del superior o contradecir sus resoluciones. ● Intimidación en cualquiera de sus formas al usuario que desee plantear un recurso administrativo.

		<ul style="list-style-type: none"> • Incurrir en manifiesto acto ilegal. • La difusión o permitir el uso a la información de carácter confidencial. • No solucionar dentro del plazo otorgado por la ley para cada trámite sin causa justificante. • Desconocimiento de cualquier forma, aplicar la aprobación del silencio positivo alcanzado por el usuario ante la entidad. • La inobservancia de metodologías para la determinar los costos de los trámites y servicios que presta la entidad administrativa. • El cobro dinerario por derecho de trámites sobre una UIT, sin tener previamente una autorización. • La inobservancia del procedimiento estandar. • El cobro de cuotas por los trámites superiores al establecido en su reglamento interno. • Aprobación o exigencia de requisitos o tasas en clara desobediencia a lo establecido en la norma y demás normativa de la materia. • La exigencia a los usuarios de presentar documentación prohibida de solicitar o no entregar los sustitutos documentales que permite la presente ley, aun cuando se les permite exigir ya que se avala en normativa interna de la entidad. • La suspensión injustificada de recepcionar documentación presentada por los administrados. • La negativa a recepcionar documentos, formularios presentados por los usuarios, o la entrega de constancia de que se recepcionó. • La exigencia absurda que las peticiones, recursos o documentos los deba presentar el titular del derecho cuando la norma no lo exija.
--	--	---

Sanciones

Amonestación verbal

Es el llamado de atención efectuado de manera verbal, por el inmediato superior en forma reservada y personal. No requiere para su imposición un procedimiento sancionador. Se lleva acabo cuando se presentan faltas leves.

La amonestación de carácter verbal no se anotan en el legajo del servidor. Tienen naturaleza reservada.

Base normativa:

Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC: numeral 17.2.

Informe Técnico N° 647-2015-SERVIR/GPGSC.

Amonestación escrita

La sanción es impuesta por faltas leves como Órgano Instructor y Sancionador del PAD por el jefe inmediato. El jefe inmediato se determina según la documentación de gestión de la administración. La sanción de amonestación escrita es formalizada u oficializada a través de acta del jefe de RR.HH o quien se desempeñe como tal, de acuerdo a la documentación de gestión de la administración.

En caso de la presentación de un recurso que apele la sanción, esta debe ser resuelta por el encargado del área de recursos humanos.

Base normativa

Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC: numeral 16.3.

Suspensión sin goce de compensaciones

La norma regula que puede existir la suspensión sin goce de remuneración y puede aplicarse un día hasta 365 días.

Establecer y determinar un tiempo para esta suspensión, se llevará a cabo por el jefe inmediato superior y ratificado por el jefe de recursos humanos, quién podrá establecer una modificación a la sanción.

Se hace oficial la sanción por medio de la documentación expedida por el jefe de recursos humanos.

Destitución

La figura jurídica de la destitución es aplicable siempre y cuando; haya existido previamente un procedimiento de carácter disciplinario, llevado a cabo por el jefe de recursos humanos. Se precisa entonces que en un primer momento es presentada por el jefe de recursos humanos y aprobada por el titular de la entidad, es así que bajo los parámetros legales podría modificar la sanción.

Se hace oficial la destitución mediante documentación expedida por el titular de la administración. De presentarse un recurso de apelación se resolverá por el Tribunal del Servicio Civil.

El acta de sanción de destitución será notificada al funcionario público mediante el organismo sancionador y el cargo se adjuntará al expediente y se remitirá una copia al legajo de la institución.

Nota

La obligación de registrar la inhabilitación y la figura de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, se dará, al día siguiente de haberse notificado al servidor civil, siendo derogada por el Decreto Supremo N° 012-2017-JUS.

Inhabilitación

La inhabilitación figura jurídica que proscribe a un funcionario o ex funcionario para ejercer la función pública, entendiéndose como tal, tanto a la entidad que lo sancionó como cualquier otra.

Esta sanción se puede presentar como:

i. Sanción accesoria

Se agregará a la sanción de destitución cuando esta queda firme o cuando se abre la vía del proceso contencioso-administrativo. Opera de manera automática por un lapso de cinco años.

ii. Sanción principal

Se aplicará como sanción para los ex funcionarios públicos y pudiendo imponerse hasta cinco años.

La autoridad competente para proponer la sanción es el jefe de ORH y es aprobada por el titular de la entidad, quien oficializa la sanción. La apelación es resulta por el TSC.

Cuando se deba aplicar a ciudadanos que han vuelto por segundo vez a la Administración Pública, se aplicará de la siguiente forma:

- Si el lapso de la sanción de inhabilitación fuera de tres meses o menos, la institución suspenderá la relación contractual hasta que se cumpla el tiempo impuesto de inhabilitación.
- Si el periodo de la inhabilitación fuera tres meses o más, la institución tendrá la obligación legal de concluir el vínculo laboral.

Sea accesoria o principal; la contabilidad del tiempo, de la figura jurídica de inhabilitación, se inicia con la notificación de la sanción impuesta y la administración pública considerará el tiempo en que el funcionario público esté fuera de la administración.

INHABILITACIÓN	TIPO DE SANCIÓN	SITUACIÓN LABORAL AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA FALTA	SANCIÓN	SITUACIÓN ESPECIAL
	Principal	Ex servidor civil ^(*)	Hasta cinco años	En caso de reingreso, si la inhabilitación es: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menor o igual a tres meses: suspensión del nuevo vínculo. ➤ Mayor a tres meses: conclusión del nuevo vínculo.
	Accesoria Principal: destitución	servidor	De cinco años	(-)

Base normativa

Ley N° 30057: artículos 88 al 90.

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM: artículos 102 y 105.

Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC: punto 14.

Determinación de la sanción a las faltas

Reglas generales

En primer término se determinará la responsabilidad disciplinaria del funcionario, el Órgano encargado de aplicar la sanción debe:

- Verificar la no concurrencia de los supuestos que eximen de responsabilidad (para mayor detalle, revisar el siguiente punto).
- La ley precisa que la sanción a imponerse debe contener razonabilidad, se hace indispensable la existencia de una proporción idónea, entre la sanción impuesta y la falta que se ha cometido
- Graduar la sanción.

En el caso que un funcionario público quisiera subsanar su acto o la omisión que se le imputa como infracción, con anterioridad a ser notificado con el comienzo del procedimiento administrativo para sancionar, puede ser tomado en cuenta para atenuar su responsabilidad de carácter disciplinario; además, también se podrán adjuntar supuestos que estén motivados y acreditados.

La entidad estatal debe considerar, que la conducta que van a sancionar no sea más ventajosa para el que infringió que el cumplimiento de la normativa infringida o en su defecto asumir la sanción.

Base normativa

Ley N° 30057: artículos 87 y 91.

Decreto Suprema N° 040-2014-PCM: artículo 103.

6.2. Supuestos que eximen de responsabilidad administrativa disciplinaria

Existe una enumeración expresa de las causas que eximen de responsabilidad administrativa, ergo se puede determinar la aplicación para las sanciones en el servicio civil:

- La incapacidad mental, comprobada de forma debida por la autoridad determinada por ley.
- El caso fortuito o de fuerza mayor, comprobado debidamente.

En esta circunstancia el hecho que ha causado algún daño, al bien jurídico protegido, por una causa que no puede imputarse debido a que se suscitó en un evento extraordinario, irresistible e imprevisible, impidiendo así a la

Administración pública que puede ejecutar la obligación o determinar su cumplimiento sea defectuoso o tardío.

Base normativa

Código Civil: artículo 1315.

- El ejercicio del cumplimiento de cargo, función o comisión.
- Inducir a error a la Administración pública, mediante una disposición o acto ilegal o confunso.
- El desenvolvimiento en sus funciones en hechos fortuitos como desastres, catástrofe sean inducidos o por causa natural, que en mérito a ello exigián la ejecución inmediata para evitar o mitigar el inminente perjuicio de bienes jurídicos protegidos como la salud, el orden público, la vida, etc.
- El ejercicio de los roles de los funcionarios públicos, trae como consecuencia, el velar por los intereses de carácter superior para la sociedad que tienen una relación directa; como lo son, la salud o en situaciones totalmente disímiles, cuando existan desastres naturales o catástrofes y se necesita la toma de medidas inmediatas para mitigar o superar la inminente afectación.

BASE NORMATIVA

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM: artículo 104.

Graduación de la sanción

La administración estatal en el ejercicio de sus roles impone una sanción de carácter disciplinario; esta tendrá que contener, una motivación debida, de forma clara y expresa, una plena identificación y la relación entre el hecho acontecido y la falta; aunado a ello, el criterio para imponer una sanción:

- Perjuicio grave a los intereses de carácter general o a los bienes jurídicos tutelados por el Estado.
- Ocultamiento de la falta cometida o impedimento de su descubrimiento.

- El considerarse la especialidad y el grado de jerarquía del funcionario público que haya cometido la falta; ya que también, se toma consideración la relación directa que existe entre la jerarquía del funcionario y la especialización en sus funciones con respecto a las faltas su deber será mayor en conocerlas y apreciarlas de forma debida.
- Las circunstancias en las cuales se da la comisión de la infracción.
- La concurrencia de conductas que se consideren como faltas.
- El contubernio de funcionarios públicos para participar en la comisión de la falta.
- Cometer en más de una ocasión la misma falta.
- El quebrantamiento de la norma de forma continuada.
- El beneficio de carácter ilícito que se obtuvo.

No es de aplicación automática ni correlativa. En cada caso particular la administración pública deberá evaluar no solamente la naturaleza de la falta, sino también los antecedentes del funcionario público.

Es indispensable también precisar que las tardanzas o las inasistencias, en las que pudiera incurrir un funcionario público, no tendrá por ningún motivo la naturaleza disciplinaria que se requiere para imponer una sanción.

Imposición de sanción menos gravosa

Cuando se inicie PAD con sanción de destitución, en la etapa sancionadora se podrá imponer sanción menos gravosa como suspensión o amonestación, según la valoración de los atenuantes y eximentes. Asimismo, para el PAD que inicie con suspensión se podrá imponer sanción de amonestación escrita, dependiendo del análisis respectivo. Sin embargo, no corresponde imponer sanción más gravosa que dió inicio el PAD, por ejemplo, sería una vulneración del debido procedimiento del funcionario público a quien se le imputa la conducta, cuando el PAD inició para sanción de suspensión y que en etapa sancionadora se imponga sanción de destitución, cuyo perjuicio es mayor para el servidor.

Base normativa

Ley N° 30057: artículo 91.

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM: artículo 103.

Oficialización de la sanción

Si se recorre el conducto regular, la sanción impuesta será oficial, cuando se haya comunicado al funcionario o exfuncionario público.

Nos encontramos ante una situación que amerite una amonestación escrita y a la vez, el superior inmediato deberá fungir el rol de órgano instructor y sancionador cuando se haya tomado la decisión de imponer la sanción tendrá la obligación legal de comunicar al jefe de Recursos Humanos para que mediante este órgano se le comunique y notifique correctamente el funcionario público.

La administración pública cuenta por lo general con la Secretaría Técnica quienes notificarán y harán oficial la sanción impuesta.

Base normativa

Ley N° 30057: artículos 89 y 90.

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM: artículo 93.

Directiva N° 002-2015-SERVIR/CPCSC: punto 17.3.

La prescripción del plazo para iniciar PAD y la prescripción del PAD

La normativa disciplinaria del Servicio Civil señala que la prescripción como elemento delimitador de la facultad en el ámbito disciplinario, en aplicación del principio de seguridad jurídica prescrito en la norma fundamental.

Es de observarse también que en el régimen disciplinario no se ha establecido la caducidad del plazo de prescripción. Otra característica clave de este régimen es la diferencia en los plazos para el procedimiento sancionador en sí mismo y para faltas cometidas por ex servidores.

Plazo de prescripción de la potestad disciplinaria en las faltas instantáneas

La figura procesal de la prescripción dentro de los trámites del procedimiento, opera a partir de los 3 años de que se cometió la infracción normativa; exceptuando, que durante ese lapso el área de recursos humanos o en su defecto el área que cumpla esa función tome conocimiento. Si tomamos en consideración este supuesto la figura procesal de prescripción opera después de un año de la toma de conocimiento, de no haberse dado el transcurso del plazo anterior que se fija en tres años.

Base normativa

Informe Técnico N° 181Z-2018-SERVIR-GPGSC: numerales 2.17 y 2.21.

Plazo de prescripción del procedimiento sancionador disciplinario

Encontrándose establecido en el art. 94 de la LSC, entre notificar la resolución del acto que da inicio al PAD y el notificar la resolución que establece la sanción o en su defecto decide por el archivamiento del procedimiento administrativo sancionador, no debiendo transcurrir más de un año calendario.

1.3 INVESTIGACIONES

Investigaciones nacionales:

Peña Gregorio Salomon (2018). En la tesis intitulada: Calificación registral de títulos por el juez y su enfoque negativo en la seguridad jurídica registral, análisis del art. 2011 del C.C peruano. De la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Escuela de posgrado. Tuvo como como objetivo general explicar si resulta suficiente el mecanismo fijado en el Art. 2011 del Código Civil, o sea, que el Juez aclare o adicione información complementaria, para que su mandato se inscriba adecuadamente, metodología sistemática y argumentativa basado en un marco teórico referencial, el cual permitirá que ésta no solo se repita, sino también se adecúe a nuevas exigencias y problemas futuros a investigar, razones que justifican la realización del presente trabajo.

Y como conclusión: Los registradores deben tener presente que no pueden renunciar al ejercicio de su labor con respecto a la calificación de títulos, independientemente si son dados por órgano judicial, sin embargo, queda fuera

del ámbito de la calificación el sustento de hecho o jurídico y el fundamento de la resolución.

Puerta Tuesta Julio César (2017). En la tesis intitulada: La documentación complementaria: la problemática para calificar registralmente los instrumentos de la administración desde el Código Civil Peruano. PUCP. Tuvo como finalidad: El estudio de la problemática con respecto a las restricciones que podrían ser un obstáculo en la función del Registrador Público afectando la capacidad de calificación que otorga la ley con respecto a los actos propios de la labor en los Registros Públicos. Como conclusiones: Si bien el trabajo del Registrador consiste en calificar títulos que busquen ser inscritos en los Registros Públicos, en el caso de actos que relacionados con predios y haciendo énfasis en aquellos que impliquen una modificación física de los mismos, la decisión que éste tome, se encuentra supeditada a la ejecución de un examen previo de su ámbito físico. Aunque el Registrador cuente con la facultad de tachar los títulos por el sólo hecho de no haberse presentado los planos de independización respectivos al momento de solicitar su inscripción, lo cierto es que ésta es sólo una solución a medias que no logra resolver el problema de fondo pues aún se mantiene la posibilidad de seguir presentando títulos incompletos que, eventualmente, ocasionarían la suspensión de los títulos que, aunque se encuentren cumpliendo con todos los requisitos solicitados, hayan sido presentados de manera posterior.

Andrade Palomo, Gabriela (2017). En la tesis intitulada: Usurpación del ejercicio registral en la calificación de los registros de predios. De la U. Cesar Vallejo. Lima – Perú. Tuvo como objeto es detallar el “modus operandi” de los funcionarios públicos de carácter registral, cuando califican el registro de predios y aplican la mala práctica de la usurpación, la investigación que se aplicó es explicativa y básica, y se puede colegir que el funcionario público encargado de registrar como el usurpar una función es un delito grave de los operadores jurídicos; ya que en su trabajo fungen como notarios y hasta como de jueces, esto en concordancia con el Reglamento de los Registros Públicos.

Investigaciones internacionales:

Pérez Rojas René Oswaldo (2018). En la tesis intitulada: La no inscripción de la documentación presentada ante Registros Públicos para un registro de

propiedad después de haber pasado por una concienzuda calificación registral. De la Universidad Católica de Ecuador. Trabajo de Titulación mediante Examen para la obtención del Grado de Magister en Derecho Registral y Notarial. Tuvo como finalidad: Que las anotaciones y los actos jurídicos con connotación contractual o mandatos judiciales o administrativos que vulneren el derecho a la propiedad y otros derechos sobre inmuebles. Aplicando una Investigación Cuantitativa – Experimental, esta elección la realizo en razón de algunos elementos del proyecto, en base al problema en cuestión, los objetivos a alcanzar, y los resultados a obtener. como Conclusiones: Además se pudo determinar la necesidad de expedir normas que ayuden al Registrador de la Propiedad para negar inscripciones en la forma que actualmente obliga el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, es decir debidamente fundamentadas.

Ramírez Gaitán Daniel Ubaldo (2017). En la tesis intitulada: La calificación registral de documentación en la vía notarial. De la U. San Carlos en Guatemala Escuela de estudios de postgrado. Tuvo como finalidad: la anotación, la inscripción y cancelación de los actos de naturaleza contractual que inciden en el dominio y otros derechos reales y muebles específicos. Al concluir el proceso de investigación en el cual se llegó a establecer los límites y alcances de la calificación registral y las implicaciones de algunas medidas utilizadas por el Registro General de la Propiedad.

1.4 Marco conceptual

Inhabilitación

La inhabilitación consiste en la prohibición que tiene un servidor o ex servidor para el ejercer la función dentro de instituciones del estado, entendiéndose como tal, tanto a la entidad que lo sancionó como cualquier otra.

Sanción accesoria

Se agrega a la sanción de destitución cuando esta queda firme o cuando ya no se pueda accionar ningún recurso en la vía administrativa. Opera de manera automática por un lapso de cinco años.

Sanción principal

Se presenta como sanción para los ex servidores civiles y es hasta por cinco años.

Procedimiento administrativo: Son las operaciones realizadas mediante un orden de prelación; pero que configuran una sola unidad, dentro de la funcionalidad de la Administración pública, además de estar hechas para cubrir una tarea o una actividad en concreto.

Calificación registral: Es el poder que le otorga la ley al funcionario público, del ente registral, para que pueda adjuntar un registro y poder evaluar de forma concienzuda la legalidad de los documentos, que serán de su responsabilidad exclusiva, entiéndase documentación variada, desprendiéndose por su propio mérito su inscripción.

Servidor o funcionario

Es toda aquella persona que, no importando el régimen laboral en cual se encuentre tiene un vínculo que lo une de manera contractual a la entidad encargada del registro, y que en mérito a ello puede ejercer sus funciones.

Registrador Público

Funcionario público encargado de registrar los títulos de acuerdo a ley.

Ética en el Registrador.

El funcionario que en el ejercicio de sus funciones acatará a los siguientes principios: Respeto, lealtad, , probidad, veracidad, idoneidad, justicia y equidad, todos ellos con incidencia al Estado de Constitucional de Derecho.

Responsabilidad administrativa disciplinaria

Es el comportamiento que tiene que tener el funcionario público ante la exigencia de la normativa legal, con respecto al ejercicio de sus funciones o tal vez cuando preste servicios; para lo cual se iniciará el procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanción.

Proceso administrativo sancionador

Tipo de procedimiento, que tiene un mecanismo que se haya integrado por varios actos que se encuentran relacionadas y pretenden delimitar si hubo un quebrantamiento administrativo, con el fin de que se corrobore la inminente responsabilidad del usuario, quién estará expedito para que se le imponga una sanción si este realizó y desplegó la conducta infractora.

La Superintendencia Nacional de los registros Públicos

Organismo descentralizado autónomo del Sector Justicia, tiene que cumplir las normas y reglamentos que señala la normativa registral para las instituciones de las entidades estatales.

1.5. Marco Legal.

- 1) Constitución política del Perú 1993.
- 2) Ley N° 27785, modificada por la Ley N° 29622, y publicada 7 de diciembre del 2010 y por la que se amplía las facultades para sancionar la responsabilidad administrativa funcional.
- 3) Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, publicado el 18 de marzo del 2011, a través del cual se consigue la aprobación del reglamento de la Ley N° 29622.
- 4) Acuerdo Plenario N° 01-2013-CG/TSRA
- 5) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 6) Decreto legislativo 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público
- 7) Ley N° 28175. Ley Marco Del Empleo Público
- 8) Ley N° 30057. Ley del servicio Civil

CAPITULO II

EL PROBLEMA, OBJETIVO, HIPOTESIS Y VARIABLES

2.1 Planteamiento del problema

2.2 Descripción de la problemática

En la actualidad en el Perú se están presentando diversas situaciones problemáticas en las instituciones publicadas encargas de dar servicio a la comunidad, cautelar el patrimonio de las personas que adquieren bienes; recayendo como responsables funcionales en la institución de la SUNARP, garantizando así la seguridad jurídica, con la finalidad de que los usuarios registren un bien y que la documentación este bien sustentada y sea la correcta.

Es en este contexto donde se halla la problemática de la investigación, ya que encontramos instituciones señalados de acatar lo establecido en la ley. La SUNARP cuenta con colaboradores fundamentales, los cuales son los Registradores que como empleado público y en concordancia a lo señalado en la normativa actual cumplirán con registrar los asientos registrales correspondientes con la finalidad de proteger la propiedad o el bien del ciudadano que confía en la institución establecida para esos fines. Dichos Registradores que son los funcionarios principales deben de cumplir con el perfil exigido para tan importante labor, es decir, condiciones morales y éticas, pero a pesar de ello muchas veces son vulnerados en su proceder y no cumplen con la misión que se les ha encargado.

Esta realidad demuestra que efectivamente que los funcionarios públicos que laboran en la institución no cumple con lo señalado en la organización pública, viéndose comprometidos en una serie de actos ilícitos que afectan al personal y sobretudo la imagen institucional de la entidad pública, las cuales tiene que enfrentarse a sanciones administrativas y penales establecidas en el Ministerio de Justicia.

A parte de ello, afecta además a la seguridad jurídica, porque inciden en la buena imagen y la confianza que se debe tener en las personas que concurran en busca de un buen servicio, creando mucha desconfianza y temor por el actuar

de ciertas entidades públicas que se hayan involucradas en actos de corrupción de sus funcionarios.

En lo que respecta al procedimiento administrativo sancionador debemos señalar o partir de la premisa que el Estado se encuentra obligado en hacer cumplir las normas establecidas, para la cual tiene la potestad sancionadora ejercida dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador, con el propósito de emprender acciones de prevención, persuasión y sanción. Cabe precisar que los funcionarios públicos pueden cometer una serie de infracciones por acción u omisión en el desarrollo de sus roles, lo cual conlleva a su responsabilidad en la sede administrativa y consecuente instauración de un procedimiento administrativo disciplinario para imponer la sanción correspondiente.

2.3 Antecedentes

Calificación registral.

Rimasacca (2015). Precisa que, la calificación hecha por Registros Públicos es un juicio lógico, examen, verificación o evaluación de los títulos presentados, los mismos añaden el derecho que será materia de análisis para su respectiva inscripción, por parte de un funcionario, esto es, el registrador, y por defecto lo será en segunda instancia el Tribunal Registral con el claro objetivo de delimitar si tendrá accesibilidad al Registro el derecho rogado.

Amado (2018). Señala que, la calificación registral puede definirse como el enjuiciamiento que el registrador elabora acerca de la legalidad de los documentos y sobre la eficacia y validación de los negocios jurídicos contenidos en ellos.

García (1993). Precisa que, la calificar registralmente implica el juicio jurídico de valor que hace el funcionario público respecto a la documentación presentada como institución neutral y disímil del autor de la documentación.

Procedimiento administrativo.

Guzmán (2019). Sostiene que, es funcionario el representante político que desempeña puesto estatal, ejerciendo roles de gobierno en el organigrama del Estado.

Danós (1995). Señala que, los lineamientos de la facultad para sancionar, ergo, de todo el procedimiento para sancionar, se impondría como algo novedoso en el ordenamiento peruano, ya que no se contaba con esa figura jurídica, hasta la dación de la LPAG, de una normativa o el bloque de ellas, que regularan los principios aplicables al procedimiento sancionador en un ambiente genérico.

2.4 Definición del problema

Problema general

¿De qué manera se relaciona la calificación registral con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa?

Problemas específicos

¿De qué manera se relaciona el juicio de verificación con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa?

¿De qué manera se relaciona la evaluación de títulos con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa?

¿De qué manera se relaciona el acceso al registro con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa?

2.5 Finalidad y Objetivos de la Investigación

Finalidad

Este modesto trabajo de investigación tuvo como fin primordial comprender y analizar la calificación que se hace en las entidades registrales; realizada por el Registrador Público y el procedimiento administrativo disciplinario en nuestro país, esto debido en un escenario posible en el cual el registrador público no se ciña a lo estipulado en

nuestro marco legal y al momento de su desd empeño en el cargo incurra en alguna falta y sea el procedimiento disciplinario el cual se encargará de sancionar la falta en el que haya incurrido, esto a partir de evidenciar que los Registros Públicos en nuestro país cumplen una función trascendental, por la importancia de actos jurídicos que se terminan ingresando.

Objetivo General y Específicos

Objetivo General

Determinar la relación de la calificación registral con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.

Objetivos específicos

Establecer la relación del juicio de verificación con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.

Determinar la relación de la evaluación de títulos con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.

Determinar la relación del acceso al registro con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.

2.6 Delimitación de la investigación

Delimitación espacial

El estudio se realizará en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa

b. Delimitación temporal

El periodo en el cual se llevará a cabo la investigación comprenderá los meses de noviembre del 2018 a julio del 2019.

2.7 Justificación e importancia del estudio

El presente estudio se justifica por el avance vertiginoso de una cultura de la legalidad de los registradores públicos cumpliendo sus obligaciones en concordancia a lo estipulado en el código de ética. Incluyendo el análisis de las sanciones disciplinarias planteadas en la Ley N° 27444.

La importancia que tiene la investigación, es demostrar que los principios éticos y morales garantizan la calificación registral que realiza el Registrador Público de acuerdo a lo que especifica la ley y por consiguiente se tiene una óptima seguridad jurídica.

Los beneficiarios serán los registradores públicos, los asistentes registrales y el Ministerio de Justicia y los derechos Humanos en la zona registral N° XII – Sede requipa.

2.8 Supuestos Teóricos

Rimasacca (2015). Sostiene que, es un juicio lógico, examen, verificación o evaluación de la documentación presentada, los cuales contendrán el derecho o que será materia de estudio para su inscripción, por parte de un funcionario, esto es, el registrador, aunado a ello la segunda instancia será el Tribunal Registral en aras de determinar si puede acceder al Registro del derecho presentado. En tanto que se limite el acceso a la misma documentación válida y perfecta, tanto en la forma, como en el fondo.

Chico y Ortiz (2000). Señala que el primer paso será mediante la entrega de una solicitud para la inscripción adjuntando para ello, el título es así que se da el inicio al procedimiento registral; luego de ello, se da una verificación de su asiento registral, el encargado del registro, hace un estudio lógico y analiza los hechos y supuestos fácticos además ayuda con una subsunción jurídica y con ello elaborará su resolución al culminar este procedimiento: la práctica otorga dos caminos, la suspensión o denegación del asiento registral que se ha solicitado. Posteriormente el mismo autor y Sancho Rebullida añaden: "Se basará en un juicio valorativo, con el objeto de no declarar un derecho que se encuentre en controversia, sino para que se incorpore o no, de registrar una nueva situación inmobiliaria."

Peña (1999). Señala que la calificación registral consiste en determinar si la solicitud de un asiento registral, llega a registros con todos los requisitos que solicita la norma para que se puede registrar, en otras palabras si todo lo presentado se ajusta a ley, y en esa línea de razonamiento si se practica o no el asiento que se solicitó.

2.9 Hipótesis y variables

Hipótesis Principal y Específicas

Hipótesis principal

La calificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.

Hipótesis específicas

El juicio de verificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.

La evaluación de títulos se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.

El acceso al registro se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.

2.10 Variables e Indicadores

Variable independiente: Calificación Registral

Variable dependiente: Procedimiento administrativo

VARIABLES	INDICADORES
Calificación Registral (V.I)	Juicio de verificación Evaluación de títulos Acceso al registro
Procedimiento administrativo (V.D)	Procedimiento sancionador Responsabilidad administrativa Comisión de una infracción

CAPÍTULO III

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS

3.1. Población y Muestra

Población.

Para realizar esta investigación se consideró a la población universal de 200 abogados de la ciudad de Arequipa.

Muestra.

La muestra estuvo conformada por 130, abogados especialistas en el tema de la ciudad de Arequipa.

- $N = 300$ $p = 0.50$ $E = 0.06$
- $Z = 1.96$ $q = 0.50$

$$n = \frac{Z^2 N pq}{E^2 (N-1) + Z^2 pq}$$

$$n = \frac{(1.96)^2 (200) (0.50) (0.50)}{(0.06)^2 (200 - 1) + (1.96)^2 (0.50) (0.50)} \quad n = 130$$

3.2. Diseño utilizar en el estudio

Tipo y diseño de investigación.

Tipo: aplicada

Diseño: descriptivo

M1 = Oy (f) Ox

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas e instrumentos para realizar el presente investigación se utilizó la técnica de recolección de datos el instrumento que se utilizó fue el cuestionario

3.4 Procesamiento de datos.

Los datos fueron procesados por el estadístico Spss, con el cual se pudo procesar los datos arrojados por nuestra encuesta.

Se procedió de la siguiente forma:

- Se calcularon las frecuencias
- Se calcularon los puntajes obtenidos
- Se calcularon los gráficos

Para la prueba de hipótesis se operó con la prueba Chi cuadrado de Pearson la cual señala la relación existente entre variables.

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1. Presentación de Resultados

En el presente capítulo se presentan los resultados de las encuestas realizadas procesados y tabulados en cuadros o tablas explicativas donde se identifican las muestras de las encuestas realizadas. Asimismo, en algunos casos se han fusionado dichas muestras para facilitar el análisis proyectado al conjunto de los abogados encuestados.

En este acápite se presenta la información derivada de las encuestas aplicadas a una muestra de 130 abogados conocedores del tema.

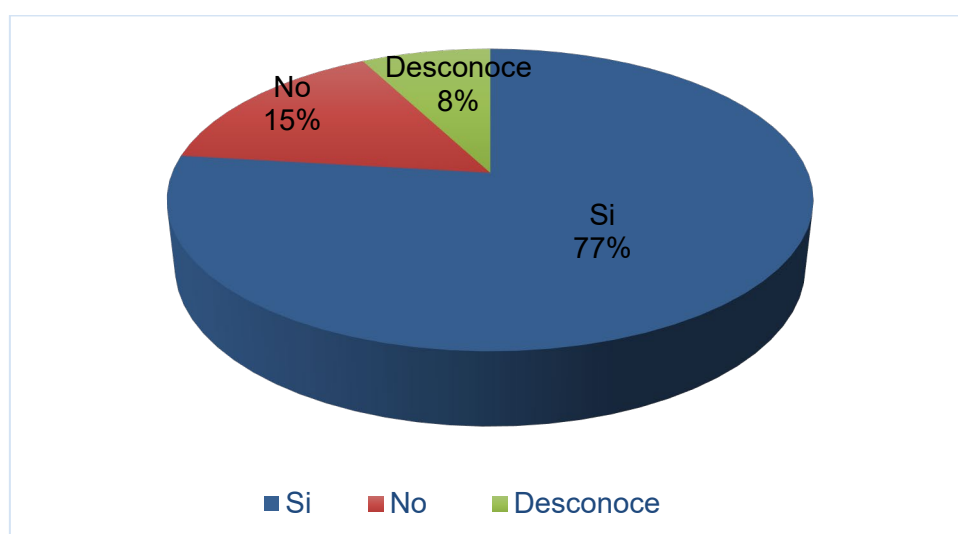
TABLA N° 1

El juicio de verificación a cargo del registrador público

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	SI	77.00%	100
	No	15.00%	20
	DESCONOCE	8.00%	10
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VER

GRÁFICO N° 1



Interpretación

De los resultados que se ven en nuestras tablas y gráficos podemos sacar las siguientes respuestas:

A la pregunta sobre si el juicio de verificación debe estar a cargo del Registrador público: el 77% de los consultados estimaron que Si consideraron que el juicio de verificación debe estar a cargo del Registrador; por otro lado el 15%, No estuvieron a favor de de que el juicio de verificación esté a cargo del Registror y el solo el 8% se limitaron a señalar que desconocen.

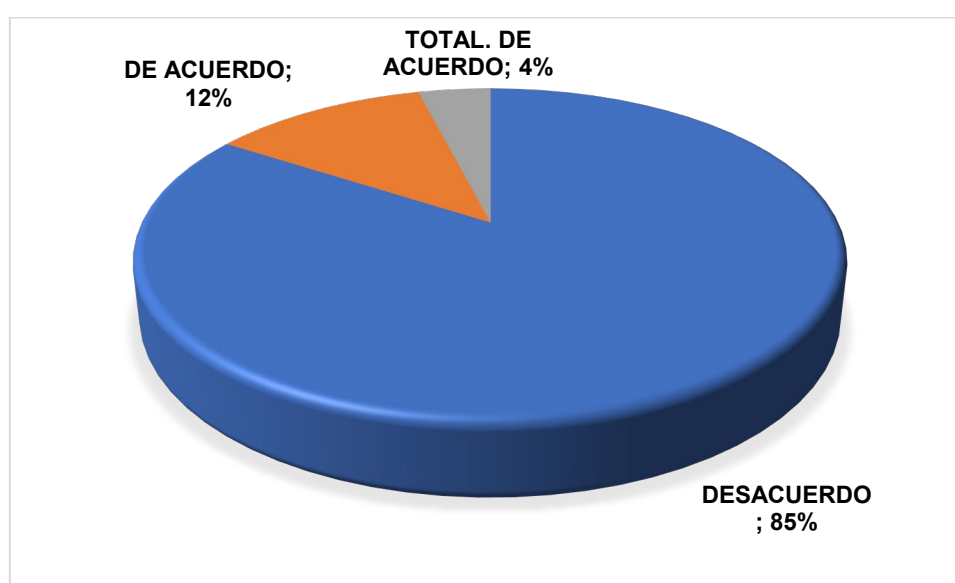
TABLA N° 2

El registrador protege los recursos institucionales

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	DESACUERDO	85.00%	110
	DE ACUERDO	12.00%	15
	TOTAL. DE ACUERDO	4.00%	5
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 2



Interpretación

La información vinculada con esta pregunta, denota que el 85%, de los consultados respondieron estar desacuerdo, el 12% se mostraron en de acuerdo y solo el 4% señalaron estar total. De acuerdo que el registrador protege los recursos institucionales.

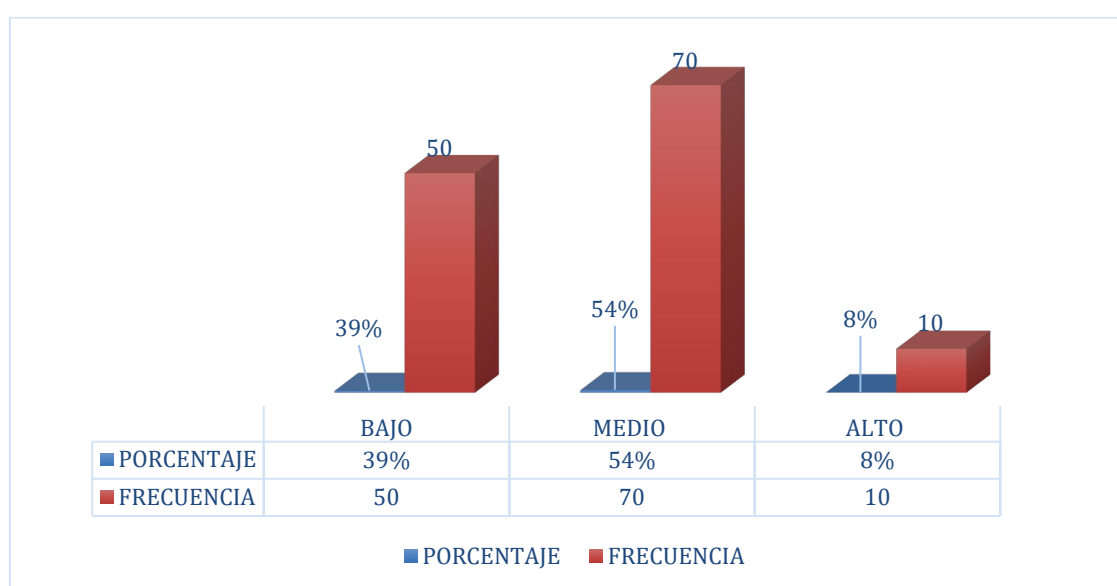
TABLA N° 3

El nivel de juicio de valor de los documentos

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	BAJO	39.00%	50
	MEDIO	53.00%	70
	ALTO	8.00%	10
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 3



Interpretación

Como lo describen los datos obtenidos se evidencia, con respecto a la pregunta nivel de juicio de valor de los documentos el 54%, de nuestros consultados respondieron el nivel de juicio de valor de los documentos era medio, el 39%, respondieron que el nivel fue Bajo, y solo el 8%, respondieron que fue Bajo.

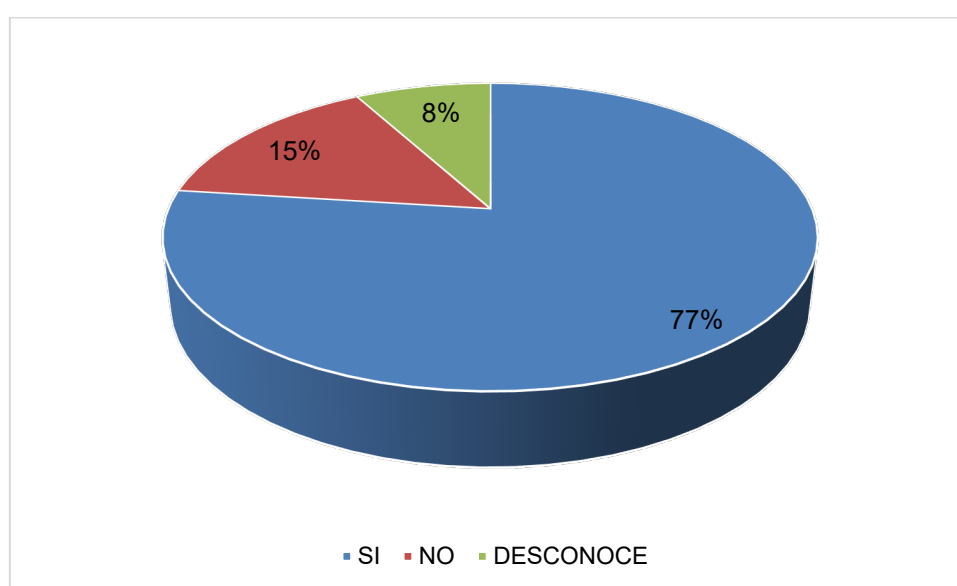
TABLA N° 4

El registrador público tiene lealtad, honestidad, equidad

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	SI	77.00%	100
	NO	15.00%	20
	DESCONOCE	8.00%	10
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 4



Interpretación

En estos datos encontramos que, el 77% respondieron que Si, el registrador público tiene lealtad, honestidad, equidad; mientras que el 15%, respondieron que No consideran que el registrador público tiene lealtad, honestidad, equidad; y, solo el 8% se limitaron a señalar que desconocían.

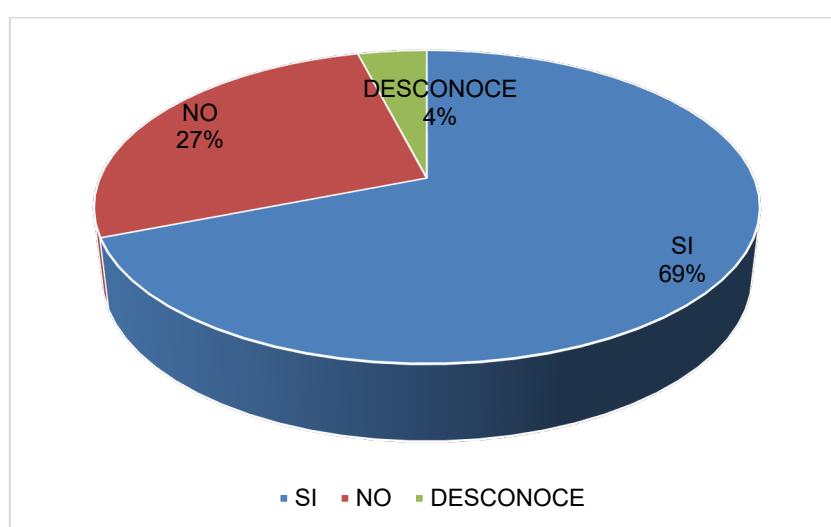
TABLA N° 5

El registrador en la evaluación de títulos actúa con responsabilidad

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	SI	69.00%	90
	NO	27.00%	35
	DESCONOCE	4.00%	5
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 5



Intepretación

Podemos apreciar que esta pregunta estuvo orientada la actuación del registrador con la responsabilidad el 69%, de los encuestados respondieron que Si, en cambio el 27%, de los consultados indicaron que No, el registrador en la evaluación de títulos actua con responsabilidad, y solo el 4% restante se limitaron a indicar que desaconocen.

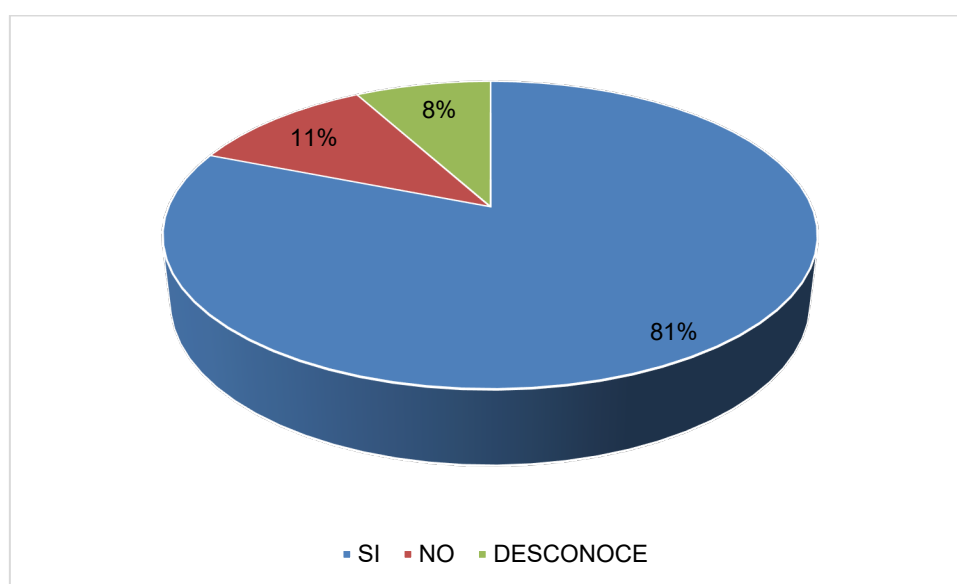
TABLA N° 6

El registrador en su labor profesional guarda privacidad y cumplimiento

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	SI	81.00%	105
	NO	11.00%	15
	DESCONOCE	8.00%	10
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 6



Interpretación

Como se puede ver tanto en la tabla y gráfico correspondiente se puede advertir que el 81% de los encuestados respondieron Si, ante la pregunta sobre el registrador en su labor profesional guarda privacidad y cumplimiento, el 11%, tuvieron una postura contraria y solo el 8% respondieron que se desconoce.

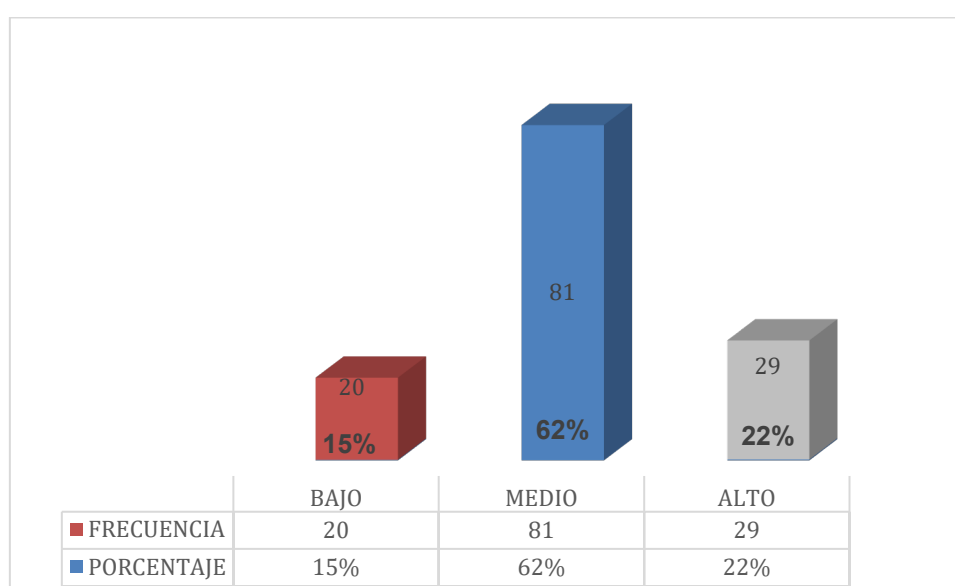
TABLA N° 7

El nivel de acceso al registro en nuestro país

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	BAJO	15.00%	20
	MEDIO	62.00%	81
	ALTO	22.00%	29
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 7



Interpretación

En cuanto a esta pregunta, hemos podido encontrar que el 62% de los consultados señalaron que el nivel de acceso al registro fue Medio, el 22% de los consultados señalaron que el nivel fue Alto y el 15%, indicaron que fue Bajo.

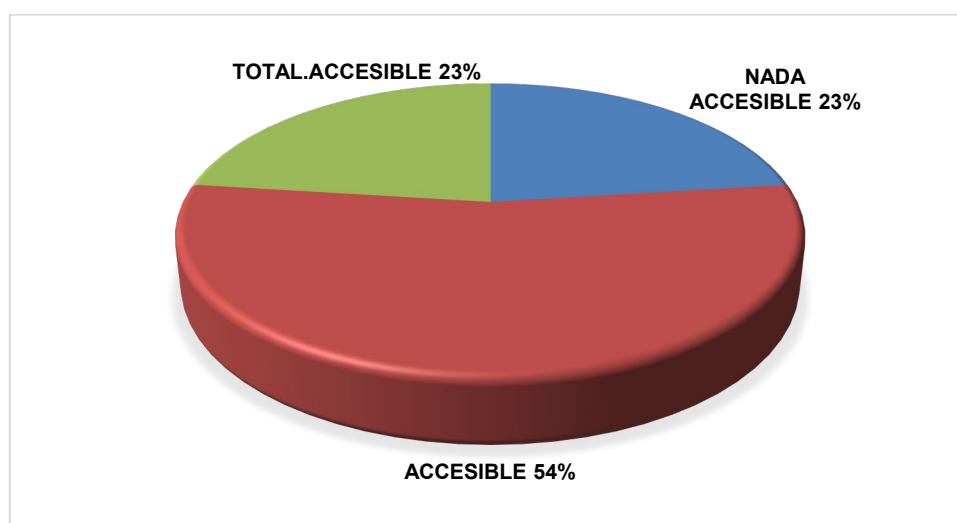
TABLA N° 8

El acceso al registro es facil para todos los ciudadanos

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	NADA ACCESIBLE	23.00%	30
	ACCESIBLE	54.00%	70
	TOTAL. ACCESIBLE	23.00%	30
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 8



Interpretación

Vista la información procesada hemos encontrado que el 54%, de los consultados señalaron que consideraron que era accesible el registro para todos los ciudadanos, por el contrario el 23%, de los encuestados respondieron que el registro era nada accesible y el otro 23% consideraron que el registro era totalmente accesible.

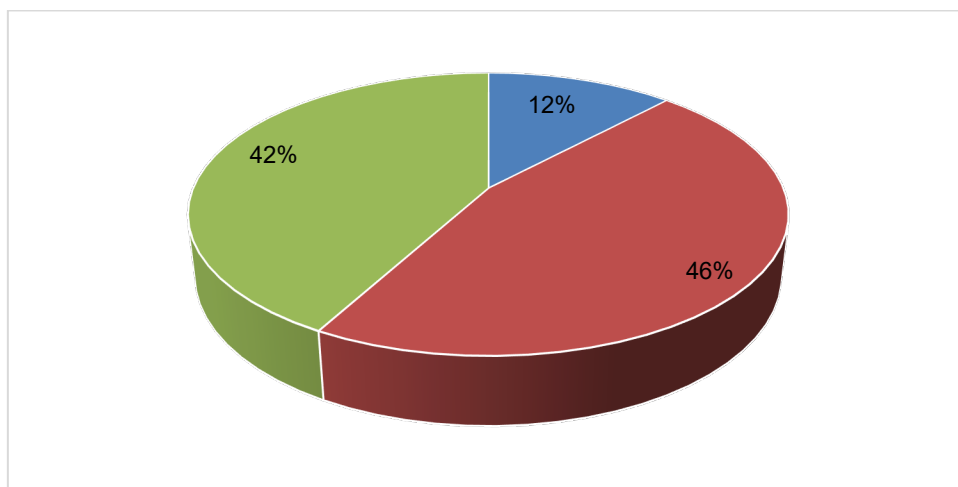
TABLA N° 9

Registrador público garantiza la seguridad jurídica en la calificación

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	NADA ACCESIBLE	12.00%	15
	ACCESIBLE	46.00%	60
	TOTAL. ACCESIBLE	42.00%	55
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 9



Interpretación

En esta pregunta podemos visualizar que el 46%, de nuestros consultados respondieron que estuvieron de acuerdo, por otro lado el 42%, de los consultados señalaron que estuvieron en totalmente de acuerdo y solo el 12% de nuestros consultados indicaron que estuvieron en desacuerdo.

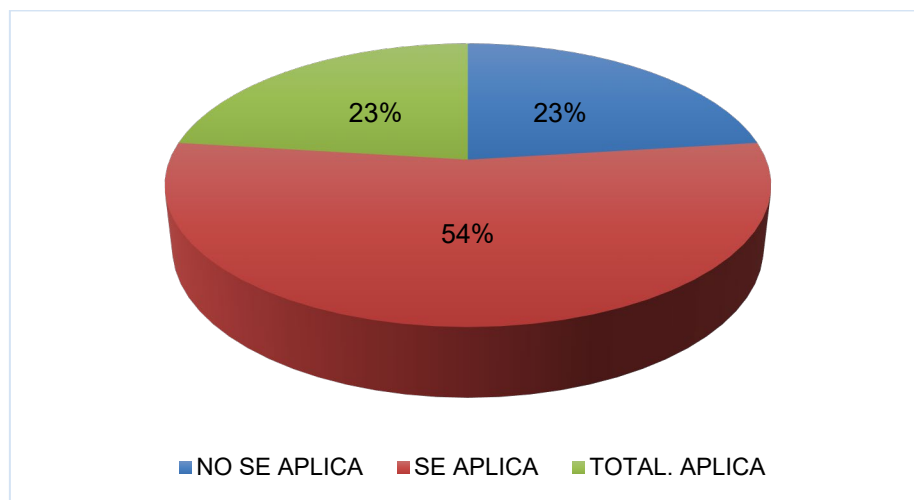
TABLA N° 10

El procedimiento sancionador se aplica a Registros Públicos

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	NO SE APLICA	23.00%	30
	SE APLICA	54.00%	70
	TOTAL. APLICADO	23.00%	30
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 10



Interpretación

Con respecto a esta pregunta, tenemos que de los resultados obtenidos en la tabla y gráfico, el 54%, de los consultados fueron de la opinión que se aplica, el procedimiento sancionador a los Registros Públicos, por otro lado el 23%, de los consultados respondieron que, No se aplica el procedimiento sancionador a los Registros Públicos, y el otro 23%, señalaron que se aplica totalmente.

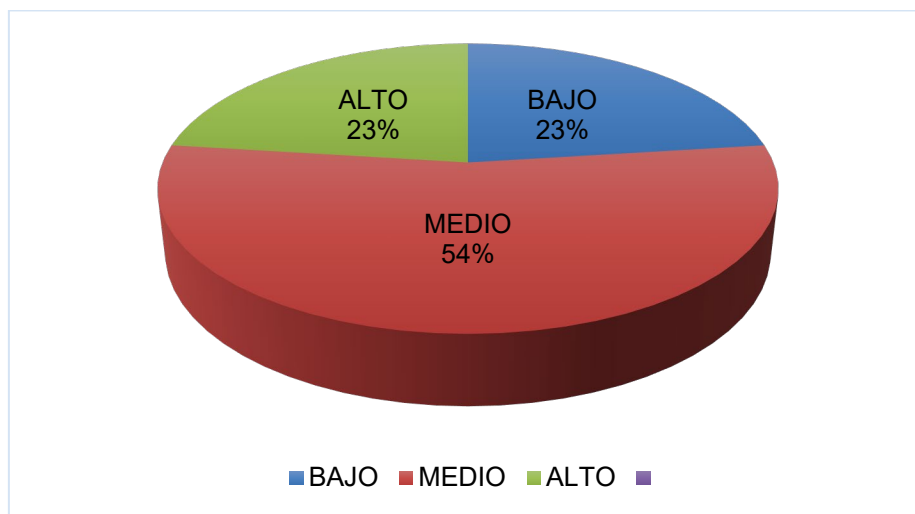
TABLA N° 11

El nivel del procedimiento sancionador debe ser

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	BAJO	23.00%	20
	MEDIO	54.00%	100
	ALTO	23.00%	10
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 11



Interpretación

Podemos observar que, en la siguiente tabla y gráfico nuestros consultados respondieron de la siguiente forma: el 54%, señalaron que el nivel del procedimiento sancionador debio ser Medio, por otro lado el 23%, constestaron que el nivel del procedimiento sancionador debió ser Alto y el otro 23% de los consultados señalaron que el nivel del procedimeinto debió ser Bajo.

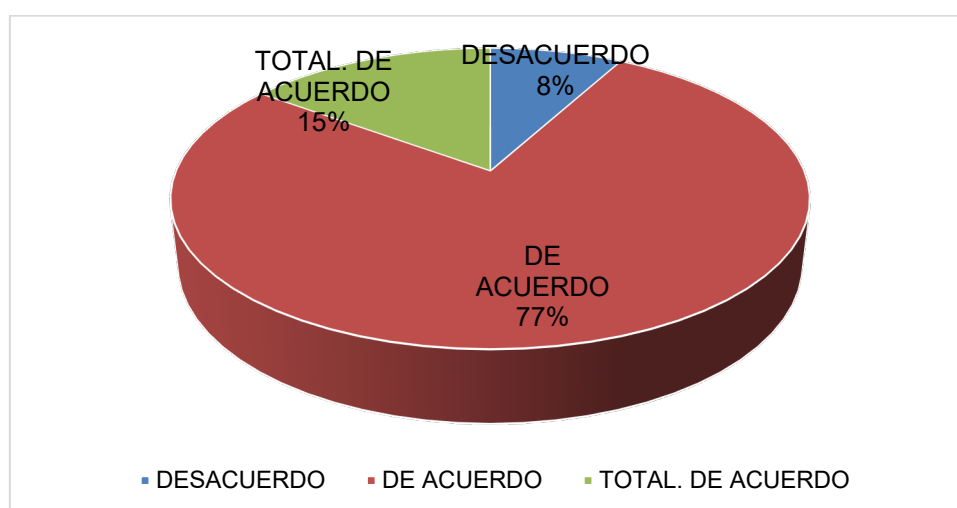
TABLA N° 12

Se debe determinar la responsabilidad del registrador

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	DESACUERDO	8.00%	10
	DE ACUERDO	77.00%	100
	TOTAL. DE ACUERDO	15.00%	20
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 12



Interpretación

Se muestra la tabla y gráfico en los cuales se nos muestran los siguientes resultados: el 77%, de los consultados respondieron que estuvieron de acuerdo a la pregunta se debe determinar la responsabilidad del Registrador, el 15%, señalaron que estuvieron Totalmente de acuerdo y solo el 8% respondieron estar en desacuerdo.

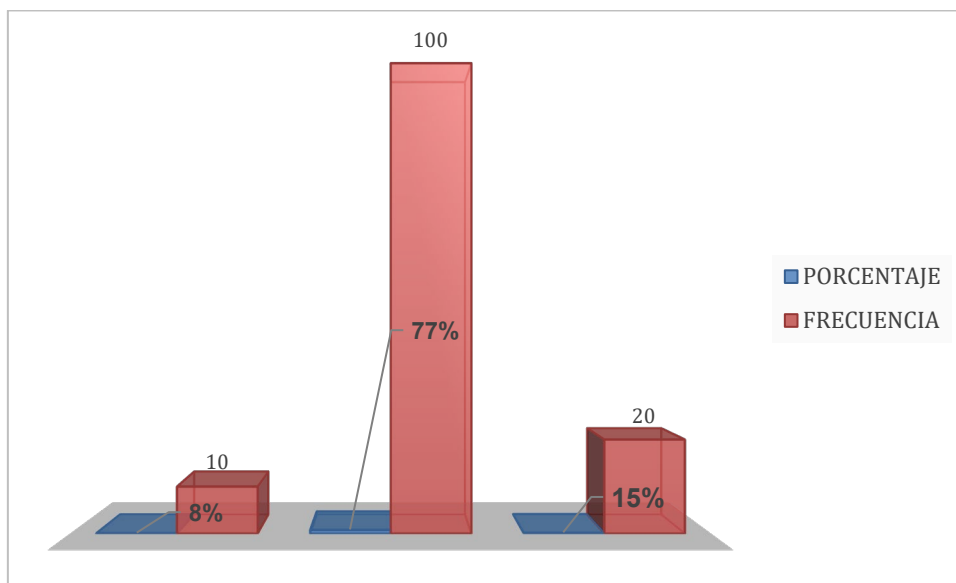
TABLA N° 13

El nivel de comisión de infracción por parte del Registrador

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	BAJO	8.00%	10
	MEDIO	77.00%	100
	ALTO	15.00%	20
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N°13



Interpretación

En lo que refiere a los datos encontrados en esta tabla y gráfico podemos detallar lo siguiente: el 77% de los encuestados respondieron que el nivel de la comisión de infracción fue Medio, el 23% de los consultados respondieron que el nivel de comisión de infracción fue Alto y solo el 8% de los encuestados respondieron que el nivel de infracción fue bajo.

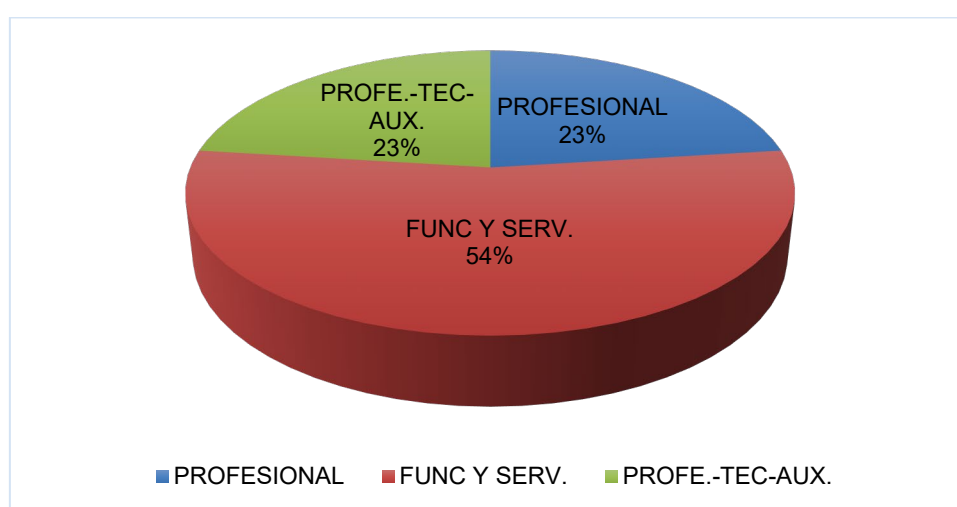
TABLA N° 14

Bases de la carrera administrativa y remuneraciones

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	PROFESIONAL Y TÉCNICO	23.00%	30
	PROFESIONAL Y SERV. PÚBL.	54.00%	70
	PROFESIONAL -TEC.-AUX.	23.00%	30
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 14



Interpretación

En este contexto podemos indicar que el 54%, de los encuestados señalaron que funcionarios y servidores públicos, por otro lado el 23%, de los encuestados respondieron que profesionales y técnicos y el otro 23%, respondieron que prefesionales.

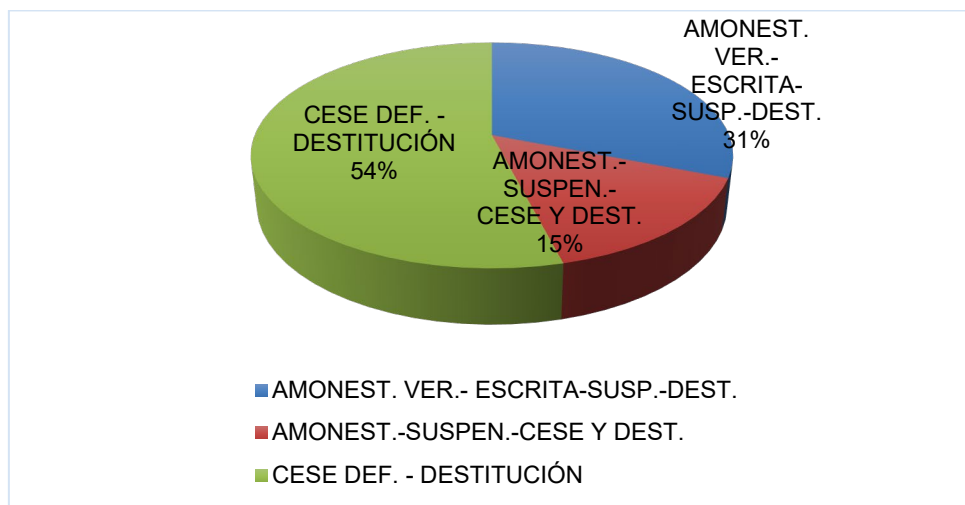
TABLA N° 15

Ely del servicio civil las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	Amonest. Verbal –escrita-susp	31%	40
	Amonest.-suspension.- cese y dest.	15%	20
	Cese def.-destitución	54%	70
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 15



Interpretación

En este contexto podemos apreciar que en esta tabla y gráfico los datos arrojaron lo siguiente: que el 54%, de los consultados indicaron Cese definitivo y destitución, el 31% indicaron que Amonestación verbal, escrita, suspensión y destitución y solo el 15%, señalaron que amonestación, suspensión, cese y destitución.

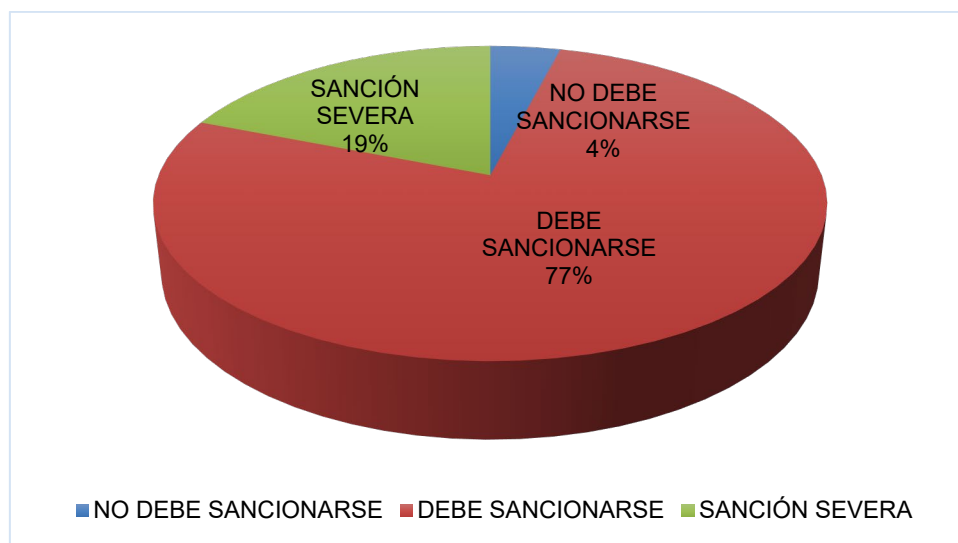
TABLA N° 16

Infracción por parte de los registradores debe ser sancionada

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	NO DEBE SANCIONARSE	4.00%	5
	DEBE SANCIONARSE	77.00%	100
	SANCIÓN SEVERA	19.00%	25
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N°16



Interpretación

Podemos apreciar que en estos resultados tenemos:

que el 77%, de los consultados respondieron que debe sancionarse la comisión de una infracción, el 19%, señalaron que debio darse una sanción severa y solo el 4% de nuestros encuestados respondieron que no debe sancionarse.

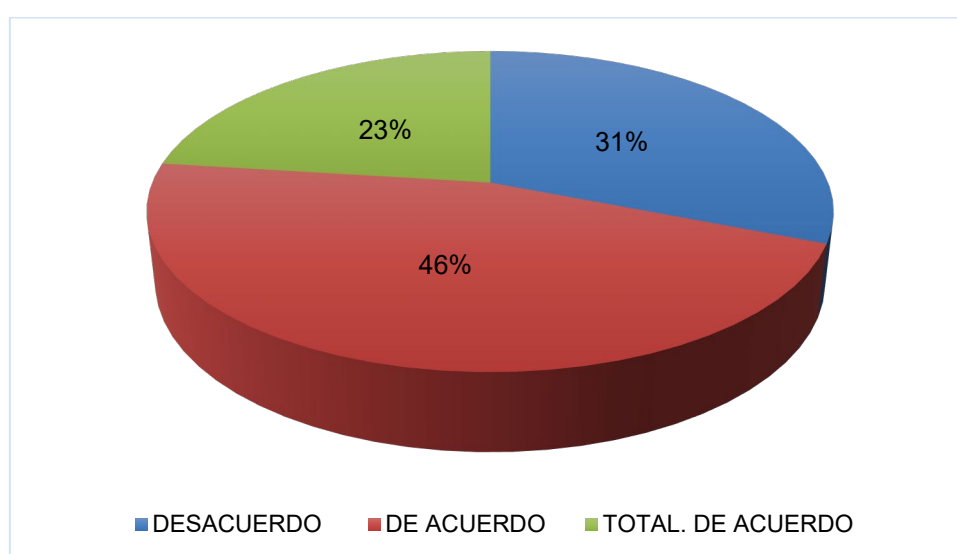
TABLA N° 17

Los registradores deben tener su propia norma

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	Desacuerdo	31.00%	40
	De acuerdo	46.00%	60
	Totalmente de acuerdo	23.00%	30
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 17



Interpretación

A la pregunta los registradores deben tener su propia norma, los encuestados respondieron que el 46%, estuvieron de acuerdo, por otro lado el 31%, de los consultados respondieron que estuvieron en desacuerdo y el 23% señalaron que estuvieron totalmente de acuerdo.

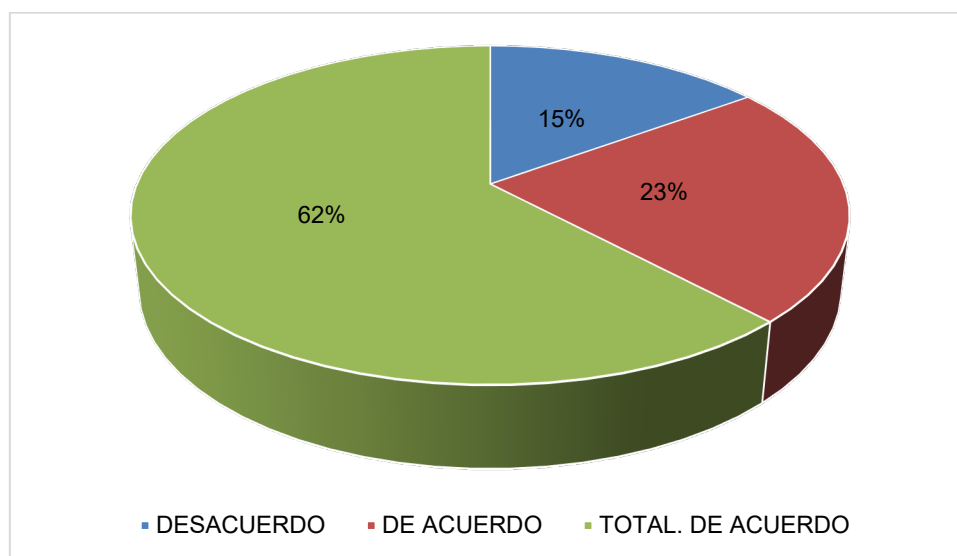
TABLA N° 18

Esta de acuerdo con el plazo de prescripción en la Ley del P.A.

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	DESACUERDO	15.00%	20
	DE ACUERDO	23.00%	30
	TOTAL. DE ACUERDO	62.00%	80
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 18



Interpretación

Podemos ver que con respecto a la pregunta esta de acuerdo con el plazo de prescripción en la ley del p.a. El 62%, de los encuestados respondieron que estuvieron totalmente de acuerdo, el 23%, señalaron que estuvieron de acuerdo y solo el 15%, respondieron que estuvieron desacuerdo.

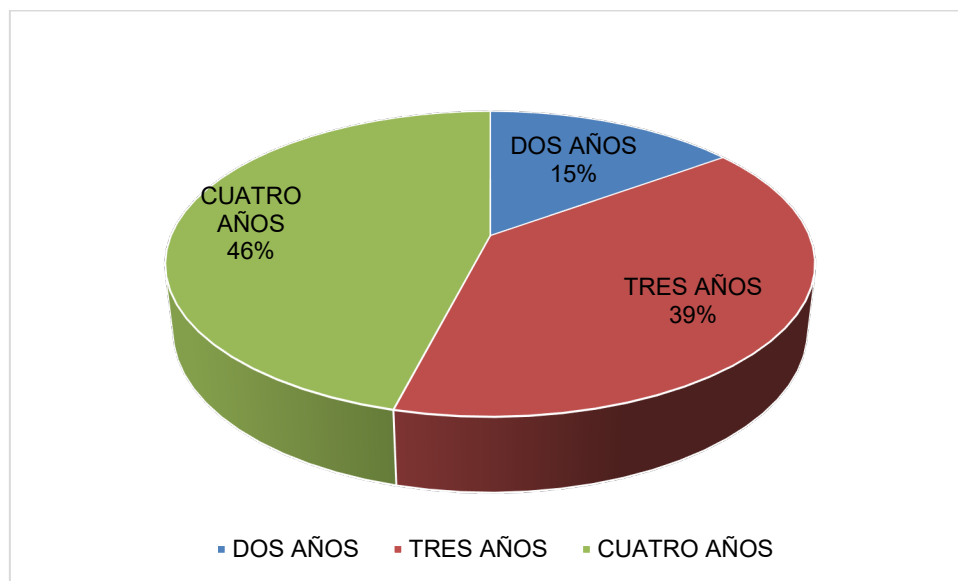
TABLA N° 19

La potestad de la autoridad registral para la determinación de infracciones.

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	DOS AÑOS	15.00%	19
	TRES AÑOS	39.00%	51
	CUATRO AÑOS	46.00%	60
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 19



Interpretación

Podemos apreciar que en la tabla y el gráfico los resultados son los siguientes: El 46%, de los encuestados señalaron que cuatro años, el 39%, respondieron que tres años y el 15%, de los encuestados respondieron que dos años, respecto a la pregunta la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones.

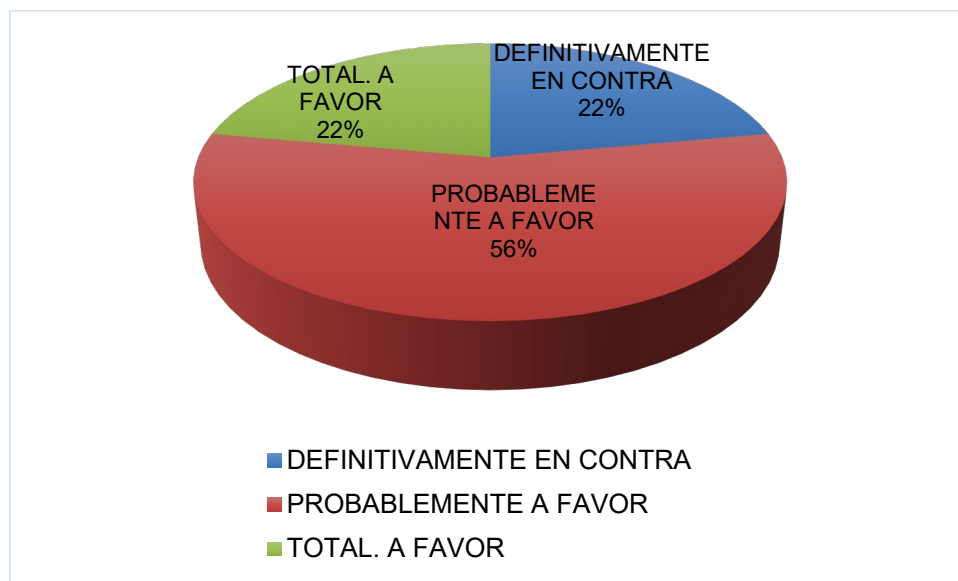
TABLA N° 20

La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones.

		PORCENTAJE	FRECUENCIA
Válido	DEFINITIVAMENTE EN CONTRA	23.00%	30
	TPROBABLEMNETE A FAVOR	58.00%	70
	TOTAL. A FAVOR	23.00%	30
	TOTAL	100%	130

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ESTADÍSTICO SPSS VERSIÓN 25

GRÁFICO N° 20



Interpretación

Vista la información procesada hemos encontrado que el 56%, de los encuestados respondieron que probablemente a favor, el 22%, de los encuestados señalaron que estuvieron totalmente a favor y el otro 22%, de los encuestados respondieron que estuvieron definitivamente en contra.

4.2. Contrastación de hipótesis

Hipótesis Principal:

La calificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Hipótesis nula:

La calificación no se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Hipótesis alternativa:

La calificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Pruebas de chi-cuadrado			
	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	27,576 ^a	4	,000
Razón de verosimilitud	35,242	4	,000
Asociación lineal por lineal	18,944	1	,000
N de casos válidos	130		

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,73.

H₁ La calificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

H₀ La calificación no se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

$X^2 = 27,576$ es mayor que $X^2_c = 9.488$

El resultado de fue: 27,576 es mayor que $X^2_c = 9.488$, de esta manera, se rechaza la H₀ hipótesis nula y se acepta la H₁ hipótesis alternativa, La calificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Estos resultados son corroborados por la prueba bilateral asintótica cuyo valor es 0.000, menor a la probabilidad de $p_v = 0.05$.

Contrastación de hipótesis específica N° 1:

Hipótesis específica N° 1

El juicio de verificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Hipótesis nula 0:

El juicio de verificación no se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Hipótesis Alternativa:

El juicio de verificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Pruebas de chi-cuadrado			
	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	130,000 ^a	4	,000
Razón de verosimilitud	173,232	4	,000
Asociación lineal por lineal	87,852	1	,000
N de casos válidos	130		

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,54.

H₁ El juicio de verificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

H₀ El juicio de verificación no se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

$X^2 = 130,000$ es mayor que $X^2_c = 9.488$

El resultado de fue: 130,000 es mayor que $X^2_c = 9.488$, de esta manera, se rechaza la H₀ hipótesis nula y se acepta la H₁ hipótesis alternativa, El juicio de verificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Estos resultados son corroborados por la prueba bilateral asintótica cuyo valor es 0.000, menor a la probabilidad de $p_v = 0.05$.

Contrastación de hipótesis específica N° 2

Hipótesis específica 2:

La evaluación de títulos se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Hipótesis nula 0:

La evaluación de títulos no se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Hipótesis Alternativa:

La evaluación de títulos se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Pruebas de chi-cuadrado			
	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	130,000 ^a	4	,000
Razón de verosimilitud	140,453	4	,000
Asociación lineal por lineal	72,499	1	,000
N de casos válidos	130		

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,31.

H₁ La evaluación de títulos se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

H₀ La evaluación de títulos no se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

$$X^2 = 130,000 \text{ es mayor que } X^2_c = 9.488$$

El resultado de fue: 130,000 es mayor que $X^2_c = 9.488$, de esta manera, se rechaza la H₀ hipótesis nula y se acepta la H₁ hipótesis alternativa, La evaluación de títulos se relaciona significativamente con el el procedimiento administrativo disciplinario.

Estos resultados son corroborados por la prueba bilateral asintótica cuyo valor es 0.000, menor a la probabilidad de $p_v = 0.05$.

Contrastación de hipótesis específica N° 3

Hipótesis específica 3:

El acceso al registro se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Hipótesis nula 0:

El acceso al registro no se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Hipótesis Alternativa:

El acceso al registro se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Pruebas de chi-cuadrado			
	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	75,369 ^a	4	,000
Razón de verosimilitud	81,063	4	,000
Asociación lineal por lineal	64,725	1	,000
N de casos válidos	130		

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,19.

H_1 El acceso al registro se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

H_0 El acceso al registro no se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

$X^2 = 75,365$ es mayor que $X^2_c = 9.488$

El resultado de fue: 75,365 es mayor que $X^2_c = 9.488$, de esta manera, se rechaza la H_0 hipótesis nula y se acepta la H_1 hipótesis alternativa, El acceso al

registro se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Estos resultados son corroborados por la prueba bilateral asintótica cuyo valor es 0.000, menor a la probabilidad de $p_v = 0.05$.

4.3. Discusión de resultados

Luego de la presentación de los resultados obtenidos a partir de los cuestionarios y del procesamiento estadístico, se analiza el conjunto en función a los objetivos y la hipótesis planteada del estudio mediante la discusión de lo obtenido versus resultados de estudios similares y antecedentes científicos, teóricos y existentes al respecto.

1. El resultado de nuestra Hipótesis Principal ha sido muy satisfactorio, para los propósitos de esta tesis, debido a que el resultado $X^2 = 27,576$ es mayor que $X^2_c = 9.488$, se rechaza la H_0 hipótesis nula y se acepta la H_1 hipótesis alternativa, por esta razón:

La calificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.

Sostenidos en nuestros antecedentes:

Peña Gregorio Salomón (2018). En la tesis titulada: Calificación registral de títulos por el juez y su incidencia negativa en la seguridad jurídica registral, análisis del artículo 2011 del código civil peruano. De la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. De la escuela de posgrado. como conclusión: Los registradores deben tener presente que no pueden renunciar su función de calificación de títulos, aunque estos provengan de la autoridad judicial, sin embargo, queda fuera del ámbito de la calificación los fundamentos o el contenido de la resolución, así como su adecuación a la ley.

- ii. El resultado de nuestra Hipótesis específica N° 1: El juicio de verificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario. Amparados en nuestra teoría podemos sostener que:

García (1993). Indica que, la calificación registral consiste en el juicio jurídico de valor que hace el registrador respecto a los documentos presentados como órgano imparcial y distinto del autor de los documentos.

Rimasacca (2015). Sostiene que, la calificación registral es un juicio lógico, examen, verificación o evaluación de los títulos presentados, los mismos contienen el derecho o acto rogado que serán materia de análisis para su respectiva inscripción, por parte de un funcionario, esto es, el registrador.

Además, teniendo en cuenta los resultados que fueron: El resultado de fue: 130,000 es mayor que $X^2_c = 9.488$, de esta manera, se rechaza la H_0 hipótesis nula y se acepta la H_1 hipótesis alternativa.

- iii. El resultado de nuestra Hipótesis específica N° 2, La evaluación de títulos se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario. El resultado de fue: 130,000 es mayor que $X^2_c = 9.488$, de esta manera, se rechaza la H_0 hipótesis nula y se acepta la H_1 hipótesis alternativa.

Sostenidos en nuestra teoría:

RGRP (2014). Define a la calificación registral, en su artículo 31, como la evaluación integral de los títulos presentados al registro que tiene por objeto determinar la procedencia de su inscripción.

Nuestros antecedentes:

Peña Gregorio Salomón (2018). En la tesis titulada: Calificación registral de títulos por el juez y su incidencia negativa en la seguridad jurídica registral, análisis del artículo 2011 del código civil peruano. De la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. De la escuela de posgrado. conclusión: Los registradores deben tener presente que no pueden renunciar su función de calificación de títulos.

- iv. El resultado de nuestra Hipótesis específica N° 3, El acceso al registro se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario. El resultado de fue: 75,365 es mayor que $X^2_c = 9.488$, de esta

manera, se rechaza la H_0 hipótesis nula y se acepta la H_1 hipótesis alternativa,

nuestros antecedentes internacionales:

Ramírez Gaitán Daniel Ubaldo (2017). En la tesis titulada: Alcances de la calificación registral de documentos notariales. De la Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de estudios de postgrado. Al concluir el proceso de investigación en el cual se llegó a establecer los límites y alcances de la calificación registral y las implicaciones de algunas medidas tomadas por la Dirección de Seguridad Registral del Registro General de la Propiedad.

Danós (1995). Señala que, la regulación de la potestad sancionadora, y por ende, del procedimiento sancionador, resultaba ser una novedad en el ordenamiento peruano, caracterizado por la inexistencia, hasta la emisión de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones:

1. Se pudo demostrar que, la calificación registral se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.
2. Los datos obtenidos permitieron establecer que, el juicio de verificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.
3. Se determinó que, la evaluación de títulos se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.
4. Se pudo concluir que, el acceso al registro se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario en la zona registral N° XII- Sede en Arequipa.

5.2. Recomendaciones

1. Se hace necesario crear una norma que pueda regular las funciones, deberes y sanciones del Registrador Público, por la cantidad de documentos de mucha importancia en su labor, así como las sanciones que se le deben aplicar si incurriesen en alguna infracción.
1. Es conveniente regular otorgarle al registrador al momento de la calificación de títulos las mayores herramientas posibles para evitar pueda errores en su función porque está muchas veces desprovisto de protección.
2. Es importante que se le pueda brindar capacitación especializada constante y además Registros Públicos debe buscar convenios con Universidades y otras instituciones nacionales y extranjeras para que

acceda el Registrador Público a estos beneficios, para que pueda calificar con mejores lineamientos.

3. Se hace necesario, que se garantice la autonomía, idoneidad y eficiencia de la función que cumplen los Registradores públicos y asistentes registrales en la carrera registral orientada a la especialización y simplificación a nivel nacional.

BIBLIOGRAFÍA

1. Álvarez Caperochipi Antonio (2010). Derecho inmobiliario Regsitral 3era edición, Juristas editores. Lima.
2. Amado Ramírez Elizabeth del Pilar (2018). Derecho Registral inmobiliario volumen II. Ediciones Legales. Lima.
3. Andrade Palomo, Gabriela (2017). En la tesis intitulada: Usurpación del ejercicio registral en la calificación de los registros de predios. De la U. Cesar Vallejo. Lima – Perú.
4. Arias Schreiber, Max (2001). Exegésis del código Civil peruano de 1984. Tomo X: Registros públicos: Gaceta jurídica. Lima – Perú
5. Atilio Cornejo Americo (1995). Derecho Registral. Astrea, Buenos Aires.
6. Chico y Ortiz José M. (2000). Estudios sobre Derecho hipotecario. Tomo I, 4ta edición, Marcial Pons, Ediciones juridicas y sociales. Madrid.
7. DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge, (1995) “Notas acerca de la facultad sancionadora de la Administración pública”, en *Ius et Veritas*, N.º 10, Lima: PUCP, p. 151.
8. Diez-Picazo Luis y Guillón Antonio (1977). Sistema de Derecho Civil. Vol. III, 6ta edición, Tecnos, España.
9. Gamero Casado eduardo y Ramos Fernando (2005) Manual básico administrativo. Madrid Editoriales reunidas
10. Gamero Casado, Eduardo y Fernando Ramos, Severiano, (2005) Manual básico administrativo, Madrid: Editoriales Reunidas, p. 172.
11. Gonzales Barron Gunther (2016). Los principios registrales en el conflicto judicial. Gaceta jurídica. Segunda edición. Lima – Perú.
12. Gonzales Loli Jorge Luis (2002). Comentarios al nuevo reglamento de los registros públicos. Gaceta jurídica. Lima.
13. González Pérez, Jesús, (1996) “Garantías frente a la facultad para sancionar de la Administración”, en *Temas de Derecho Procesal*. Memoria del XIV Congreso Mexicano de Derecho Procesal, México D.F: UNAM, , p. 754.

14. Guzmán Napurí Christian (2019). Procedimiento administrativo sancionador. Actualidad gubernamental. Instituto pacífico. Pacífico editores. Lima – Perú.
15. HUAPAYA TAPIA, Ramón, (2005) “¿Cuáles son los alcances del derecho al debido procedimiento administrativo en la Ley del Procedimiento Administrativo General?”, en Actualidad Jurídica, t. 141, Lima, p. 188.
16. MORALES LUNA, Félix, (2002) “Principios jurídicos y sistemas normativos”, en Foro Jurídico, N.º 1. Lima, pp. 153 y 154.
17. Moron Urbina, Juan Carlos, (2014) “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Lima: Gaceta, p. 132 y ss.
18. Palomar Olmeda, Alvaro, (1999) “Los principios en la Administración pública y las relaciones entre las Administraciones”, en Documentación Administrativa, N.º 254 - 255, Madrid: Ministerio para la Administraciones Públicas/Instituto Nacional de Administración Pública,p. 63.
19. PEDRESCHI GARCES, Willy, 2003 “Análisis sobre la facultad para sancionar de la Administración pública y el procedimiento sancionador”, en AA. W, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N.º 27444, Lima: Ara, pp. 536 y 537.
20. Peña Bernaldo de Quiros, Manuel (1999). Derechos reales. Derecho hipotecario.Tomo II – Derechos reales de garantías Registro de la propiedad, 3era, Centro de estudios Registrales. Madrid
21. Peña Gregorio Salomon (2018). En la tesis intitulada: Calificación registral de títulos por el juez y su enfoque negativo en la seguridad jurídica registral, análisis del art. 2011 del C.C peruano. De la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Escuela de posgrado.
22. Pérez Rojas René Oswaldo (2018). En la tesis intitulada: La no inscripción de la documentación presentada ante Registros Públicos para un registro de propiedad después de haber pasado por una concienzuda calificación registral.
23. Puerta Tuesta Julio César (2017). En la tesis intitulada: La documentación complementaria: la problemática para calificar registralmente los instrumentos de la administración desde el Código Civil Peruano. PUCP.
24. Ramírez Gaitán Daniel Ubaldo (2017). En la tesis intitulada: La calificación registral de documentación en la vía notarial. De la U. San Carlos en Guatemala Escuela de estudios de postgrado.

25. RGRP (2014). <https://www.sunarp.gob.pe/>
26. Rimasacca Huaranca Ángel (2015). El derecho Registral. En la jurisprudencia del Tribunal Registral. Editorial Gaceta jurídica. Lima – Perú
27. Silva Vallejo José (2018). Diccionario jurídico. ABC. Ediciones legales. Primera edición.
28. Suay Rincón, J., (1989) Sanción Administrativa, Bolonia: Publicaciones del Real Colegio de España, p. 277.
29. Tribunal Registral (2012). Resolución 029-2012-SUNARP-SA
30. VÉLEZ GARCÍA, Jorge, (1996) Los dos sistemas de derecho administrativo, Santa Fe - Colombia: Institución Universitaria Sergio Arboleda, p. 323.

Anexos

ANEXOS: 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA

LA CALIFICACIÓN REGISTRAL Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA ZONA REGISTRAL N° XII- SEDE EN AREQUIPA

TÍTULO	DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS	CLASIFICACIÓN DE VARIABLES	DEFINICIÓN OPERACIONAL	METODOLOGÍA	POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO	TÉCNICA E INSTRUMENTO
“LA CALIFICACIÓN REGISTRAL Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA ZONA REGISTRAL N° XII- SEDE EN AREQUIPA.”.	<p>Problema Principal ¿De qué manera se relaciona la calificación registral con el procedimiento administrativo disciplinario?</p>	<p>Objetivo General. Determinar la relación de la calificación registral con el procedimiento administrativo disciplinario.</p>	<p>Hipótesis principal: La calificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.</p>	<p>Variable Independiente Calificación Registral (V.I.)</p>	<p>Calificación Registral (V.I.)</p>	<p>Tipo: Aplicativo Nivel: Descriptivo.</p>	<p>Población. Para realizar este proyecto de investigación se considera a la población universal de 200 Abogados especialistas en el tema Notarial y Registral de la ciudad de Lima.</p>	<p>Técnica de Recolección de datos.</p>
	<p>Problemas Específicos ¿De qué manera se relaciona el juicio de verificación con el procedimiento administrativo disciplinario?</p>	<p>Objetivos Específicos: Establecer la relación del juicio de verificación con el procedimiento administrativo disciplinario.</p>	<p>Hipótesis específicas: El juicio de verificación se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.</p>		<p>Juicio de verificación</p>	<p>Diseño: M1: Ox – Oy</p>		<p>Instrumento: Encuesta.</p>
	<p>¿De qué manera se relaciona la evaluación de títulos con el procedimiento administrativo disciplinario?</p>	<p>Determinar la relación de la evaluación de títulos con el procedimiento administrativo disciplinario.</p>	<p>La evaluación de títulos se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.</p>	<p>Variable Dependiente Procedimiento Administrativo (V.D.)</p>	<p>Evaluación de títulos</p>		<p>Muestra. Mediante esta fórmula se pudo establecer que fueron 130 abogados especialistas en la materia de la ciudad de Arequipa.</p>	
	<p>¿De qué manera se relaciona el acceso al registro con el procedimiento administrativo disciplinario?</p>	<p>Determinar la relación del acceso al registro con el procedimiento administrativo disciplinario.</p>	<p>El acceso al registro se relaciona significativamente con el procedimiento administrativo disciplinario.</p>		<p>Acceso al registro</p>			
					<p>Procedimiento Administrativo (V.D) Procedimiento sancionador</p>			
					<p>Responsabilidad administrativa</p>			
					<p>Comisión de una infracción</p>			

ANEXO: 2
ENCUESTA PARA LOS REGISTRADORES PÚBLICOS DE LA ZONA
REGISTRAL N° XII – SEDE AREQUIPA

Investigación titulada: **LA CALIFICACIÓN REGISTRAL Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. ZONA REGISTRAL N° XII – SEDE AREQUIPA.**

INTRUCCIONES: DEBE MARCAR CON UNA X ASPA LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERE CORRECTA.

Calificación Registral

- 1) El juicio de verificación debe estar a cargo del Registrador público
 - a) Si ()
 - b) No ()
 - c) Desconoce ()

- 2) El registrador protege los recursos institucionales, bienes activos y la información
 - a) Desacuerdo ()
 - b) De acuerdo ()
 - c) Total. De acuerdo ()

- 3) Nivel del juicio de valor de los documentos que analiza el registrador público
 - a) Bajo ()
 - b) Medio ()
 - c) Alto ()

- 4) El registrador público tiene lealtad, honestidad, equidad y tolerancia en su labor evaluativa
 - a) Si ()
 - b) No ()
 - c) Desconoce ()

- 5) El registrador en la evaluación de títulos actúa con responsabilidad, buena fe y transparencia
- a) Si ()
 - b) No ()
 - c) Desconoce ()
- 6) El registrador en su labor profesional guarda privacidad, prudencia y el cumplimiento del debido proceso.
- a) Si ()
 - b) No ()
 - c) Desconoce ()
- 7) Nivel de acceso al registro en nuestro país
- a) Bajo ()
 - b) Medio ()
 - c) Alto ()
- 8) El acceso al registro es accesible para los ciudadanos
- a) Nada accesible ()
 - b) Accesible ()
 - c) Total. accesible ()
- 9) El registrador garantiza la seguridad en la calificación
- a) Si ()
 - b) No ()
 - c) Desconoce ()
- 10) El procedimiento sancionador se aplica a Registros Públicos
- a) No se aplica ()
 - b) Se aplica ()
 - c) Total. Aplicado ()

- 11) El nivel del procedimiento sancionador debe:
- a) Bajo ()
 - b) Medio ()
 - c) Alto ()
- 12) Se debe determinar la responsabilidad del Registrador
- a) Desacuerdo ()
 - b) De acuerdo ()
 - c) Total. De acuerdo ()
- 13) Nivel de comisión de infracción por parte de los Registradores Públicos
- a) Bajo ()
 - b) Medio ()
 - c) Alto ()
- 14) Bases de la carrera administrativa y remuneraciones
- a) Profesional y técnico ()
 - b) Funcionarios y servidores públicos ()
 - c) Profesional, técnico y auxiliar ()
- 15) Ley del servicio Civil, sanciones pueden ser:
- a) Amonestación verbal, Amonestación escrita, suspensión, destitución e inhabilitación ()
 - b) Amonestación, Suspensión, Cese Temporal y Destitución. ()
 - c) Cese definitivo y destitución ()
- 16) Infracción por parte de los registradores debe ser sancionada
- a) No debe sancionarse ()
 - b) Debe sancionarse ()
 - c) Sanción severa ()

- 17) Considera que los Registradores deben tener su propia norma
- a) Desacuerdo ()
 - b) De acuerdo ()
 - c) Total. De acuerdo ()
- 18) Esta de acuerdo con el el plazo de prescripción en la Ley del procedimiento administrativo.
- a) Dos años ()
 - b) Tres años ()
 - c) Cuatro años ()
- 19) La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones
- a) Se aplica supletoriamente ()
 - b) No tiene predominio de la ley específica ()
 - c) Predomina la ley específica sobre la materia ()
- 20) Ley N° 30057 Ley de servicio civil faculta a cualquier entidad pública determinar las infracciones administrativas a imponer
- a) Definitivamente en contra ()
 - b) Probablemente a favor ()
 - c) Total. A favor ()